

Narcotráfico y Política

Militarismo y mafia en Bolivia

Por Latin America Bureau

DOCUMENTO EXTRAÍDO DE

<http://www.derechos.org/nizkor/>



PRESENTACIÓN^[1]

La presente publicación pretende únicamente analizar los nexos que existen entre el narcotráfico y la política en el caso específico de Bolivia.

Los problemas que emergen del narcotráfico y de la drogadicción son sumamente complejos. Tienen relación con el tipo de sociedad de consumo imperante en los países industrializados, así como con la economía. Sólo en Estados Unidos el tráfico de drogas alcanza anualmente un volumen de transacciones económicas que superan los 50.000 millones de dólares. Tienen relación también con la salud de los adictos a su consumo, implicaciones policiales con respecto al tráfico ilegal, a la violencia, al crimen que, con demasiada frecuencia, forman el cortejo sangriento que acompaña al comercio y al uso de las drogas.

El presente trabajo no pretende abarcar todos esos aspectos. Se limita a analizar la relación entre narcotráfico y poder político en uno de los países en los que la producción de la pasta básica de cocaína y la fabulosa cantidad de dinero que ella ha generado, han influido de un modo tan determinante como negativo.

La producción, la elaboración y el tráfico de cocaína en Bolivia, en términos de política nacional e internacional, le han sido totalmente adversos. El 60% de la cocaína que ingresa a los Estados Unidos es de origen boliviano, aunque sean colombianos los que mayormente intervengan en la etapa final de la «cristalización» de la cocaína y en la internación ilegal a ese país, en connivencia con los grupos mafiosos que operan mayormente en Florida.

El desafío al cual se ha querido responder es el de descubrir y cuantificar la interrelación entre narcotráfico y política en Bolivia. Precizando más el objetivo podríamos decir que se ha buscado ver la mutua relación entre los narcotraficantes y su poder político real. En una especie de interrelación de fuerzas corruptas, aparecen los narcotraficantes haciéndose con el poder y los poderosos, haciéndose narcotraficantes. Los autores llegan a una conclusión que no puede menos de llamar la atención a nivel internacional: la mafia boliviana, superalimentada económicamente por los «cocadólares» no solamente tiene poder; es el poder mismo. Su desproporcionado e ilegítimo poder económico se ha convertido en un poder político absoluto y dictatorial.

El asalto al poder se lo hace a través de los golpes de estado. El golpismo en Bolivia (al menos en sus ediciones más recientes) surge, cada vez con más frecuencia y con menos viabilidad, empujado y manipulado por el narcotráfico. Unas veces para proteger a los narcotraficantes y otras para impedir que un gobierno constitucional investigue toda esa actividad ilegal.

El narcotráfico es la médula del fascismo boliviano, un fascismo, que, al no contar con el aparato partidario eficaz, se ha mimetizado con la cúpula militar y ha instrumentalizado toda su estructura en función de sus intereses.

De otro lado, los narcotraficantes bolivianos, por intermedio del todopoderoso coronel Luis Arce Gómez, han logrado formar una especie de «guardia pretoriana» que protege celosamente la producción y el comercio internacional de la droga: son los paramilitares. Ellos constituyen la razón del inmenso poder intimidatorio de Arce Gómez. El gobierno constitucional que pueda establecerse en Bolivia, por más apoyo popular que tenga, se verá peligrosamente amenazado por quienes se sienten más poderosos que el propio Estado.

El equipo constituido por Latin American Bureau no ha pretendido hacer un trabajo de investigación erudita. Casi toda la documentación que ha manejado ha salido ya a la luz pública. Los periódicos y las revistas de mayor prestigio internacional han publicado numerosos trabajos referentes al «boom» de la cocaína y a las implicaciones políticas que los «coca-dólares» han tenido con relación al golpismo en Bolivia. Es la prensa internacional quien, precisamente, se adelantó a denunciar al gobierno de García Meza como el gobierno de los narcotraficantes. Era necesario sistematizar tanta documentación dispersa, no sólo con el afán de ofrecer un resumen, sino, y sobre todo, para llegar a sacar algunas conclusiones importantes y prácticas.

La estructura del libro es sencilla. En una primera parte se analiza muy someramente el salto histórico que se da desde la coca hasta la cocaína. Desde la coca, como materia prima, ancestral y con gran significado telúrico para los pueblos aymaras y quechuas hasta la cocaína, la droga preferida por los artistas, por los ejecutivos y por las clases sociales más sofisticadas de los países industrializados.

En la segunda parte y entrando ya en el objetivo propio de la publicación, se analiza el cómo y el por qué la mafia se hace con el poder en Bolivia y el papel protagónico, que en esta actividad delictiva les cabe a los grandes «padrinos» y, particularmente, a un nutrido grupo de jefes militares. Pero esa mafia no hubiera podido llegar al poder sin la colaboración, no pocas veces criminal, de los grupos paramilitares, organizados y entrenados por connotados neonazis extranjeros.

El último capítulo se refiere concretamente a las implicaciones que, en todo el problema del narcotráfico y de la toxicomanía tiene Estados Unidos como víctima y como culpable.

El libro, aunque en algunos de sus capítulos parezca una historia novelada, es palpitante como la propia realidad que analiza. Sus datos estremecen y sus conclusiones suenan a denuncias. El mundo actual se enfrenta a uno de los problemas de más difícil solución: el problema de las drogas.

Nota de la edición digital. Este libro fue publicado en el año 1982. La presente edición sólo se diferencia de aquella en el agrupamiento de los anexos en un capítulo aparte al final del libro.

DE LA COCA A LA COCAÍNA

1. Una Vieja Historia

La coca, al igual que la papa o el maíz, pertenece, sin duda, al patrimonio cultural del continente americano. Según el excelente estudio "Mama Coca" del etnólogo Antonil, editado en Londres en 1978, sus orígenes se remontan a los comienzos del período postglaciar, cuando el arbusto hoy conocido como «*Erythroxylum coca*» debe haber sido descubierto en las faldas orientales de los Andes centrales por los pequeños grupos de nómadas que empezaron a poblarlas.

Las más antiguas pruebas arqueológicas del consumo humano de la hoja de coca datan del IV período precerámico, que se extiende desde el año 2.500 hasta el año 1.800 antes de Cristo. La presencia milenaria de la coca en las sociedades andinas también ha sido corroborada por la costumbre ancestral de enterrar a los muertos junto con bolsas de hojas de coca en calidad de viático para el «largo viaje a la eternidad».

Por otra parte, la cerámica de la mayor parte de las culturas precolombinas en abundante testimonio de la práctica masticatoria de la hoja de coca en lo que hoy son Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia ([4](#)). Asimismo, la tradición oral nos habla del carácter telúrico de la coca: entre los aymaras de Bolivia aún se transmiten de generación en generación mitos y leyendas acerca del origen del «divino arbusto» en las tierras fértiles del antiguo Kollasuyo.

Aunque aún no está totalmente zanjada la cuestión de si en la antigüedad americana el consumo de la hoja de coca ya era universal o, más bien, estaba restringido a ciertas élites, sí se sabe que en la civilización incaica la coca desempeñó un rol de primera importancia. El Estado la usaba tanto para la diplomacia del Inca (como expresión de amistad o de retribución de servicios) como también en el ceremonial religioso de la corte imperial; igualmente servía como moneda o instrumento general de intercambio, pues se practicaba el trueque de coca por otros productos.

Lo que no parece haber existido es un control o «monopolio» por parte de la casta gobernante sobre el conjunto de la producción, distribución y consumo de la coca por la sencilla razón de que no había medios para ejercerlo en todo el ámbito del gigantesco imperio. Por eso, para asegurar la satisfacción de las necesidades del Estado y el consumo personal de sus funcionarios, la administración incaica no se contentó con imponer a los pueblos conquistados el pago de un tributo en coca, sino que, además de ello, organizó un sistema de producción estatal de coca en plantaciones que pasaron a ser propiedad del Inca; en ocasiones, los propios trabajadores (mitimaes) eran utilizados para «expropiar» las cosechas de las plantaciones no estatales.

Además de las funciones económica, política y social que tenía la coca en la vida pública andina, no cabe duda de que, desde antiguo, también poseía un valor de carácter sagrado, relacionado con el mundo de las creencias religiosas. Así, los cronistas coloniales relatan la costumbre de los aborígenes de echar hojas de coca al suelo, en honor a la Pachamama (Madre Tierra), al iniciar las cosechas o al edificar una casa; o la costumbre de ofrecer algunas hojas al dios Inti (Sol) o al fuego antes de ponerse a coquear.

Cuando sobrevino la invasión española, a comienzos del siglo XVI, la coca no tardó en ser asimilada por la nueva economía colonial. Las plantaciones de propiedad del Inca fueron distribuidas, por «encomienda» de la Corona española, a ciertos colonos y se autorizó el pago de las deudas en hojas de coca. Ya en 1548, dieciocho de los cuarenta y cuatro «encomenderos» de Charcas recibían hojas de coca como parte del tributo que habían impuesto a los indígenas.

En la segunda mitad del siglo se produce un auténtico «boom» de la coca. Su causa principal es, sin duda, la concentración demográfica que se forma en torno a las minas de plata de Potosí: con 120.000 habitantes, Potosí era, en 1573, más grande que Sevilla, Madrid, Roma o París. El descubrimiento de que las virtudes energéticas de la coca aumentaban el rendimiento de los «indios» forzados a trabajar en las minas, a pesar de las condiciones infrahumanas que les impusieron los «conquistadores», condujo a la burocracia colonial española a la conclusión de que, así como «las Indias» no eran nada sin Potosí, la colosal máquina potosina dejaría de funcionar sin la coca.

De este modo se creó un enorme mercado consumidor de la hoja de coca, a razón de 100.000 cestos (de unas 20 libras cada uno) por año. Numerosos colonos empezaron a dedicarse exclusivamente al comercio de la coca, mientras otros abrían nuevas plantaciones para aprovechar la creciente demanda proveniente de las minas. En poco tiempo, el tráfico de la coca se convirtió en un gran negocio y en el origen de fabulosas fortunas, además de ser la segunda fuente de ingresos de la Corona española. En el Cuzco, de donde salía el grueso de la producción con destino a Potosí, cuatrocientos mercaderes españoles engordaban a expensas de la coca y tanto el obispo como el resto de la frondosa jerarquía eclesiástica extraían la mayor parte de sus rentas de los diezmos sobre la coca.

Hacia mediados del siglo XVII, los Yungas de La Paz empiezan a desplazar al Cuzco como principal zona productora de coca durante el coloniaje. En el último cuarto del siglo XVIII, su producción oscila entre los 230.000 y los 300.000 cestos; el 88 % de la misma procede de 341 haciendas, todas ellas propiedad privada de criollos o mestizos. Fue en esa época que, ante la insuficiencia de la mano de obra local, los propietarios empezaron a comprar esclavos africanos en el puerto de Buenos Aires.

Así fue como, durante el coloniaje español, la coca entró a formar parte de una economía de mercado. Pero también se integró en la cultura colonial bajo otras modalidades. Los médicos, por ejemplo, la incorporaron a su farmacopea como medicamento contra el asma, las hemorragias, los dolores de muelas, las fracturas de huesos, los vómitos.. la diarrea, etc. Toda la sociedad colonial terminó haciendo uso de ella bajo la forma de inhalaciones, infusiones o cataplasmas. En cuanto al hábito de su masticación, trabajadores blancos, mestizos y negros también terminaron rindiéndose a sus bondades.

Tras la expulsión del colonialismo español en el primer cuarto del siglo XIX, la coca siguió ocupando un lugar destacado en las costumbres y en la economía de las nuevas naciones andinas. Así, en Bolivia, la producción yungueña sigue batiendo todos los récords: en 1882, sólo 200 haciendas producen más de 200.000 cestos anuales, pero 80 de ellas acaparan el 75%. En la «Sociedad de Propietarios de Yungas» se concentran también los intereses del grupo terrateniente local. Para pertenecer a ella, basta con producir 25 cestos de coca por cosecha; pero el que produce más de 300 tiene doble voto.

Mientras tanto, poco o nada ha cambiado en la vida de los aymaras y quechuas, que siguen siendo la gran mayoría de la población. Reducidos a una extrema pobreza, segregados de la sociedad oficial y carentes de todo poder, su batalla es la de la supervivencia. Y, cuando la paciencia se acaba, la de la rebelión en busca de un mañana mejor. Y en todas ellas también los acompaña la coca.

2. Un Viejo Debate

Si bien la coca forma parte de la riqueza natural y cultura del mundo andino desde la más remota antigüedad, el debate sobre la conveniencia o no de su consumo sólo comenzó con la llegada de las culturas europeas.

Desde los albores mismos del coloniaje, los invasores se pusieron a discutir acaloradamente entre ellos sobre si se debía o no seguir «tolerando» la costumbre universal de usar la coca con que se encontraron en el Perú. Así, mientras el «geopolítico» Juan de Matienzo defendía las virtudes energéticas de la masticación de la coca en nombre de la explotación de la fuerza de trabajo indígena («el zumo de la coca que se meten a la boca les quita parte de la natural pereza y flojedad que tienen», 1567), los oscurantistas del primer Concilio eclesiástico de Lima (1551) condenaban cualquier empleo de la hoja a causa de sus «propiedades satánicas» vinculadas con una religión pagana.

Sin embargo, todos los debates estuvieron viciados desde el comienzo por una limitación inherente a ellos que aún subsiste hasta nuestros días: han sido debates en el seno de las clases dominantes, cuyos miembros (españoles, criollos, mestizos) se enzarzaban en opiniones más o menos enfrentadas sobre la conducta que debían observar los aborígenes, mientras que los verdaderos interesados no tenían ninguna oportunidad de hacer oír sus puntos de vista. Además, desde el momento en que hubo colonos que se pusieron a cultivar y mercadear la coca, toda opinión quedó marcada por el juego de los intereses económicos.

Ese es, sin duda, uno de los factores que más han entorpecido y desfigurado el debate sobre el consumo tradicional de la hoja de coca: la falta de respeto y el colonialismo cultural de que han sido víctimas desde las invasiones europeas todos los habitantes aborígenes del continente americano. Desde los "conquistadores" del siglo XVI hasta los tecnócratas del siglo XX, el punto de vista con que se ha enfocado la cuestión de la coca ha sido casi siempre el punto de vista "colonial".

Así, no sólo en el siglo XVII podían escucharse exabruptos como el del cronista Huaman Poma de Ayala ("No dejan el vicio y la mala costumbre sin provecho, porque quien la toma lo tiene sólo en la boca, ni traga ni lo come") o, en el siglo XVIII, como el del Intendente de Potosí, F. de P. Sanz: "No hay alguno de las castas dichas que empiece a enviciarse en el mascado y jugo de esta hoja que por más ágil, más activo y más laborioso que sea, no empiece a entorpecerse en todo hasta llegar a un estado de estupidez."

En pleno siglo XX, la "Revista Española de Antropología Americana", editada en Madrid (España), daba curso a esta tesis "científica": "El hábito de la coca es uno de los problemas más importantes que existe en los países cuyos aborígenes se hallan entregados al vicio de esta grave toxicomanía que produce estragos y es, quizá, una de las causas principales que tiene sumidos a más de siete millones de indios, mestizos y blancos de América del Sur en un estado de apatía y abulia (...) sin estímulo para adoptar los cambios materiales, el progreso" (núm. 6, 1971, página 179).

Huelgan los comentarios. El carácter neocolonialista cuando no racista de esta visión disfrazada de paternalismo y progresismo salta a la vista. En cambio, los antropólogos opuestos al esquema de visión "colonial" se han preocupado de averiguar primero qué significa la coca hoy en día para los campesinos de Bolivia y Perú. De este modo han descubierto lo que bien podría denominarse una "cultura de la coca"; es decir, han empezado situando el lugar que ocupa la coca dentro del universo cultural indoamericano.

Buena muestra de esta nueva antropología es la obra colectiva de los norteamericanos William Carter y P. Parkerson y de los bolivianos Mauricio Mamani y José Morales, "La coca en Bolivia", editada en La Paz (Bolivia) en 1980. En ella, los autores demuestran, mediante encuestas, que, tanto en el campo, como en la mina o en la ciudad, los aymaras y

quechuas de Bolivia siguen masticando coca cuando trabajan, no sólo por razones energéticas, sino también porque el coqueo ya forma parte de las relaciones de trabajo.

La coca, sin embargo, tiene un radio de acción que va más allá de sus virtudes fisiológicas: es un componente fundamental de toda relación social. No hay circunstancia alguna en que se encuentren varias personas, tanto hombres como mujeres, que no sea buena para coquear. No se puede comprar una vaca u otro animal en la feria sin que el presunto comprador invite previamente al vendedor con un puñado de hojas de coca; una vez entablado el coqueo, sólo entonces se podrá discutir el precio.

Ninguna autoridad local puede recibir la visita de sus bases sin que éstas le ofrezcan coca como primer paso. Igualmente, quien se beneficia de la ayuda de otros para cualquier trabajo (recoger la cosecha o levantar una casa) ha de proveer de hoja de coca a sus cooperantes como gesto mínimo de recompensa.

Sólo ahora se empieza a descubrir y comprender lo que significa la coca para millones de personas. Como dicen los autores de la obra citada, "en ninguna otra parte del mundo encontramos una sustancia tan vital a la integración social como es la coca en las comunidades andinas tradicionales."

Pero aún hay algo más. Independientemente de su connotación de tipo religioso -con las hojas de coca se puede "leer" el futuro o «indagar» en lo desconocido-, la coca desempeña hoy en día también una profunda función psicológica. Se podría decir que el hombre andino encuentra en ella uno de los pocos asideros que le quedan de su identidad cultural. Sometido hasta hace poco a un régimen de servidumbre humillante por el «hombre blanco», manipulado siempre por los amos, patrones, caciques y generales de turno, acorralado y alienado en su propio territorio, el aymara y el quechua (campesino, minero o cargador) encuentra en la coca una especie de «refugio», que le da fuerza para seguir sobreviviendo en medio de tanta adversidad. Mascando coca, afirma su identidad. La coca es su hilo de continuidad histórica como colectividad que no se rinde ante la «civilización» y el «progreso».

Como dice el antropólogo peruano Mayer, «la coca es un poderoso símbolo de identidad y de solidaridad de grupo, que separa claramente a los que están con ellos y los que no. De allí también la frustración e impotencia que la clase dominante siente y que correctamente ve en la coca una de las mayores barreras de penetración y captura de la imaginación indígena. Y es por esto que tenemos violentos ataques a la coca y los exagerados efectos dañinos que supuestamente causaría a la población».

Lo mismo pasa en Bolivia: «La minoría hispánica dominante en Bolivia tiende a ver el consumo de la coca como una cosa sucia, atrasada y, en algunos casos, inclusive como una costumbre peligrosa. Tienen razón al desconfiar de ella, ya que es por medio del ofrecimiento y la aceptación de la coca dentro de las normas tradicionales prescritas que los habitantes de las comunidades indígenas de Bolivia establecen la confianza, excluyen a los forasteros y conservan con orgullo su herencia propia» («La coca en Bolivia»).

3. La Coca en el Banquillo

En 1925, a orillas del apacible lago de Ginebra (Suiza), se reunía la II Conferencia Internacional del Opio en el marco de la Sociedad de las Naciones y declaraba a la coca «nociva para la salud». Como era de esperar, la delegación boliviana se opuso y lo hizo en nombre del consumo popular de la coca en su país. Ciertamente, no lo hizo por solidaridad con la cultura de los pueblos andinos, sino porque los miembros de la delegación no eran más que portavoces de los intereses económicos que defendía la «Sociedad de Propietarios de Yungas».

Durante un cuarto de siglo, los productores bolivianos de coca combatieron el veredicto de la Sociedad de las Naciones argumentando que el uso tradicional de la hoja de coca por parte de los habitantes autóctonos de los Andes no llegaba a rebasar los límites de las defensas orgánicas y destacando, sobre todo, su valor nutritivo en vitaminas. En dos ocasiones (1928 y 1948), los productores patrocinaron sendos estudios sobre los beneficios del consumo de la coca, con el fin de contrarrestar la opinión prevaleciente en la Sociedad de las Naciones.

Pero de poco valieron tales esfuerzos. En 1948, la recién creada Organización de las Naciones Unidas (ONU) bajo influencia norteamericana ordenó una investigación sobre la coca y el hábito de su masticación en Perú y Bolivia. Tras visitar ambos países en 1949-1950, la comisión investigadora dictaminó que la masticación de la hoja de coca es «peligrosa para la salud», aunque no es propiamente una toxicomanía, ya que entre sus «efectos perjudiciales» figuran:

- a) la «desnutrición», a causa del poder inhibitorio de la sensación de hambre que poseen los jugos de la hoja masticada;
- b) «modificaciones desfavorables» de tipo «intelectual y moral»,
- c) la «reducción del rendimiento» económico-laboral.

Esta tesis adquirió rango de dogma en el seno de la ONU. Una vez sentada, la comisión procedió a recomendar que, en el plazo máximo de quince años, la producción de la coca sea suprimida. Desde entonces, la coca está sentada en el banquillo de los acusados de la ONU y es objeto, año tras año, de toda clase de deliberaciones e informes a cargo de sus organismos especializados.

¿Por qué tanta saña? Todo había comenzado a fines del siglo pasado, cuando la hoja de la coca empezó a ser utilizada también como materia prima para la elaboración de cocaína con destino a la drogadicción.

Según uno de los informes anuales de la ONU (1973), el uso de la cocaína como droga se extendió ampliamente en Europa y en los Estados Unidos entre 1900 y 1910, para luego casi desaparecer del mercado entre las dos guerras mundiales y aparecer otra vez al terminar la segunda. De ahí la preocupación de la ONU.

Así, por ejemplo, en 1957, la Comisión de Estupefacientes de la ONU se felicitaba de que, según informaciones del gobierno boliviano, «la masticación de la hoja de coca está en camino de desaparecer gracias a la aplicación de la Ley de Reforma Agraria y de la Ley de Reforma Educativa, así como a la integración de todas las clases de la población autóctona a la vida civil de la nación».

Dos años más tarde, sin embargo, la Comisión de Control del Opio ensombrecía el panorama asegurando, en términos confusos, que «la masticación de las hojas de coca es la causa principal del tráfico internacional ilícito, al que también se dirige la fabricación clandestina de cocaína».

En 1963, el Comité Central Permanente del Opio dio el primer grito de alarma: el gobierno de Bolivia no está cumpliendo sus compromisos con la ONU, pues, según datos de la Comisión de Estupefacientes, la producción real de coca no sólo no estaría disminuyendo y tampoco sería de sólo 3.000 Tm. anuales -tal como declaró oficialmente el gobierno de Bolivia en 1962-, sino que llegaría a las 12.000 Tm. anuales, de las cuales sólo la mitad sería utilizada para la masticación, quedando la otra mitad libre para la fabricación clandestina de cocaína.

Bolivia aparecía, pues, así, por primera vez, acusada de estar funcionando como país exportador de cocaína. Ante semejante situación, el gobierno procedió a invitar a una misión especial de la ONU, ante la que se comprometió, en enero de 1964, a:

- 1) Reducir la producción de coca hasta su extinción total, en el plazo máximo de 25 años;
- 2) Hacer disminuir el coqueo hasta llegar a su absoluta abolición, utilizando para ello, «por todos los medios, la propaganda contra el hábito de la masticación: libros, escolares, prensa, radio, cine, etc.»;
- 3) Luchar contra el narcotráfico y la toxicomanía.

En 1965, la ONU se quejaba ante el recién instalado régimen militar en Bolivia de que, quince años después de iniciada la guerra contra la coca, «las seguridades dadas en varias ocasiones anteriores por el gobierno han quedado sin efecto» y de que «hasta ahora no ha recibido ninguna información sobre la aplicación de las medidas cuya ejecución inmediata se había estipulado», expresando su confianza en la voluntad del nuevo gobierno.

A partir de 1968 empezó a funcionar una Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), que, desde su primer informe, asumió acriticamente la opinión generalizada de que el coqueo es «un pernicioso hábito arraigado desde hace mucho tiempo entre los indios andinos» y «un problema sanitario local» que «obstaculiza el progreso económico y social de aquella región».

Al mismo tiempo, la JIFE ponía otra vez el dedo en la llaga de la confusión mencionando de paso que «en los últimos años ha habido indicios inequívocos de la intensificación del tráfico ilícito de cocaína». Sin embargo, el estudio de la Comisión de Estupefacientes sobre el tráfico de drogas en el período 1970-1971 no incluye la menor alusión a Bolivia.

En 1971, la JIFE volvió a constatar el fracaso de la política de la ONU en Bolivia («la Junta lamenta profundamente no haber podido lograr, a pesar de los repetidos esfuerzos realizados, la cooperación eficaz de las autoridades nacionales en el cumplimiento de los tratados sobre estupefacientes») y lanzó al mundo dos nuevas tesis:

- 1) Mientras subsista el coqueo, es imposible evitar la fabricación clandestina de cocaína, que inundará el mercado internacional,
- 2) La «comunidad mundial» cree que «la buena vecindad internacional», exige «animar» y «ayudar» a los gobiernos de Perú y Bolivia a que supriman el cultivo organizado del arbusto de la coca.

Siete años después, la JIFE reconocía que «las dimensiones sociales, económicas y políticas de este problema son tales que, a pesar de todas las declaraciones de buenas intenciones, no se ha producido ningún retroceso de los cultivos». Era la confesión de casi treinta años de miopía. Al mismo tiempo, la JIFE daba señales de estar tomando conciencia de que el problema del narcotráfico de cocaína no es un asunto de la coca, sino del mundo de las mafias, cuando planteaba que «sería deseable que los gobiernos (...) se decidan a someter a pesquisas más estrictas los movimientos de capitales vinculados al financiamiento del tráfico internacional de drogas. Esto podría hacer posible la identificación de quienes lo financian, es decir, de sus auténticos organizadores».

Resulta evidente que el punto débil fundamental de la retórica de la ONU radica en la involucreción que hace entre dos asuntos diferentes e independientes -el de la masticación de la hoja de coca y el de la elaboración de cocaína para el mercado internacional-, cuya confusión nace del estereotipo que se creó en 1950 a partir del único estudio internacional que se hizo sobre el terreno acerca de la significación del coqueo. Y es que en la ONU también sigue predominando el punto de vista «colonial».

4. La Droga de los Ricos

El proceso que se sigue para la elaboración de la cocaína es el siguiente: se abren en la tierra unos fosos de unos cinco metros de largo por medio metro de profundidad y sus paredes se las reviste con nylon o polietileno. En ellos se vacían los recipientes de hojas de coca, que generalmente son fardos conocidos como «tambores», cubiertos con hojas de plátano.

Las hojas de coca secas son mezcladas en los fosos con ácido sulfúrico diluido en agua, que actúa como disolvente. La masa que se forma es entonces pisoteada hasta que se convierte en una pasta. Acto seguido se le añade kerosene, que hace que el alcaloide suba a la superficie. El jugo es trasladado a unos recipientes adecuados, donde se lo va secando en prensas y al sol. Con ello se ha logrado ya el sulfato de cocaína, también llamado «base» o «pasta básica». Esta pasta puede ser mezclada con tabaco y consumida como cigarrillo («pitillo» o «porro»), pero la dosis de cocaína que inhala el fumador es ínfima.

Una vez obtenida la «base», el proceso generalmente continúa. La pasta de sulfato es lavada para quitarle todas las impurezas. Para esta operación se solía utilizar éter, pero debido a su olor muy fuerte ha sido sustituido por acetona. Una vez lavada la pasta básica, se le añade ácido clorhídrico y se obtiene el producto final: el sulfato se ha convertido en clorhidrato de cocaína, es decir, en cocaína pura.

De 110 kg. de hoja de coca se fabrica 1 kg. de sulfato base; con 2,5 kg. de esta pasta se obtiene 1 kg. de pasta «lavada» y de ésta se puede sacar, dependiendo de la habilidad del químico, más de 600 gr. de cocaína pura. Para que rinda más, se suele mezclar la cocaína pura con polvos de talco o azúcar muy refinada; así, de 1 kg. de cocaína pura puede llegar a sacarse hasta 10 kg. de cocaína adulterada.

La forma de consumo del clorhidrato de cocaína es por aspiración nasal, para lo cual suele utilizarse cualquier instrumento en forma de tubo (por ejemplo, un bolígrafo sin carga interna o un billete enrollado). Un gramo de cocaína pueda dar para un mínimo de 6 y un máximo de 20 aspiraciones; el efecto de una aspiración por cada fosa nasal suele durar al menos 30 minutos. Pero esto, naturalmente, depende del grado de pureza de la cocaína inhalada.

Es difícil precisar cuál es la dosis de cocaína capaz de producir un efecto específico, no sólo a causa de la falta de información, sino también porque en distintas personas se registran reacciones diferenciadas. Así, una misma dosis puede producir en un individuo un estímulo ligero, mientras que en otro la misma dosis puede crear una reacción paranoide. Algunas experiencias de laboratorio sugieren que la cocaína tomada por vía bucal no produce efectos eufóricos o sólo de forma muy mitigada. En cambio, por vía intravenosa puede ser peligrosa.

Aunque aún no están suficientemente estudiados los efectos de los demás alcaloides que contiene la hoja de coca además de la cocaína, todas las opiniones concuerdan en reconocer que tanto la hoja de coca como la cocaína eliminan o mitigan la fatiga, permitiendo al consumidor entregarse a una actividad física determinada por más tiempo y con más energía. A este respecto, ya Freud sentenció: «El uso más importante de la coca continuará siendo el que los indígenas le ha asignado desde hace siglos: convendrá tomarla cada vez que sea importante aumentar por un tiempo limitado la eficacia física del cuerpo, sobre todo cuando no es posible el reposo y la alimentación necesaria para ese exceso de trabajo.»

Pero hay una diferencia sustancial en el consumo de la hoja de coca y de la cocaína. Según el informe de la comisión de la ONU destacada a Perú y Bolivia en 1949-1950, los indígenas de estos países consumen un promedio de 50 a 100 gramos de hoja de coca por día, lo que supone una asimilación de unos 150 a 300 miligramos de cocaína. En cambio, el consumidor de cocaína asimila de 50 a 150 miligramos de cocaína en una sola aspiración y no experimenta una sensación de euforia más que después de varias aspiraciones.

Sin embargo, el consumo repetido y consuetudinario de la cocaína sólo en casos muy raros produce una intoxicación o envenenamiento agudo. Aún con dosis muy fuertes no se llega a la pérdida del control de sí mismo. Tampoco produce trastornos sicomotrices (como el alcohol o los barbitúricos) ni consta que, a la larga, cause lesiones cerebrales. Los efectos físicos más frecuentes en adictos crónicos son las úlceras en los tejidos de la membrana nasal y la pérdida de peso por falta de apetito. Los trastornos psicológicos más frecuentes suelen ser el insomnio, la irritabilidad y la ansiedad. Claro está que su uso incontrolado, como cualquier abuso de medicamentos, provoca daños irreparables tales como la destrucción de la membrana nasal, alucinaciones y hasta el colapso físico total.

En cuanto a la dependencia o «seducción» que pueda crear el consumo habitual de la cocaína, los consumidores admiten que, a pesar de su intensidad, el deseo de esta droga no dura mucho tiempo si es que no se la llega a conseguir. Se denomina dependencia al deseo o necesidad irresistible de continuar tomando la droga y de procurársela por todos los medios. La dependencia puede ser física o psicológica. En el primer caso, la ausencia de la droga va acompañada por trastornos somáticos de distinto tipo; si la carencia es brusca, puede ir acompañada de lo que se llama «Síndrome de abstinencia». Esta dependencia física no se da ni en el uso ocasional ni en el consuetudinario de la cocaína.

En cambio, la dependencia psicológica es el resultado de una apreciación personal y totalmente subjetiva de la necesidad de la droga, de tal modo que no todos los consumidores la perciben con la misma intensidad. En este sentido se puede decir que la dependencia que crea la cocaína se parece a la que crea el hábito de fumar en los fumadores: aferrarse al cigarrillo y echarle de menos cuando no se lo tiene en algo puramente psicológico.

Por todo ello, parece equivocado tipificar a la cocaína como narcótico, pues este término designa (de acuerdo a su etimología griega) algo que induce al sueño o causa embotamiento en la mente. No es éste el caso de la cocaína. Al contrario, la cocaína estimula al sistema nervioso central y, al igual que las anfetaminas, mantiene a la mente lúcida y despierta. Tampoco provoca, como los narcóticos, la contracción de las pupilas (miosis), sino más bien su dilatación (midriasis). En general, sus efectos son todo lo contrario de los que provocan los narcóticos como el opio.

Son estas cualidades de la cocaína las que la han convertido en una de las drogas más preciadas en la actualidad, sino en «la» droga por excelencia, valorada ya no sólo en los medios tradicionalmente consumidores de drogas, tales como el mundo del espectáculo y del arte, sino también en los medios empresariales y políticos de Estados Unidos y Europa.

occidental, donde se ha convertido inclusive en símbolo de distinción y de opulencia. Y, aunque la heroína sigue siendo «la droga del pobre» y la marihuana «la droga de la clase media», es evidente que la cocaína lleva el camino de desplazarlas.

5. El Narcotráfico

Aunque Perú y Bolivia son, prácticamente, los únicos productores mundiales de hojas de coca a gran escala (la producción ecuatoriana y colombiana es, relativamente, mínima), la producción de cocaína para consumo masivo y su transporte hasta los mercados de consumidores constituyen un proceso complejo que rebasa las fronteras de ambos países y escapa totalmente a su control. De hecho, el tráfico de la cocaína es un fenómeno internacional, ejecutado por múltiples intermediarios que actúan como si fuese una empresa multinacional.

Si bien Santa Cruz, Montero, Trinidad, Puerto Suárez y Guayaramerin (en Bolivia); Tingo María, Huanuco, Ayacucho y Tarapoto (en Perú) son los principales puntos de partida del circuito, Leticia, Medellín y Cali (en Colombia); Manaus, Corumbá y Río de Janeiro (en Brasil) son las principales bases para la transformación de la pasta de cocaína en cocaína pura y para la salida de ésta hacia los mercados, fundamentalmente los Estados Unidos por la vía de Miami y Nueva York.

Cuatro son los medios utilizados por las organizaciones clandestinas para transportar la droga: avionetas particulares, líneas aéreas regulares, vías marítimas o fluviales y personas ajenas a la organización que son contratadas con carácter eventual por los traficantes para que transporten el producto en su propio cuerpo o entre sus objetos de uso personal. Pero los grandes negocios son generalmente hechos con avionetas particulares, que tienen una autonomía de vuelo de 5 a 6 horas.

Las pistas de aterrizaje clandestinas que operan en Bolivia al servicio del narcotráfico y del contrabando son numerosas. Sólo en el Departamento de Santa Cruz hay más de 500. En los últimos tiempos han aparecido muchas otras en el Departamento del Beni. Hasta hace algunos años, Leticia (Colombia) era la escala casi obligada en el camino desde Bolivia hacia los Estados Unidos. Ultimamente, la «conexión» se hace también en Venezuela, Panamá o islas del Mar Caribe, tales como Curaçao y Martinica, de donde suele seguirse por mar hasta Miami; o bien, la «conexión» se la hace en el área de la Amazonia brasileña, de donde se redistribuye tanto a Estados Unidos como a Europa.

Hoy en día el narcotráfico es una ocupación o actividad de alcance mundial. Funciona como una máquina o un negocio, donde rige el principio de la jerarquía piramidal, cuyas cimas quedan siempre en el más absoluto anonimato. Dispone y maneja unas cifras de dinero tan altas que se cree capaz de «comprar cualquier conciencia». Igualmente, las cifras de ganancias acumuladas por las «estaciones de distribución» que operan en los distintos lugares a lo largo del trayecto por el que pasa la droga desde la primera transformación que sufre la materia prima hasta el consumidor individual son deslumbradoras.

La cocaína es, posiblemente, la droga que mayores ganancias reparte actualmente. Se calcula que las ventas callejeras en los Estados Unidos en 1980 llegaron a los 30.000.000.000 de dólares. Es fácil que en 1981 hayan superado los 40.000 millones, en tanto que las ventas de la marihuana, que sigue siendo la droga más consumida por su precio relativamente más bajo, sólo giraron alrededor de los 23.000 millones; este mismo año se calculaba en unas 45 Tm la cantidad de cocaína que había ingresado clandestinamente en el mercado más grande del mundo. Este enorme movimiento de dinero supone en los Estados Unidos un capital semejante al de una de las grandes multinacionales.

En el comercio «en cadena» de la cocaína, cualquier persona puede convertirse en traficante, «rebajando» o adulterando su ración y revendiendo luego parte de ella con un considerable margen de beneficio. Así, a título de ejemplo se ha calculado que un kilogramo de sulfato de cocaína o «pasta básica» (que es lo que fundamentalmente se produce en Bolivia y Perú) que en el lugar de origen costaba unos 5.000 dólares, al llegar a Colombia (que es donde la mayor parte del sulfato es transformado en clorhidrato, gracias a la existencia de mejores condiciones químicas) ya ha subido a 15.000 dólares. La cocaína pura extraída de ese mismo kilo de «pasta básica» puede valer en los Estados Unidos, vendida a los mayoristas, entre 40.000 y 60.000 dólares. Pero antes de que esta cocaína llegue a las calles, a manos del consumidor directo, aún suele pasar por un proceso de adulteración, donde se la mezcla con diferentes excipientes tales como la lactosa, la procaína y las anfetaminas o simplemente leche en polvo, harina, azúcar o polvos de talco, con lo cual el producto final destinado al consumo directo ya no contiene más que de un 12 % a un 15 % de cocaína pura. Mediante las técnicas de la adulteración, el kilo original de «pasta» habrá terminado valiendo entre 200.000 y 500.000 dólares.

Por su situación geográfica, el Estado norteamericano de Florida se ha convertido en el atracadero internacional de la mayor parte de la droga que llega a los Estados Unidos. «El tráfico de drogas es el comercio minorista más grande de nuestro Estado», llegó a decir el Procurador General del Estado, Jim Smith, según la revista norteamericana «Selecciones del Reader's Digest». Evidentemente, todo esto no sería posible sin la complicidad de la propia policía norteamericana. Según la misma revista, el comandante de la patrulla marina de Florida fue acusado de recibir 50.000 dólares por dejar pasar un cargamento y unos quince oficiales y detectives del Departamento de Seguridad Pública del distrito de Dade (que abarca a Miami) fueron suspendidos o cambiados de puesto por recibir sobornos de parte del traficante cubano exilado Mario Escandlar, que es considerado por los organismos encargados de la represión al narcotráfico DEA y FBI (Drug Enforcement Administration y Federal Bureau of Investigation, respectivamente) como «uno de los mayores narcotraficantes de la nación».

Pero aún hay más. Hacia mediados de 1980, la DEA llegó a detectar la fuga hacia cuentas bancarias fuera de los Estados Unidos de hasta 2.000 millones de dólares acumulados por la venta de cocaína y marihuana. Se comprobó la complicidad de 31 de los 250 bancos de Miami en estas actividades ilegales y se descubrió que al menos 5 de estos bancos eran propiedad de los traficantes. Tras ser «blanqueados» o «purificados» en el exterior (es decir, reciclados en el circuito financiero una vez borrado su origen doloso), los «narcodólares» retornan normalmente a los Estados Unidos en forma de inversiones legítimas.

Todas estas características dan a la organización del narcotráfico la configuración de una «mafia» en el sentido vulgar de la palabra. Con los millones de dólares que hay en juego, los narcotraficantes no se detienen ante nada ni ante nadie para defender sus intereses. De ahí el poder secreto y el uso de medios expeditivos como el asesinato para eliminar a quien se les ponga en el camino o no respete las reglas de juego que van siempre asociados al narcotráfico.

A la vista de este poderoso y tenebroso, submundo de las mafias del narcotráfico resulta, pues, muy alarmante y preocupante el hecho de que sus tentáculos se hayan extendido hasta llegar a apoderarse del gobierno de todo un país como es el caso de Bolivia desde el golpe de Estado del 17 de julio de 1980.

Nota:

1. En la época de la Conquista española, el uso de la coca estaba extendido hasta lo que hoy son Venezuela, Panamá, Costa Rica y Nicaragua (por el norte), el norte de Argentina (por el sur) y, más tarde, llegó inclusive hasta Paraguay y toda la cuenca amazónica de Brasil.

LA MAFIA EN EL PODER

1. El Golpe de los «Cocadolares»

El golpe militar de García Meza-Arce Gómez, motejado por la prensa internacional como «El Golpe de los Cocadolares», comenzó en la mañana del 17 de julio de 1980, con el levantamiento del Regimiento de Trinidad, capital de Departamento del Beni. Cuando se conoció la noticia, a través de los medios de comunicación social, el Consejo Nacional de Defensa de la Democracia (CONADE) llamó a una reunión urgente con el fin de evitar por todos los medios que se quebrase el proceso constitucional, en esos momentos representado por el gobierno legítimo presidido por la señora Lidia Gueiler. La reunión se realizó esa misma mañana en la sede de la Central Obrera Boliviana (COB), y en ella participaban casi todos los partidos, así como representantes de la Iglesia, de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, de la Universidad y los propios dirigentes de la COB.

Al principio de la reunión, Marcelo Quiroga Santa Cruz propuso el que la COB decretase una huelga general, sugerencia que fue aprobada. Cuando, poco después se leían las resoluciones adoptadas delante de las cámaras de la televisión, comenzaron a oírse algunos disparos. Inicialmente se pensó que se trataba de un tiroteo de intimidación, pero pronto todos pudieron convencerse de que los vidrios del edificio saltaban con los disparos y que el ataque iba dirigido, de un modo bien planificado, en contra de la Central Obrera Boliviana.

Los paramilitares, dirigidos por el famoso asesino Fernando «Mosca» Monroy, habían rodeado el edificio y unos 20 de ellos, manejando armamento moderno, entraban a su interior. Todos habían llegado en ambulancias que, por orden del Coronel Arce Gómez, habían sido requisadas de la Caja de Seguridad Social. Cuatro jeep acompañaban a esas ambulancias.

Marcelo Quiroga fue identificado cuando bajaba por las escaleras, junto con los demás detenidos y con las manos en la nuca. Le quisieron separar del grupo, sin duda para asesinarle sin la presencia de testigos. El resistió a separarse del grupo y en ese momento uno de los paramilitares le disparó una ráfaga, quedando gravemente herido. Fue llevado al Estado Mayor del Ejército, en la zona de Miraflores, donde, después de torturarlo, le asesinaron. En el edificio de la COB cayeron muertos el dirigente Gualberto Vega y el dirigente político Carlos Flores. Algunos de los que asistían a la reunión de CONADE lograron esconderse o escapar; los demás fueron llevados presos al Cuartel del Estado Mayor del Ejército.

Los grupos paramilitares, en un operativo perfectamente coordinado, tomaron las emisoras de La Paz, de tal modo que la opinión pública quedase desinformada de lo que realmente estaba sucediendo en esos instantes. A las 13,30 invadieron el Palacio de Gobierno, tomando presos a la Presidenta de la República y a sus Ministros. Todo pudo hacerse con tal rapidez que ni el Gobierno, ni los partidos pudieron presentar un esquema válido de resistencia.

Los comentarios y las denuncias en el sentido de que numerosos «asesores» argentinos eran quienes planificaban los objetivos y quienes hacían los interrogatorios y torturaban a los presos se fueron haciendo cada vez más insistentes, hasta que se llegó a su verificación total (ver apéndice 2).

De nada servía que el pueblo en general, y especialmente los mineros, estuvieran dispuestos a no ceder de ningún modo ante los golpistas y a presentarles batalla. Algunos centros mineros resistieron una semana; otros, como Viloco y Caracoles, lucharon durante 18 días frente a un ejército regular que los rodeaba con tanques y los bombardeaba desde sus aviones. Siles Suazo declaraba que se había organizado un «gobierno clandestino». Lo cierto era que el golpe había triunfado.

Pero en ese mismo instante comienza también a tenderse el cerco político y económico en contra del nuevo régimen de Bolivia. La razón principal de este hecho no está en que se haya roto el proceso democrático, ni tampoco en la ideología fascista de los golpistas, ni aun siquiera en la falta total de libertad o en la represión generalizada o en las crueles torturas a que son sometidos todos los presos... La razón del cerco está en la cocaína.

El «Washington Post» afirmó que el principal motivo del golpe fue el miedo de los generales a perder millones de dólares procedentes del narcotráfico. La prensa de los Estados Unidos, informada, sin duda, por los responsables de DEA y por el propio Departamento de Estado, comienza a denunciar abiertamente, con nombres y datos precisos, la relación directa entre el nuevo gobierno boliviano y el narcotráfico. Se dan fechas y lugares exactos donde se realizaron las reuniones en las que los narcotraficantes, a través de Abraham Baptista, de José «Pepe» Paz, de Edwin Gasser, de Pedro Bleyer o de Sonia Atalá aportaban gran cantidad de dólares para «comprar» la conciencia de los generales indecisos para participar en el golpe. También denuncian que las armas usadas por los paramilitares habían sido compradas con el dinero de la droga.

Desde el propio Senado de los Estados Unidos es desde donde surgen las acusaciones más graves y más documentadas. El Senador De Concinni llega a afirmar que los narcotraficantes se han hecho con el poder en Bolivia. Van saliendo a luz pública los nombres de los principales militares implicados en el narcotráfico o que reciben de él fuertes sumas de dinero: General García Meza, Coronel Arce Gómez, General Waldo Bernal, General Hugo Echeverría, Coronel Ariel Coca, Mayor Rudy Landivar, Coronel Rolando Canido, Coronel Faustino Rico Toro, Coronel Norberto Salomón, Coronel Doria Medina, Coronel Jorge Lara... También aparecen numerosos nombres de civiles, casi todos ellos pertenecientes a la alta burguesía boliviana. Esas personas tienen también relaciones estrechas con los militares y muchas de ellas han colaborado políticamente en el gobierno del General Bánzer. Tanto el gobierno como la opinión pública de los Estados Unidos tomaron posiciones contrarias al régimen militar boliviano, ya que el 70 % de la cocaína que ingresa ilegalmente a ese país procede de fuentes bolivianas.

Para probar, con la máxima objetividad, hasta qué punto están implicados gran parte de los Jefes y Oficiales de la institución castrense boliviana en el narcotráfico vamos a optar por reproducir sus propios testimonios. Serán los mismos Jefes militares los que nos digan quiénes de ellos son los implicados y hasta qué extremos llega la corrupción en su institución. Añadiremos a ello sólo los testimonios de personas, que por su alta investidura o por su especial autoridad en la materia, sus opiniones merezcan total credibilidad.

Saliendo del hermetismo general que ha rodeado siempre a las noticias referentes a Jefes militares implicados en el narcotráfico, el 15 de enero de 1982, el Ministro de Defensa, General Armando Reyes Villa, declaraba: «Los Oficiales que están implicados en el narcotráfico están siendo procesados» («Presencia», 15-I-82).

El 10 de noviembre de ese mismo año aparece una Circular del Comando General del Ejército en la que se insta a los Oficiales que tengan conocimiento de delitos de narcotráfico para que se presenten al Tribunal Supremo de Justicia Militar a declarar.

El General Humberto Cayoja, al abandonar el cargo de Comandante en Jefe del Ejército, denunció ante la opinión pública que había dejado en el escritorio del que fue su despacho un archivo de 300 páginas que contenía la nómina de los militares implicados en el narcotráfico. Esa documentación, afirma el General Cayoja, desapareció misteriosamente sin que nadie, hasta la fecha, sepa su paradero.

El Teniente Coronel Shiriqui, Comandante del Regimiento Manchego, con asiento en Montero (Santa Cruz) decía en su discurso de Aniversario de dicho Regimiento: «Luchando contra la mafia organizada hemos desmontado verdaderos complejos industriales del delito, recogiendo sobrecogedora información que fue elevada a los Mandos institucionales... Ante las jugosas ganancias de los narcotraficantes surge una emulación social negativa... Hasta los mismos cuarteles llegan panfletos anónimos que tratan de sembrar la idea de que no hay un solo militar de prestigio que no se encuentre comprometido... El narcotráfico ha crecido porque ha encontrado aliados que le dan protección y ayuda.» («Presencia», 10-IX-81.)

Según versión oficial, el Inspector General de las Fuerzas Armadas, General Rivera Palacios, sometió a proceso a 30 Jefes y oficiales. Sin poder terminar estos procesos fue removido de su cargo siendo nombrado para dichas funciones el Contraalmirante Alfredo de la Barra.

El ex Presidente de la República, General David Padilla, en fecha 25 de abril de 1982, entregó a la prensa un documento en el que denuncia, en términos muy duros, la inmoralidad del Gobierno y de los Mandos Militares. Dice el General Padilla refiriéndose a los regímenes de los Generales García Meza y Torrelio: «Corrompieron y dividieron a las Fuerzas Armadas, así como a la Policía boliviana... En base a una interpretación errónea de la camaradería quedan en la impunidad una serie de delitos y faltas cometidas por algunos Jefes y Oficiales de mal comportamiento... Con sus actitudes de inmoralidad y corrupción han puesto por los suelos la dignidad del país y de las Fuerzas Armadas, tanto interna como internacionalmente... porque los escandalosos negociados, a nivel gubernamental, quedan en silencio y la impunidad, contribuyendo al total desprestigio del gobierno.» («Presencia», 25-V-82.)

El Coronel Ariel Coca Aguirre, ex Ministro de Educación del Gobierno del General García Meza, en un alegato titulado «Yo acuso», publicado por la prensa nacional el 24 de agosto de 1981, dice entre otras cosas: «Cuando la campaña sobre mi supuesta participación en el sucio negociado de la cocaína tomó envergadura mundial, comencé a informarme sobre la realidad de las cosas. Supe entonces que los verdaderos responsables y culpables de esta criminal e ilícita actividad, la protegían, la fomentaban y la encubrían, a cambio de millones de dólares, nada menos que miembros del propio gobierno cuyos nombres conoce todo el pueblo boliviano. Entonces comprendí que ciertos Generales habían tejido el cargarme el lodo, el deshonor y la infamia de ser uno más en la cúpula de narcotraficantes.

La Junta de Comandantes no puede seguir gobernando. La conducta inmoral de dos de sus miembros al estar sindicados en el narcotráfico se lo impide... Nos encontramos al borde de la bancarrota total y este carnaval, en el seno de las Fuerzas Armadas, debe terminar... Los socios siguen juntos, destruyendo a Bolivia cuya situación económica es desesperante; el famoso SES sigue operando, a pesar de las declaraciones del Ministro del Interior; los grupos paramilitares no han sido disueltos.» («El Mundo». Santa Cruz. Agosto 1981.)

En los frustrados golpe del Coronel Lanza en Cochabamba y de Natusch-Añez en Santa Cruz, el principal argumento que esgrimían los amotinados para derrocar al gobierno del General García Meza, tanto en sus comunicados como en sus arengas radiofónicas, era la inmoralidad imperante a nivel gubernamental y en el seno de la institución armada. Esta inmoralidad la vinculaban fundamentalmente al narcotráfico «oficializado e institucionalizado».

Oigamos ahora a un testigo excepcional: el Capitán Rudy Landívar, ex Cónsul de Bolivia en Campo Grande (Brasil) y ex Coordinador del Pacto Militar Campesino en Santa Cruz. He aquí sus «sorprendentes» declaraciones («sorprendentes» únicamente por la fuente de origen): «Indudablemente han existido -dice el Capitán Landívar- militares comprometidos con el narcotráfico, de los cuales yo conozco algunos nombres que los daré a conocer oportunamente, en un documento dirigido a la opinión pública.» Se le preguntó si podía adelantar algunos nombres. Respondió: «Prefiero hacerlo por escrito. Yo acostumbro a sostener lo que afirmo. Tengan la seguridad de que, en pocos días, voy a darles los nombres completos de Jefes y Oficiales comprometidos con el narcotráfico y de aquellos que recibieron dinero del narcotráfico.»

Uno de los periodistas le preguntó si se refería al «bono de lealtad» que el gobierno del General García Meza dio a algunos militares en dólares americanos, y respondió el Capitán Landívar- «Esta entrega de dinero se refiere más específicamente a dinero entregado por el señor Abraham Baptista, en el año 1980, a varios Jefes y Oficiales del Ejército.» (Abraham Baptista, como sabemos, era elemento clave en el contacto entre los Jefes militares y los principales narcotraficantes y fue acribillado a balazos en Santa Cruz, sin que nada haya aclarado la Policía al respecto.) («El Mundo», 19-V-82.)

Pasaron los días y los meses, pero el Capitán no soltaba su anunciada lista de militares. No dudamos de su información al respecto, lo que dudamos es que él diga todo lo que sabe. Es peligroso tirar piedras al tejado ajeno cuando el propio es de vidrio. Sin duda que Landívar obtuvo lo que esperaba: una buena «tajada» para no decir lo que todo el mundo sabe.

Pero nada más chocante que la actitud del Alto Mando Militar con relación al enjuiciamiento de los militares implicados en el narcotráfico y en otras actividades ilícitas. Según la decisión tomada por el Tribunal de Honor del Ejército sólo serían enjuiciados los militares de menor graduación, es decir, ¡de Mayores para abajo!

El General Angel Mariscal, Comandante en Jefe del Ejército declaró: «El Tribunal de Honor del Ejército no tiene potestad para juzgar al General García Meza, ni a los demás generales de la Junta de Comandantes. Nosotros no tenemos autoridad para juzgarlos. Es 'Caso de Corte'!» («Presencia», 25-V-82.)

En efecto, al conocerse el proceso en contra de 34 militares implicados en el narcotráfico resultó que todos ellos eran de graduación menor. El Comandante del Ejército declaraba a la prensa con el mayor desparpajo: «No hay entre los procesados ningún caso de General, ni de Coronel; eso sí, casos de Mayores y Capitanes, quizá más de Capitanes para abajo.»

Con esta original «ley del embudo» no es nada raro que el Tribunal de Honor del Ejército condene a los que no han pasado de ser «meros colaboradores» y absuelva de culpa y pena a los Altos Jefes Militares que se enriquecieron vertiginosamente con el tráfico ilícito de la droga y con otros «suculentos» negociados, como pueden ser, la explotación y comercialización de las piedras semipreciosas de La Gaibam, la escandalosa compra de la fábrica RIBSA, la venta ilegal de divisas del Banco Central, la alteración de los términos financieros del contrato internacional para la construcción de la carretera Chimoré-Yapacaní..., etc. («Presencia», 25-V-82 y Declaración del Cuerpo Pasivo de Generales y Almirantes. «Los Tiempos», 27-V-82.)

El «New York Times», en su edición del 31 de agosto de 1981, lanza en la primera página la siguiente andanada en contra de los altos Jefes militares de Bolivia: «El General García Meza recibió millones de dólares de traficantes de drogas que usó para comprar la 'lealtad' de Comandantes claves e impedir la represión contra el narcotráfico... Los Jefes militares bolivianos han estado involucrados en el tráfico de cocaína desde que las Fuerzas Armadas tomaron el poder el 17 de julio de 1980.»

Sobre el Coronel Luis Arce Gómez dice el influyente rotativo norteamericano: «Fue sacado del puesto de Ministro del Interior a raíz de la presión internacional que lo señaló como el principal contacto gubernamental del narcotráfico.

El General Waldo Bernal, miembro de la Junta de Comandantes, recibió regularmente pagos de hasta 10.000 dólares semanales para permitir la salida de aviones cargados de coca durante un período indefinido de tiempo después del golpe.» («New York Times», 31-VIII-81.)

Con razón ha podido afirmar el ex Presidente de Bolivia, Walter Guevara, que «el narcotráfico, como factor delictivo y no político o militar, contribuye a precipitar la fractura del sistema de dominación castrense en el país. El Coronel Luis Arce es el representante más conspicuo de esa participación en el narcotráfico. Sería absurdo decir que todos los oficiales están comprometidos, pero ellos estuvieron siempre al tanto de lo que ocurría; no obstante, prefirieron apoyar al régimen porque, de una u otra manera, los beneficios alcanzaban para todos». («Los militares en Bolivia», Walter Guevara. Mimeografiado, p. 14-15.)

2. El «Padre» de la Mafia

El poder de la mafia del narcotráfico en Bolivia es colosal. Ella no sólo tiene poder. Se ha instalado en el Poder. Es el poder mismo, con mayúscula.

Y la historia se remonta hasta los tiempos del General Bánzer, hacia mediados de la década del 70. Bánzer lleva gobernando varios años. Ha conquistado el poder a través de un golpe militar, desplazando al General Torres en agosto de 1971. Ha logrado, persiguiendo, apresando, exilando y matando, borrar todo vestigio de oposición. Se siente seguro e inamovible. La libertad de prensa es nula. El dictador se cree impune ante cualquier persona o institución que pretenda juzgar sus actos. Presiente que la cocaína puede ser una inagotable fuente de ingresos. Tiene a su lado verdaderos peritos en la materia: Roberto Suárez, que llegará a ser el omnipotente «padrino» de la mafia, se cuenta entre sus mejores amigos, lo mismo que José Paz de Montero o Widen Razuk o su ministro secretario Edwin Tapia Frontanilla.

Fue justamente Tapia Frontanilla el primero en ser descubierto. La hija de Bánzer acababa de contraer matrimonio con el joven profesional Luis «Chito» Valle. El nuevo matrimonio se trasladó a Montreal (Canadá) para continuar los estudios en la Universidad de Mc Gill. Bánzer, su suegro, le nombró Cónsul en esa ciudad canadiense. La Policía Montada del Canadá, conociendo los antecedentes familiares, trató de controlar discretamente al nuevo Cónsul boliviano. A los pocos días llegaron desde Bolivia unos visitantes sospechosos. Presentaron en el aeropuerto pasaportes diplomáticos otorgados y firmados por el Ministro Secretario de Bánzer, Edwin Tapia Frontanilla. La policía los detuvo y encontró en sus maletas un importante contrabando de cocaína con destino a la familia Valle-Bánzer. El gobierno canadiense echó tierra sobre el asunto para no verse envueltos en problemas diplomáticos. El matrimonio Valle-Bánzer tuvo que abandonar el país. Uno de los portadores de la cocaína era Alberto Sánchez Bello, secretario privado de Edwin Tapia Frontanilla. Tuvo que cumplir una condena de 5 años en las cárceles de Canadá.

A principios del año 1980, durante el breve mandato presidencial de la señora Lidia Gueiler Tejada y siendo Ministro del Interior Jorge Selum, la División de Narcóticos de Santa Cruz, realizó el denominado «Operativo San Javier», al mando del Mayor de Policía Carlos Fernández Navarro. San Javier es una población del Departamento de Santa Cruz, que dista unos 300 km de la capital oriental. La hacienda principal de la localidad es propiedad del General Bánzer y se llama «El Potrero». En las inmediaciones también tiene otra hacienda su amigo, y connotado hombre del narcotráfico, Wide Razuk. Las haciendas de San Javier, por estar dedicadas a la ganadería y por su situación geográfica alejada de las rutas tradicionales del tráfico de cocaína, nunca habían levantado sospechas.

El Mayor Carlos Fernández y sus hombres llegaron hasta San Javier con la misión específica de interceptar el «traspaso de cocaína a una avioneta colombiana que, según denuncias, había aterrizado allí varias veces. Cuando, llegados al lugar, trataron de penetrar en la hacienda encontraron una sorpresiva y tenaz resistencia armada. El grupo policial se encontraba en inferioridad de condiciones frente a los narcotraficantes. Tuvieron que volver a Santa Cruz en busca de refuerzos. Cuando la policía retornó a San Javier no se encontraron ya con la avioneta colombiana sino con un avión boliviano y junto a él un Oficial del Colegio Militar de Aviación que le ordenó el retirarse inmediatamente del lugar. El Oficial de Aviación les reiteró que él estaba encargado de hacer el decomiso. Pero el Mayor Fernández no se dejó intimidar y procedió a allanar la propiedad de Bánzer, donde se encontraron varias maletas con droga. La cocaína fue decomisada, lo mismo que varios uniformes militares que allí encontraron. Estos uniformes, según el testimonio de una persona del lugar, eran usados por los choferes de los camiones que trasladaban la hoja de coca hasta la hacienda de Bánzer. («Marka», 28-VIII-80. «Excelsior», 7-IV-81. México. Prensa Boliviana.)

Días después la prensa boliviana registró que se habían decomisado en la hacienda de Bánzer 300 kg. de pasta de cocaína. El General Bánzer se apresuró a hacer una declaración pública en la que decía que su hacienda había sido utilizada ilícitamente por los narcotraficantes.

En las postrimerías de su gobierno, Bánzer (julio 1978) nombró a su primo hermano Guillermo Bánzer Ojopi Cónsul General de Bolivia en la ciudad de Miami. Bánzer Ojopi ha sido acusado públicamente en los Estados Unidos de usar su oficina consular como conexión con la mafia de ese país. La prensa de Miami publicó que Bánzer Ojopi había invertido en el Estado de Florida por valor de 10 millones de dólares en la adquisición de algunos inmuebles de lujo. No dejaba de sorprender a los periodistas norteamericanos el que un pobre cónsul se hiciera millonario de la noche a la mañana.

En Buenos Aires, en fecha 21 de septiembre de 1981, el General Bánzer hizo pública una declaración rechazando las acusaciones que lo vinculaban con el tráfico de cocaína. Estas acusaciones aparecieron esos días en la prensa de Estados Unidos y de Brasil y estaban relacionadas, sobre todo, con las actividades sospechosas de su primo. Bánzer se presentó en un programa de la televisión argentina y, entre otras cosas, afirmó: «Se me acusa de tener un medio hermano a quien designé cónsul de Bolivia en Miami como nexo del narcotráfico... Declaro que un primo mío ejerció

funciones de cónsul en Miami por tres meses, pero él fue designado por el gobierno que, mediante un cuartelazo a espaldas del pueblo, me sustituyó y no por el gobierno que yo presidí.»

Pero al día siguiente, el General Juan Pereda Asbún rechazó totalmente esas declaraciones de Bánzer. Pereda demuestra que Guillermo Bánzer Ojopi fue nombrado cónsul en Miami por el General Bánzer. La declaración textual de Pereda es como sigue:

«Con respecto a declaraciones del General Hugo Bánzer en la ciudad de Buenos Aires, publicadas en el diario 'Los Tiempos' el pasado día 22, en sentido de que 'su primo hermano, Guillermo Bánzer Ojopi, hubiese sido designado cónsul de Bolivia en Miami durante el tiempo que ejercí la Presidencia de la República, debo manifestar lo siguiente: Ante versiones periodísticas que lo sindicaban como participante en el tráfico de drogas en Bolivia, aparecidas en el diario 'Nueva York Times' y en la revista brasileña 'Istoe', el general Hugo Bánzer Suárez trata de salir al paso, queriendo demostrar que el señor Guillermo Bánzer Ojopi, sindicado de enlace con los narcotraficantes en la ciudad de Miami, hubiese sido designado cónsul durante mi administración.

Para conocimiento de la opinión pública, deseo desmentir tal afirmación, pues como consta en los documentos que cursa el Ministerio de Relaciones Exteriores del país, el mencionado primo del general Bánzer fue nombrado cónsul general en Miami el 16 de mayo de 1978; nombramiento que se hizo siendo presidente el General Hugo Bánzer Suárez, Ministro de Relaciones Exteriores el General Oscar Adriázola y como subsecretario de ese despacho, Marcelo Terceros Bánzer. Tomó posesión de su cargo en fecha 3 de julio de 1978.

Hago constar que asumí el gobierno después del 21 de julio de ese año. Posteriormente, el señor Guillermo Bánzer Ojopi fue sustituido en su cargo de cónsul general en Miami por el señor Jorge Eguino Parada, durante mi administración Presidencial.» («Los Tiempos», 23-IX-1981)

Otro familiar muy cercano de Bánzer y que ha desempeñado cargos clavel en relación con el contrabando y el tráfico de cocaína es Guillermo Bánzer Abastoflor (a. «Nato»). También él aparece en varias publicaciones como muy relacionado con los narcotraficantes.

El Coronel Norberto «Buby» Salomón fue Edecán del General Bánzer y Jefe de la Casa Militar, cargos de máxima confianza. Fue también subsecretario de Aeronáutica. Norberto Salomón ha sido acusado por DEA como uno de los principales narcotraficantes. Norberto Salomón ha vivido varios años protegido por el cargo de Agregado Militar de la embajada boliviana en Caracas, desde donde ha manejado impúnemente su negocio ilícito transportando cocaína en los aviones que tienen en propiedad junto con Arce Gómez.

Arce Gómez, Norberto Salomón, Widen Razuk, Rudy Landívar... fueron promovidos a cargos políticos importantes por el General Bánzer. José «Pepe» Paz, Alfredo Pinto Landívar, Roberto Suárez, Edwin Gasser, Alfredo «Cutuchi» Gutiérrez, Pedro Bleyer, Abraham Baptista, Roberto Gásser Terrazas... vinculados todos ellos al tráfico de drogas, han sido y son amigos y colaboradores del General Bánzer. Y hasta la propia señora Yolanda Prada de Bánzer tuvo inconvenientes con la Policía Montada de Canadá y con los agentes de aduanas de aeropuerto de Madrid (Barajas) por sus implicaciones en el tráfico de cocaína.

3. El «Ministro de la Cocaína»

El personaje más siniestro y más controvertido de la primera fase del régimen del 17 de julio es, sin duda, el ministro del Interior de García Meza, Coronel Luis Arce Gómez. El 1 de marzo de 1981, el programa «Sesenta minutos» de la cadena CBS de la televisión norteamericana lo hizo la figura central de un reportaje documental titulado «El Ministro de la Cocaína». Las pruebas que en él se aportan sobre la implicación de Arce en el tráfico de la cocaína son tan contundentes que, en la víspera de la emisión, precipitaron la caída de Arce como ministro.

Aunque el ex ministro se apresuró a declarar que «no hubo una sola nota de los Estados Unidos que condicione a mi salida del gabinete el reconocimiento del gobierno» la verdad es otra.

Según la agencia de prensa IPS, la súbita destitución de Arce, el 26 de febrero, habría sido inspirada por el senador Jesse Helms, uno de los cabecillas más ultraconservadores de la «Nueva Derecha» norteamericana. Helms encabeza también el «lobby» de partidarios de la Junta militar boliviana dentro del Congreso norteamericano. Estos, según IPS, «se habrían enterado anticipadamente de la preparación del programa y urgieron a la Junta a destituir a Arce antes de su emisión. Será mucho más difícil que la Administración de Ronald Reagan normalice sus relaciones con Bolivia, habrían dicho los congresistas a la Junta boliviana, si Arce se encuentra en el gobierno al momento de irradiarse el programa de televisión» (IPS, 28 de febrero de 1981).

¿Quién es Luis Arce Gómez? Nació en Sucre hace 45 años, hijo de militar. Por parte de madre es primo hermano de Roberto Suárez Gómez, conocido como el «Padrino» de la mafia narcotraficante boliviana.

Fue expulsado del Ejército en 1960, cinco años después de haberse recibido de teniente, al parecer por haber violado a la hija de uno de sus superiores. Se vio, pues, obligado a ganarse la vida como pudiese. Terminó haciéndose fotógrafo de «actos sociales». Por un tiempo trabajó por cuenta del diario católico «Presencia», de La Paz, donde le conocían bajo el apodo de «Malavida», debido al desorden y la disipación en que vivía.

En 1964 se implicó en el golpe militar que instaló a la dictadura del general Barrientos, gracias a lo cual fue reincorporado a las filas del Ejército y premiado con el grado de capitán. Se especializa en explosivos. En 1969, tras el golpe del general Ovando, aparece a su lado como Jefe de Seguridad del Palacio de Gobierno. Durante el año que permanece en este puesto se producen varios asesinatos políticos detrás de los cuales se ve la mano de Arce. Uno de

ellos, el que destrozó al director del diario «Hoy», Alfredo Alexander, y a su esposa, en su dormitorio, requería, precisamente, conocimientos de explosivos: era una bomba de relojería enviada como un paquete de regalo.

A su caída, en 1970, Ovando se lo llevó apresuradamente consigo a su exilio en España. Ahí le consiguió una beca y lo inscribió en la Escuela de Estado Mayor. Por detrás de esta solicitud casi paternal tal vez se escondía el afán de Ovando de retenerlo a su lado por temor de que al bravucón capitán se le fuera alguna vez la lengua. En todo caso, Arce permaneció en España hasta 1974, año en que la dictadura del General Bánzer empieza a afianzarse.

De regreso a Bolivia retoma su carrera militar, pero, al mismo tiempo, empieza a incursionar en una nueva actividad: el tráfico de cocaína. Debuta como enlace de altos jefes militares. A fines de 1975 se asocia con el Coronel Norberto «Bubby» Salomón (ex Jefe de la Casa Militar de Bánzer y, a la sazón, subsecretario de Aeronáutica) para instalar una empresa privada de transporte aéreo, con la que se dedican a la exportación directa de la droga. El negocio es tan redondo que, en cinco años, ya son dueños de ocho aviones, de los cuales cuatro a turbohélice.

Entretanto, el flamante coronel sigue escalando posiciones, siempre entre bastidores: en 1978 se desempeña como Ayudante del Comandante General del Ejército, se pliega al golpe del General Pereda y éste se lo lleva al Palacio de Gobierno como Jefe de la Casa Militar. De ahí pasa al Servicio de Inteligencia del Ejército (Departamento II del Estado Mayor), desde donde se pliega al golpe del Coronel Natusch, en noviembre de 1979. A la caída de éste, se atrinchera en la Jefatura del Departamento II y se dedica febrilmente a conspirar, en alianza con el General García Meza y bajo la dirección de la Misión Militar Argentina, para instaurar de una vez en Bolivia un verdadero régimen de terror. Tras el triunfo del golpe del 17 de julio de 1980, asume el Ministerio del Interior y se convierte, de hecho, en el «hombre fuerte» del nuevo gobierno.

A todas luces, el periodista norteamericano Mike Wallace, director del programa televisivo «Sesenta minutos», propinó, si no el tiro de gracia, al menos un golpe mortal al irresistible ascenso del coronel sin escrúpulos. ¿Qué pruebas aporta el documental «El Ministro de la Cocaína»? Su argumentación central se basa en los testimonios del senador Dennis De Concini, encargado de investigar las conexiones del régimen de García Meza-Arce Gómez con el narcotráfico internacional en el seno del Subcomité de Operaciones en el Exterior del Senado de los Estados Unidos.

Ya el 12 de agosto de 1980, es decir, cuando el régimen aún no había cumplido su primer mes, De Concini planteaba la nueva situación en estos términos: el régimen aparece públicamente caracterizado como «poco más que un apéndice de las organizaciones criminales que dominan el floreciente tráfico internacional de cocaína»; el ministro del Interior, «bajo cuya jurisdicción se halla la policía nacional, está conectado desde hace tiempo con los grandes narcotraficantes y ha sido acusado de utilizar su cargo para sabotear los esfuerzos por controlar el tráfico de drogas; aún más, según algunos informes, Arce Gómez encabeza su propia red de contrabando de cocaína», por tanto, se impone mantener la suspensión de la ayuda económica y militar de los Estados Unidos «hasta que ésta y otras cuestiones sean aclaradas».

El 9 de septiembre, De Concini informaba que, a pesar de que no podía revelar detalles por tratarse de material mayormente clasificado como «Top Secret», la información procesada hasta ese momento en el Subcomité ya permitía «confirmar la existencia de múltiples y amplios nexos entre la Junta y las organizaciones internacionales que trafican con narcóticos». Y, «si bien la información concerniente a muchas de mis preguntas específicas sobre individuos específicos es, por ahora, confidencial, es posible afirmar que la conexión con el narcotráfico alcanza hasta los más altos niveles del régimen boliviano».

En el reportaje «El Ministro de la Cocaína», De Concini ya no abriga dudas: «Considero que Arce Gómez tiene grandes problemas. El está dentro de la principal cadena de traficantes de cocaína del mundo y de Estados Unidos. Tenemos información de que él ha recibido dinero de otros narcotraficantes por transacciones en numerosas ocasiones y eso para mí está fehacientemente comprobado.»

¿Hay pruebas? Se sabe, por ejemplo, que la cocaína llega a Estados Unidos en taxis aéreos. El Coronel Arce Gómez es socio de una compañía de taxis aéreos con el Coronel Norberto Salomón, actual Agregado Militar de Bolivia en Caracas, Venezuela. «Uno de estos aviones cayó en un viaje a Trinidad con un exceso de 300 kilos. Se confirmó que este avión pertenecía a la flotilla de los Coroneles Arce Gómez y Salomón. Recientemente otro de sus aviones cayó en Venezuela con 800 kilos de cocaína.»

El 3 de julio de 1980, o sea, dos semanas antes del golpe, ocurrió otro accidente significativo. Según relata el semanario brasileño «Veja» en su edición del 8 de octubre del mismo año, un avión bimotor Piper-Azteca explotó sobre el Altiplano, cerca de Laja, a sólo 20 kilómetros de La Paz. Cuando la policía llegó al lugar (muchos campesinos hablan llegado antes), se encontró con los cadáveres de los tres pasajeros de la avioneta y, entre los restos de ésta, con maletas llenas de billetes de 50 y 100 dólares hasta la suma de dos millones. Todavía no habían salido de su estupefacción los humildes policías bolivianos, cuando apareció un helicóptero que se posó al lado de la avioneta. De él salió el mismo Coronel Arce Gómez, entonces Jefe de Inteligencia del Ejército, que con prepotencia arrancó de las manos de los policías el informe que estaban levantando y lo rompió ante sus ojos, metiéndose en su bolsillo los pedazos de papel. Acto seguido ordenó a los policías que regresen por donde habían venido y que mantengan el más absoluto silencio sobre el asunto. Por cierto, el bimotor siniestrado pertenecía a la empresa aérea del Coronel Arce.

El rasgo que más caracteriza a Arce Gómez es, sin duda, su comportamiento de matón, sus gestos de megalomanía, sus actitudes prepotentes. El ex Presidente David Padilla cuenta, en sus «Recuerdos» cómo el entonces Ayudante del Comandante del Ejército le contestó al interrogarle Padilla (entonces Comandante del 11 Cuerpo de Ejército) sobre qué había sucedido en una reunión del Alto Mando Militar donde se decidió anular los resultados fraudulentos de las

elecciones de 1978: «Lo que aquí faltan son huevos, mi General», dijo Arce Gómez señalando las oficinas de su jefe («Decisiones y recuerdos de un General, página 109).

Arce Gómez se define a sí mismo como «hombre duro, que «en el peligro está en primera fila («Presencia», 27 de febrero de 1981). En realidad, Arce Gómez es un criminal, capaz de torturar y de asesinar a quien considere enemigo por el simple placer de hacerlo. Lo único que podría atenuar la definición anterior es el hecho de que, muy probablemente, se trate de un psicópata. La periodista británica Mary Hellen Spooner, del «Financial Times», que tuvo que humillarse ante él para salvar su vida, en agosto de 1980, revela que Arce Gómez «goza sexualmente cuando contempla cómo torturan a la gente».

Su odio criminal contra el pueblo, aunque enraizado en su mentalidad de militar y en su condición personal de casi un resentido social, se encendió con fuerza, posiblemente, al día siguiente del estrepitoso fracaso de la sangrienta aventura golpista del 1 al 15 de noviembre de 1979. Ese día, mientras el nuevo ministro del Interior, Jorge Selm, anunciaba a la prensa el desmantelamiento de los organismos de represión política, Arce Gómez tomó al asalto el edificio del Ministerio del Interior y se llevó todos los archivos a sus oficinas del Departamento II en el Cuartel General del Ejército. Días después repitió su «hazaña» en el Ministerio de Defensa. Acto seguido reclutó bajo su mando al Coronel Loayza, al inspector Benavides y a los demás torturadores de la policía política de la época del General Bánzer, se rodeó de «asesores» en represión del Ejército argentino y con ellos armó una banda terrorista de carácter paramilitar.

Esta máquina de destrucción se puso en marcha en marzo de 1980 con el secuestro y asesinato del sacerdote Luis Espinal, director del semanario «Aquí», tribuna de denuncia de la amenaza golpista. Sirviéndose de sus enormes ganancias por el tráfico de cocaína, Arce Gómez incorporó a las filas de su «ejército de paramilitares» a una vasta amalgama de delincuentes comunes, mercenarios extranjeros reclutados por su «maestro» Barbie Altmann, narcotraficantes, elementos antisociales y anticomunistas de convicción.

Uno de los casos más típicos es el de Fernando Monroy Munguía, alias «Mosca Monroy». Antiguo integrante de los grupos de choque de la ultraderechista Falange Socialista Boliviana (FSB), servía como agente provocador a sueldo del Ministerio del Interior hasta que, en 1979, fue inculcado públicamente por un asesinato político y encerrado en la cárcel de San Pedro. En vísperas del 17 de julio de 1980, Arce Gómez lo hizo sacar de la cárcel y lo puso a la cabeza de las bandas armadas que ese día asolaron la ciudad de La Paz, logrando capturar al enemigo que más odiaba el acoquinado coronel: Marcelo Quiroga Santa Cruz, brillante acusador de la barbarie militar. Quiroga fue asesinado ese mismo día en el Cuartel General del Ejército.

El 15 de enero de 1981, sabedor de que sus días como ministro todopoderoso ya estaban contados, el vengativo coronel se lanzó aún a otras fechorías: hizo rodear y tomar al asalto la casa donde se reunía la dirección del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), organización clandestina que se había destacado por sus constantes campañas de denuncia de la vinculación del régimen con el narcotráfico, y asesinar sin contemplaciones a cuantas personas se encontraban en ella. Una de las «paramilitares» que dirigió la matanza fue, precisamente, la más estrecha colaboradora de Arce Gómez, Rosario Poggi de Quesada.

En la personalidad de este nefasto personaje se combinan también, junto a lo macabro y su criminalidad rayana en lo paranoico, lo fante y lo cómico rayano en el cinismo. Entre el 23 de noviembre y el 2 de diciembre de 1980, el aún ministro del Interior protagonizó un espectáculo que le hizo el hazmerreír en todo el mundo. Se fue a los Estados Unidos dispuesto a lavar su «honor», puesto en entredicho por las cada vez más contundentes revelaciones de la gran prensa norteamericana acerca de sus vinculaciones con la mafia internacional del narcotráfico. Cual «nuevo Quijote» se fue dispuesto a todo, con tal de «enderezar entuertos». Creía que la opinión pública norteamericana le estaba esperando ansiosamente y que él se la podría embolsillar fácilmente.

Por supuesto, el «nuevo Quijote» se llevó a su «escudero», en este caso, al doctor Mario Rolón Anaya, amanuense de los sucesivos gobiernos militares, candidato a la Vicepresidencia de la República acompañando al ex dictador Bánzer y, poco después, efímero ministro de Relaciones Exteriores de García Meza. También se llevó una cohorte de «paramilitares», encabezados por el Fiscal del Distrito de Santa Cruz, Juan Carlos Camacho. La intención publicitada de Arce Gómez era la de entablar un juicio contra el diario «Washington Post», el semanario «Newsweek» y el senador De Concini «por difamación».

Pero el temperamental coronel se dio de bruces con la realidad. La prensa norteamericana apenas si le prestó atención; el único que lo hizo a fondo fue el periodista especializado Mike Wallace, quien le grabó una larga entrevista para su programa en la televisión y tres meses después lo denunció ante unos 60 millones de norteamericanos como «El Ministro de la Cocaína,>. Para encubrir su fracaso, Arce Gómez recurrió a los argumentos de un charlatán: «No vale la pena emprender ninguna acción judicial», ya que las acusaciones en su contra «se basaron en argumentos del castro-comunismo y del comunismo criollo». Asunto zanjado.

Pero antes de irse, el caprichoso coronel quiso visitar al ultraderechista senador Jesse Helms (el único defensor de García Meza en los Estados Unidos), a la neofascista «Legión Americana» y la tumba del Soldado Desconocido en el Cementerio Militar de Arlington. El Departamento de Estado le negó autorización. A pesar de lo cual, Luis Arce Gómez no tuvo reparos en romper las normas protocolares y militares de los Estados Unidos: invadió casi al asalto el recinto del cementerio, desobedeció la orden de «alto» dada por la guardia militar y tuvo que ser sacado a la fuerza mientras avanzaba escudado con su ofrenda floral. Más tarde se jactaría: «Ese es el espíritu del boliviano, que cumple lo que dice.»

Desde los Estados Unidos, Arce y su séquito se fueron a Brasil para «ajustar cuentas» con la revista «Veja». Pero los periodistas brasileños cerraron filas en torno a su ética profesional, declararon la visita de Arce «indeseable» y le negaron «autoridad moral para procesar a ningún periódico». La situación que creó Arce obligó al gobierno brasileño a tomar cartas en el asunto: sutilmente, el incómodo coronel fue invitado a abandonar el país. Para no volver antes de lo previsto a La Paz, Arce Gómez tuvo que refugiarse unos días en Paraguay, el único país de su vergonzoso periplo donde es recibido por funcionarios del gobierno. «Me siento como en mi propia casa», diría, con razón, el trasquilado coronel.

En mayo de 1982, Arce Gómez volvió a ser objeto de titulares de prensa sensacionalista: acusó al primer Embajador de los Estados Unidos en Bolivia tras casi dos años de suspensión de relaciones, Edwin Corr, de haberlo difamado y presentó querrela penal contra él. En concreto, Arce Gómez emplazaba al Embajador a que demuestre con pruebas la afirmación que cuatro meses antes habría hecho de que varios jefes militares bolivianos deberían ser juzgados por estar sindicados de involucración en el narcotráfico, «como es el caso del Coronel Luis Arce Gómez». Sin embargo, ésta demostró ser una bravuconada más del coronel. A renglón seguido declaró a la prensa que «mi honor no se lava en los tribunales, se lava con sangre» («El Mundo», 19 de mayo de 1982).

Como siempre, todo quedaba en aguas de borrajas. Arce Gómez, al igual que Norberto Salomón, Ariel Coca o Rudy Landívar se limitarán a amenazar con acciones para demostrar su inocencia, pero no llevarán nunca sus denuncias hasta los estrados judiciales. ¡Es una forma hábil de ganar cierta cuota de credibilidad al menos por unos días!

Pero más allá de sus bravuconadas e incluso de su implicación en la mafia traficante de cocaína, lo que mantiene a Luis Arce Gómez como una figura peligrosa, siniestra y temible es el inmenso poder intimidatorio y criminal que ha acumulado a la cabeza de sus «paramilitares». Está claro que estas bandas terroristas no podrían conservar su poder incluso cuando Arce ya no es ministro, si éste no mantuviese el control de esa inagotable cantera de dólares que es el narcotráfico.

Arce no niega su liderazgo sobre las bandas «paramilitares». Al contrarió, se siente orgulloso de ello. Es su timbre de honor. Ellos son sus «camaradas», sus «muchachos», sus «fieles colaboradores», sus «jóvenes idealistas». Cuando el ministro del Interior del General Torrelío aseguraba a la prensa que no existía ningún «cuerpo paramilitar» en el país, Arce Gómez le salió al paso para enrostrarle que estaba mal informado: «¡Que salgan los anarquistas a comprobar si existen o no!»

Cuando, a raíz de la muerte del padre de Luis Arce, los «paramilitares» publicaron notas necrológicas en la prensa boliviana, en marzo de 1982, identificando al Coronel Luis Arce Gómez como el «indiscutible conductor y líder» de «el Grupo Armado de Lucha Bolivia Primero» y de la «Liga Mundial Anticomunista-Sección Bolivia», el interesado no sólo no trató de echar tierra sobre el asunto, sino que los justificó: «Son idealistas, nacionalistas (...). A los idealistas nadie puede destruirlos (...). Es gente que dice ser paramilitar y punto.» («Presencia», 14 de mayo de 1982.)

Desgraciadamente, el poder de Arce Gómez parece realmente difícil de destruir. Cuando, en febrero de 1981, tuvo que ser apresuradamente apartado del puesto de ministro del Interior con la vana esperanza de neutralizar el impacto del reportaje «El Ministro de la Cocaína» y de obtener por fin el tan esperado reconocimiento norteamericano del régimen de García Meza, éste tuvo que satisfacer la vanidad de su ambicioso socio compensándole con un cargo que «salvase su -dignidad». Así, Arce Gómez, que no había perdido su poder real como cabecilla de las bandas «paramilitares», resultó nombrado Director del Colegio Militar.

Sin embargo, este puesto difícilmente podía ser compatible con su trayectoria delictiva. A los pocos días, los alumnos se amotinaron contra él. Y es que Arce había querido convertir al Colegio Militar en escuela para la formación de sus «paramilitares». Arce Gómez llamó a sus huestes para aplastar el motín. Los cadetes que lo habían organizado tuvieron que buscar refugio diplomático para escapar a la venganza del ofendido coronel, pero consiguieron su objetivo: la destitución de Luis Arce Gómez. Para librarse por un tiempo de su conflictivo amigo, García Meza lo envió entonces de vacaciones a Taiwán.

En julio de 1982, Arce Gómez, sin cargo público alguno, volvió a hacer gala de su poder. Cuando su amigo y también Coronel Faustino Rico Toro (y su sucesor en la dirección del Colegio Militar) creyó venido el momento de volver a «salvar al país del caos y la anarquía» y se propuso públicamente como sucesor del General Celso Torrelío, Arce Gómez tomó partido abiertamente por Rico Toro: Torrelío ha fracasado en el manejo de los problemas económicos y «quien fracasa en ese orden, debe irse a su casa» y dejar el puesto a «otro hombre más ágil e inteligente que maneje bien el país», («Presencia», 17 de julio de 1982).

Pero los cálculos de Rico Toro fallaron. Su ambición desmedida encontró la oposición de sus colegas y el eterno conspirador y pretendiente a «salvador de la Patria» tuvo que dejar paso a otro «duro»: el oscuro General Guido Vildoso Calderón. Pero no importaba quien hubiera desplazado a Torrelío: los amigos de Arce Gómez seguían controlando el poder. Al día siguiente de su nombramiento, el Presidente Vildoso recibió en el mismo Palacio de Gobierno la descarada visita de otro amigo suyo: el criminal de guerra nazi, prófugo de la justicia francesa y alemana, Klaus Barbie (a) Altmann. Días después, el amigo común de ambos, Luis Arce Gómez, era rehabilitado con su nombramiento como Director de la Escuela de Inteligencia del Ejército.

4. Los «Narcócratas»

Uno de los casos que, como mayor dramatismo, revela la relación íntima que existe en Bolivia entre narcotráfico y poder es el de José Abraham Baptista.

Baptista había sido durante los gobiernos de Barrientos y de Bánzer Jefe del DIN (Dirección de Investigación Nacional) en Oruro y en Cochabamba. Era el hombre de confianza entre los mandos militares. Desde 1978 parte su relación con la mafia en la ciudad de Santa Cruz. Baptista se convierte en el testaferro del General Echeverría, a la sazón Comandante de la VIII División de Ejército, con asiento en esa ciudad. A la vez estrecha también sus lazos de amistad y de colaboración con el entonces, Jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército, Coronel Luis Arce Gómez,

Abraham Baptista se sentía la persona mejor respaldada entre la gente de la mafia: él era el contacto con los dos hombres de ejército que en ese momento aparecían como los más poderosos.

Luis Arce pidió a Baptista que colaborase con Willy Sandóval Motón, ex diputado de la UDP. Sandóval Motón había logrado misteriosas y estrechas relaciones con Arce Gómez, y éste le asignó un puesto clave: encargado de cobrar los impuestos que arbitrariamente se cargaban a los comerciantes y transportistas legales de la hoja de coca.

Esta Oficina, dirigida por Willy Sandóval, cobraba impuestos muy onerosos en la forma siguiente:

Por el traslado legal de la hoja de coca desde la Paz hasta Santa Cruz, cada transportista debía pagar 1.000 pesos bolivianos por cada tambor de coca. El tambor de coca pesa unos 30 kg. Quiere decir que un camión que transportase 10.000 kg. debería pagar en esa oficina 300.000 pesos. El dinero que ingresaba por este concepto se repartía de la siguiente manera:

- El 40 % para el Coronel Luis Arce Gómez.
- El 15 % para gastos reservados del Ministro del Interior (posiblemente para los grupos paramilitares).
- El 10 % para el Director Administrativo del palacio de Gobierno (posiblemente para el General Luis García Meza).
- El 10 % para Daniel Salamanca, Subsecretario del Ministerio del Interior.
- El 10 % para Ernesto León, Subsecretario de Inmigración.>
- El 5 % para Alberto Alvarez, Director Administrativo del Ministerio del Interior.
- El 5 % para Carlos Castedo, Jefe de Recaudaciones del Ministerio del Interior.
- El 5 % para la Oficina de Control de Sustancias Peligrosas (posiblemente para Willy Sandóval Motón).

Según esto, quiere decir que por cada camión con 10.000 kilos de hoja de coca, Arce cobraba 5.000 dólares. García Meza 2.375 y los demás funcionarios sumas de 1.250 y de 625. Claro que la ganancia de los transportistas daba para eso y mucho más ya que la carga de coca que compraban en La Paz a unos 2.000 pesos la podían vender en Montero a los elaboradores de sulfato de cocaína hasta en 20.000 pesos y más.

Abraham Baptista estaba encargado de recoger el dinero de los narcotraficantes y entregarlo a los Jefes militares implicados en el golpe de García Meza, así como a los paramilitares a través del Coronel Luis Arce Gómez. Esta delicada misión la cumplió Baptista a la perfección.

Después del golpe del 17 de julio por el que tomó la Presidencia de Bolivia el General García Meza, Abraham Baptista, al frente de un grupo de paramilitares, confiscó 6 millones de dólares en efectivo de un avión colombiano que estaba camuflado en una pista clandestina en el Departamento de Santa Cruz. La enorme cantidad de dinero la trasladó inmediatamente a La Paz. Se reunió privadamente con García Meza. García Meza ordenó a Baptista que depositara 4 millones de dólares en la cuenta bancaria de su esposa Olma. Nada de extrañar sería que esos 4 millones de dólares fueron los que llevó a Suiza la señora Olma Cabrera de García Meza, según la denuncia formulada por la revista alemana «Der Spiegel» en fecha 5 de febrero de 1981. Claro que la prestigiosa revista alemana no habla de 4 millones de dólares, sino de 40 millones que habrían sido depositados por dicha señora en los bancos suizos.

El incidente produjo un grave distanciamiento entre Arce y Baptista ya que el grupo de narcotraficantes colombianos se quejaron de que su dinero había desaparecido y que Baptista era el único responsable. Los colombianos ofrecieron a Arce un millón de dólares para asegurarse de su protección. Arce hizo saber a Baptista que debía salir de la ciudad de La Paz y volver inmediatamente a Santa Cruz. Baptista tenía miedo a la venganza de los colombianos y, para defenderse, amenazó a Arce con hacer público el asunto. Baptista volvió a Santa Cruz muy a su pesar y trató de protegerse. El 6 de octubre, cuando salía de una pizzería céntrica de la ciudad de Santa Cruz fue tiroteado por dos individuos que portaban armas automáticas. Uno de los asesinos era José «Palanca» Cuellar y el vehículo que usaron había sido proporcionado por Roberto Suárez. Según los periodistas. Monique Lecerf y Francois Fallareau están directamente implicados en el crimen, además del Coronel Arce Gómez, Roberto Suárez y el General Hugo Echeverría, quien pagó la recompensa a los asesinos materiales.

Pocos días antes del golpe de 17 de Julio de 1980, José «Pepe» Paz, importante narcotraficante de la zona de Montero entregó al General Hugo Echeverría 800.000 dólares como contribución «espontánea» para comprar la conciencia de los Jefes militares indecisos. En efecto, en la propia casa del General Hugo Echeverría fueron «gratificados» con 50.000 dólares por cabeza los Comandantes de las Divisiones de Cochabamba y Oruro, así como el Comandante del Tarapacá. A la sazón estaba al frente de esta importante unidad motorizada el Coronel Arturo Doria Medina, que en febrero de 1981 será promovido ¡nada menos! que a Director General del Consejo de la Lucha contra el Narcotráfico. ¡Quizá la único que pueda avalar a Doria Medina para este delicado e importante cargo sea su enemistad personal con Luis Arce Gómez!

La relación que existe en Bolivia entre mafia y poder político-militar queda, de algún modo, patentizada en el acto de inauguración del aeropuerto particular que tiene en las afueras de Santa Cruz el prohombre («patricio», dicen los cruceños) Alfredo Pinto Landívar. Está situado dicho aeropuerto en el kilómetro 9 de la carretera Santa Cruz-Cochabamba. En realidad quien construyó ese moderno aeropuerto fue el amigo y socio de Roberto Suárez, Alfredo «Cutuchi» Gutiérrez. Le costó 2 millones de dólares, pero él se lo vendió por 3 millones a Pinto. Alfredo Pinto es el representante de ventas de la Compañía norteamericana de aviación Beechcraft en Bolivia y dueño de varios aviones, así como del único helicóptero privado que existe en Santa Cruz. No es ningún secreto para los organismos internacionales especializados en la lucha contra el narcotráfico que el aeropuerto de Pinto Landívar tiene, ante todo, finalidades delictivas relacionadas con el contrabando y muy particularmente con el narcotráfico.

Un avión de Pinto Landívar, cuyo número de serie proporcionado por la policía colombiana es CP 1639, fue decomisado por las autoridades de ese país cuando transportaba una millonaria carga de cocaína.

¡Pinto, al comprar el aeropuerto de Gutiérrez, quiso reinaugarlo con una gran fiesta. Entre los invitados de honor estaban el Presidente de la República, General García Meza, el Comandante de la Fuerza Aérea, General Waldo Bernal y toda la plana mayor del gobierno y de los mandos militares!

El nombre de Waldo Bernal, amigo y gran protector y encubridor de Alfredo Pinto Landívar, saltó a los titulares de la prensa italiana a raíz de la misteriosa «compra de los Mirages franceses».

El General de Aviación Waldo Bernal Pereira en poco tiempo fue muchas cosas: Comandante en Jefe de las Fuerzas Aéreas Bolivianas, Ministro de Aeronáutica, miembro de la Junta de Comandantes que durante un mes asumieron la Presidencia de la Nación. Desempeñó los tres cargos a la vez.

Aunque el país afronta una verdadera bancarrota, Bernal negociaba con franceses y soviéticos la adquisición para Bolivia de aviones supersónicos. Nadie podía adivinar cuál sería la fuente de financiamiento, aunque todos la sospechaban. La alternativa de elección se presentó como impostergable: había que elegir entre los Mirage SU-19 y los MIG-23. Los Mirage tenían las de ganar. ¡Los aviones rusos podrían traer graves problemas ideológicos entre sus alas! La casa Dassault de Francia presentó una oferta concreta. En el prospecto impreso por dicha firma ¡sin duda, por galantería hacia los militares bolivianos! aparecía el desierto de Atacama y la costa marítima arrebatada por Chile a Bolivia, como parte de Bolivia. La carta de intenciones de Bolivia presentaba propuestas concretas para comprar 11 Mirage SU-19, con sus respectivos repuestos y un completo programa de entrenamiento. El costo total alcanzaba a la friolera de 250 millones de dólares... ¡O sea, todo el presupuesto de defensa de Bolivia multiplicado por cinco! Las ilusiones militaristas del General Bernal se vinieron abajo cuando la prensa internacional asoció esta compra millonaria con la única fuente de financiamiento con que podía contar el general boliviano: la cocaína.

Según la revista norteamericana «Newsweek», en su edición del 9 de febrero de 1981, uno de los hombres que tiene más poder dentro de los negocios de la cocaína es el Coronel Faustino Rico Toro, Ministro del Interior en la Presidencia del General Pereda y Jefe del Servicio de Inteligencia hasta febrero de 1981 bajo la Presidencia del General García Meza. También la revista «Marka», de Lima, sindicó a Rico Toro como miembro de la dirección de un importante grupo de narcotraficantes (5-III-81).

En Carcaje, población rural cercana a la ciudad de Cochabamba, la policía encontró una fábrica procesadora de cocaína. En ella operaban tres norteamericanos y cinco bolivianos. Los cocaineros trataron de ofrecer resistencia armada. La policía abrió fuego contra ellos y cayó muerto uno de los norteamericanos que era ex paracaidista de la guerra del Vietnam. Los demás fueron tomados presos. El gobierno trató de ocultar la identidad de los detenidos, pero sí pudo saberse que el grupo contaba con la protección del Coronel Faustino Rico Toro.

La conexión de Rico Toro con Arce Gómez es de todos conocida en Bolivia. Cuando Arce tuvo que dejar el puesto clave de Jefe de Servicio de Inteligencia del Ejército no encontró mejor reemplazante que el Coronel Rico Toro. Arce desde el Ministerio del Interior y Rico Toro desde el Servicio de Inteligencia coordinaron perfectamente las acciones para la represión política, por un lado, y para la protección del narcotráfico, por otro.

Cuando el General García Meza tenga que distribuir «bonos de lealtad» (dinero aportado por los narcotraficantes) el hombre que recibe una cuota más alta es el Coronel Rico Toro.

Al frente de su grupo militar denominado «Águilas Negras» ha constituido una amenaza permanente de un nuevo golpe de Estado.

En cuanto a la participación del General Luis García Meza en el narcotráfico los testimonios son numerosos. Sin embargo, su relación con el narcotráfico ha sido distinta a la de Arce Gómez, Ariel Coca o Hugo Echeverría. García Meza se ha limitado a tolerar, a dejar el problema «en las manos de los especialistas» y a recibir pingües dividendos.

Según el rotativo «El Día», de Montevideo, García Meza recibió del Rev. Moon, a través del segundo hombre en su movimiento «Unificacionista», el Coronel surcoreano Bo Hi Pak, la cantidad de 5 millones de dólares. El periódico de Montevideo publica la foto de la entrevista («El Día» 3-IX-1981).

El día 10 de junio de 1981, el Presidente García Meza firmaba una carta gravemente comprometedor para él y para todos los altos Jefes militares a los cuales se hace referencia en dicho documento. Poseemos una fotocopia de dicha carta, avalada por el sello de la Presidencia de la República y por la firma del propio Presidente. Ella demuestra hasta qué grado de corrupción y de obsecuencia ha llegado la alta oficialidad de las Fuerzas Armadas de Bolivia.

Transcribimos literalmente el documento.

Presidencia de la República

La Paz, 10 de junio de 1981

Sr. General de Brigada,

D. Celso Torrelio Villa

Ministro del Interior, Justicia e Inmigración

Presente

Señor Ministro:

De los fondos destinados para la seguridad política de la nación, se servirá entregar a los señores Generales, Jefes y oficiales de la relación adjunta y en las cantidades indicadas, como premio a la lealtad demostrada al Gobierno de la Reconstrucción Nacional y a las Fuerzas Armadas, una copia de los recibos firmados agradeceré entregar al señor Capitán Gonzalo Ovando Méndez. General de Brigada Carlos Turdera Villa, Coronel Tito Justiniano, Teniente Coronel Alberto Gribosky, Teniente Coronel Arturo Doria Medina, Teniente Coronel Jorge Moreira Rojas, Teniente Coronel Luis Cordero M., Coronel Rómulo Mercado G., Coronel Luis Kuramoto, Coronel José Quiraz Antequera, Teniente Coronel Rolando Arzabe Claver, Teniente Coronel Miguel Padilla Candia, Teniente Coronel Oscar Angulo Tornee, Coronel Guido Vildoso C., Capitán Luis Cossío Viruez, a cada uno la suma de 100.000 dólares americanos. Coronel Faustino Rico Toro Herbás y Coronel Carlos Rodrigo Lea Plaza a 200.000 dólares americanos cada uno.

Coronel Tito Justiniano, Coronel Aroldo Pinto, Teniente Coronel Raúl González Ferry, Coronel Yamir Taja Kruber, Teniente Coronel Walter Salame e., Teniente Coronel, Moisés Shirique Bejerano y Teniente Coronel Javier Rodríguez Rivero, a cada uno con 50.000 dólares americanos.

Al capitán Roberto Nielsen Reyes con la suma de 30.000 dólares americanos.

Con este motivo saludo al señor Ministro con mis atentas consideraciones.

Firma

GRAL. DIV. LUIS GRACIA MEZA TEJADA

Presidente de la República de Bolivia

Impacta, hasta la indignación, el que en un país tan pobre como Bolivia, donde el analfabetismo alcanza cotas de casi un 60 % de la población, que entre unos señores generales y coroneles se puedan repartir un dinero que, según el documento, pertenece al pueblo de Bolivia, y que en su totalidad alcanza a la nada despreciable suma de 2.180.000 dólares, con los que se hubieran podido construir 40 escuelas.

Pero, evidentemente, esos «bonos de lealtad» no tienen ninguna relación con el cumplimiento del deber, ni son parte del presupuesto estatal. Su origen no es otro que el narcotráfico.

Es sintomático el que no se pague «la lealtad» de los más «leales» como la del Coronel Luis Arce Gómez, del Coronel Ariel Coca, del General Echeverría, del General Waldo Bernal, del Coronel Fredy Quiroga... En realidad, de lo que se trata, más que de premiar «la lealtad», es de comprar esa «lealtad». Y, evidentemente, la más cara es la de los dos eternos golpistas: Faustino Rico Toro y Rodrigo Lea Plaza.

La incorrección en la redacción, las faltas de ortografía y la repetición de un nombre (Coronel Tito Justiniano), prueban que la carta no pasó por el sistema administrativo regular.

Otra novedad de esta carta es que ella mancha la honorabilidad (si es que de «honorabilidad» se puede hablar en este caso) de tres Presidentes de la República y vincula directamente con la corrupción del narcotráfico a Doria Medina, Cossío Viruez y a González Ferry, quienes serán, meses después, los directores responsables de la institución oficial para el control del narcotráfico.

5. Los «Padrinos»

Roberto Suárez es en la actualidad un millonario intocable. El es el principal narcotraficante de sulfato de cocaína en Bolivia y en el mundo. Es «El Padrino» por antonomasia.

Roberto Suárez, natural de Santa Ana de Yacuma, una pequeña población ganadera del Departamento del Beni, es descendiente de una familia con aires de aristocracia provinciana. Entre sus antecesores se encuentran ministros, magistrados y gente influyente. Uno de ellos fue el primer embajador de Bolivia en Gran Bretaña.

Roberto Suárez es distinguido. No tiene las características de un matón, ni las actitudes de un «gangster», o de un «capo de la mafia».

Cuenta 49 años y pudo llegar a afirmar, en cierta ocasión, que el dinero que él habla entregado a los militares alcanzaría para pagar la deuda externa del país. «Pero ellos -añade Suárez-, en vez de invertirlo en el país han preferido depositarlo en los Bancos del extranjero.» («International Herald Tribune», 18-VIII-82.) Sin embargo, es voz común que la propia fortuna de Suárez está bien guardada en los Bancos de Suiza!

Santa Ana de Yacuma tiene sus razones para estar agradecida a Roberto Suárez. Esa perdida población de las llanuras benianas se ha visto favorecida con las migajas que caen de la mesa del omnipotente padrino. Y esas migajas, a veces, suponen miles de dólares. Por ejemplo, los pilotos de las pequeñas avionetas que transportan la pasta básica de cocaína hasta los aeropuertos clandestino de Colombia reciben, por cada viaje, la suma de 100.000 dólares. Suárez es el «papito» para los humildes moradores de Santa Ana: él da comida a los pobres, restaura las iglesias, dona máquinas de coser a las mujeres del pueblo, pavimenta las calles... Pero para los agentes de los principales organismos

internacionales que luchan contra el narcotráfico Roberto Suárez es un hombre peligroso, posiblemente el traficante de cocaína más rico y más poderoso del mundo. La justicia de los Estados Unidos ha demandado su captura, junto con la de su hijo Roberto, Alfredo Gutiérrez y Marcelo Ibáñez y Renato Roca. En realidad, los cinco no son más que una misma cosa, son «la familia», el «clan» de Roberto Suárez Gómez.

La Oficina de la Contraloría General de Estados Unidos, con sede en Miami, le ha acusado de «conspiración para importar cocaína» e «implicación en la actual importación». Estos cargos le podrían costar 30 años de cárcel. Dos de sus «socios», Alfredo Gutiérrez y Marcelo Ibáñez, ya están pagando la pena en Estados Unidos al ser entregados, sin trámite de extradición, por el gobierno boliviano. Su hijo Roberto cayó en manos de la policía suiza que le acusa, entre otras cosas, de haber entrado a ese país con un pasaporte falso. Pero «el Capo» sigue moviéndose libremente en Bolivia. En ese país no hay ninguna orden de captura contra él, ni la puede haber, a no ser que cambien muchos las cosas.

Sus «socios», presos en Miami, habrían declarado que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Bolivia fotocopiaban y le pasaban a él todos los informes sobre la investigación en el narcotráfico elaborado por los agentes de DEA en La Paz.

Es evidente que las implicaciones directas de los últimos gobiernos militares en el narcotráfico ha sido la razón más importante para que los Estados Unidos demorasen el reconocimiento y para que les suspendiera toda la ayuda económica y el trámite de los créditos financieros.

Los índices de producción de pasta no han cambiado últimamente. Donde ha habido cambio ha sido en las áreas geográficas de la elaboración. Desde el Departamento de Santa Cruz, las fábricas de elaboración se han ido desplazando hasta el Beni, donde, tanto Roberto Suárez como Arce Gómez tienen haciendas, denominadas «Rancho Alegre», «Montes Claros» y «Camiare» (esta última propiedad de «Chamaco» Chávez). Los aviones que se usan en la actualidad llegan a tener de 5 a 6 horas de autonomía de vuelo. Los vuelos parten, generalmente, al amanecer directamente hasta las pistas clandestinas en las proximidades de Leticia (Colombia) o Mahaus (Brasil). Al mediodía pueden llegar hasta el lugar de destino, donde, una vez realizada la transacción, se reabastecen de combustible y reemprenden el vuelo de retorno hasta el Beni para llegar poco antes de anochecer. Este tráfico tiene un elevado grado de organización y eficiencia, ya que está coordinado entre norteamericanos, colombianos y bolivianos.

Según el «International Herald Tribune» y otras diversas fuentes, el día 26 de febrero de 1981 (un día después de haber sido removido de su cargo de ministro del Interior), el Coronel Luis Arce Gómez se trasladó a Santa Cruz y en la mansión de la señora Sonia Atalá (esposa de «Pachi» conocido automovilista) se llevó a cabo una importante reunión con los principales narcotraficantes. El Coronel Arce Gómez, que acababa de perder su condición de «hombre fuerte» del régimen de García Meza, traía para ellos un mensaje del Presidente de la República. El gobierno habla decidido actuar contra algunos narcotraficantes en el Departamento de Santa Cruz para mostrar una nueva política frente al gobierno de Estados Unidos. García Meza urgía a los principales narcotraficantes para que trasladasen sus centros de operaciones hasta el Departamento del Beni, a Tarija y al Altiplano. Arce pidió medio millón de dólares para recabar la protección del gobierno, garantizándoles sus operaciones en Bolivia y los vuelos hacia Colombia y Brasil. Roberto Suárez comenzó a trasladar sus fábricas, sus aviones y su gente hasta el Beni.

A pesar de que los operativos en contra de los pequeños narcotraficantes de Santa Cruz no tocaron los grandes intereses relacionados con la cocaína, sí se produjo un corte en el abastecimiento de la hoja de coca y esto afectó a todos. Tan es así que Roberto Suárez se vio obligado a hacer una tentadora oferta al General García Meza: le prometió 50 millones de dólares si ponía fin al «operativo Santa Cruz», y, en efecto, el 19 de mayo de 1981 terminaba bruscamente la acción represiva en contra del pequeño narcotráfico cruceño.

Según el testimonio de Hugo Suárez Gómez, de 56 años y hermano de Roberto, recogido por el periodista Warren Hoge del «New York Times», éste había malgastado la herencia en malos negocios y en la campaña electoral a favor del General Pereda Asbún en 1978. «A mi hermano -dice Hugo- también le gusta 'la dulce vida'. Las tendencias filantrópicas que tiene son una tradición en nuestra familia... Hemos discutido con él y le hemos presionado para que se aleje de las actividades del narcotráfico y nos prometió que lo iba a dejar.» Hugo añade: «El día en que haya respeto a la ley en Bolivia él mismo se presentará ante la Corte. La familia tiene fe en él porque pensamos que no está implicado en actos de violencia. Si así fuera le daríamos la espalda.»

Sin embargo (y aunque su hermano Hugo no lo sepa), Roberto es quien mantiene a todo un ejército de civiles armados llamados paramilitares que han asesinado a muchas personas y que tienen como instructores a verdaderos criminales de guerra.

Según el periodista Mike Wallace, Roberto Suárez ya había sido apresado en los Estados Unidos el año 1976, cuando iniciaba «su carrera» de narcotraficante. (Programa «60 Minutos».)

DEA calcula que «el grupo Suárez» produce 1.000 kilos de pasta básica por mes (o sea, el valor de 5 a 9 millones de dólares por mes). Un kilo de pasta básica oscila entre 5.000 y 9.000 dólares. Un pequeño avión transporta alrededor de 500 kilos. Quiere decir que traslada, por viaje, hasta cuatro millones y medio de dólares.

El golpe más grave que sufrió Roberto Suárez fue cuando, el 23 de enero de 1982, cayeron presos en Locarno (Suiza) su esposa y sus hijos Roberto y Gary. La señora Suárez y Gary fueron puestos en libertad después de los interrogatorios de rigor, pero Roberto quedó arrestado. El escuadrón antidroga de Locarno dijo que Roberto manejaba un pasaporte falso y que se creía que estaba preparando una transferencia de grandes sumas de dinero de origen sospechoso. También declararon que Roberto (hijo) estaba buscado por la Interpol a raíz de investigaciones iniciadas

en Estados Unidos en torno al tráfico de cocaína entre Bolivia y ese país. Suárez (padre) ha iniciado la contraofensiva pagando a los mejores abogados para que logren que su hijo no sea entregado a la justicia de los Estados Unidos ([11](#)).

A raíz de este hecho se preguntó a las autoridades bolivianas si iban a iniciar alguna acción judicial en contra de Roberto Suárez. Contestaron textualmente: «No existiendo contra él acusación formal, ni el gobierno ni la justicia intentarán acción alguna» («International Herald Tribune», Warren Hoge, 18-VIII-82; «Presencia», 23-I-82).

Sin embargo, las pruebas en contra de Roberto Suárez Gómez son categóricas y el modo como se llegó a obtenerlas es digno de una película de ciencia-ficción.

El novelesco episodio comenzó a desarrollarse el 23 de mayo de 1980. El «The Miami Herald» del 14 de octubre de 1981 ofrece la versión más detallada, recogida de los labios de los propios protagonistas.

La Oficina para el Control de la Droga en los Estados Unidos, más conocida con la sigla de DEA, trató con habilidad de introducir a sus agentes como si fueran miembros de la mafia y para ello creó una verdadera «estructura». Para que sus agentes pudieran aparecer como «mafiosos de verdad» dispusieron de un plan en el que se incluía un avión, tres pilotos, un laboratorio para el procesamiento de pasta de coca, un lote de grabaciones, además de 9 millones de dólares en efectivo!

El plan comenzó a desarrollarse en la ciudad de Buenos Aires, en la primavera de 1980. El agente de DEA, Mike Levine, ocultando su real personalidad de agente federal, fue presentado a Marcelo Ibáñez, que era el contacto de Roberto Suárez Gómez.

Levine comunicó a Ibáñez que él era miembro de una organización norteamericana de la mafia que quería ingresar a los negocios de la cocaína.

Cuando Ibáñez se comunicó con Roberto Suárez, éste recibió la noticia con agrado, pues ya estaba cansado de tener problemas con los compradores colombianos.

Levine inquirió sobre el volumen de pasta capaz de suministrar, obteniendo la respuesta: «mil kilos al mes.

Las relaciones se fueron haciendo más estrechas y Levine invitó a Suárez y a Ibáñez para que hicieran un viaje a Florida del Sur y así conocer las instalaciones «de la mafia» y ver su «laboratorio» donde sería procesada la cocaína. Quería también Levine presentarles a otros miembros «de la familia» y mostrarles sus reales posibilidades económicas. ¡Allí estaban los 9 millones de dólares en efectivo, casi ya a su disposición!

Suárez contestó que aceptaba la invitación, pero que, por el momento, sólo viajaría Ibáñez.

Richard Fiano, «uno de los principales miembros de la familia», alquiló una cómoda mansión en la avenida East Lake número 1.410, cerca del hotel Fort Lauderdale y se encargó además de proporcionarle un automóvil nuevo Lincoln Continental.

Fiano y otros agentes recorrieron las tiendas buscando la música más agradable y las mejores bebidas para el boliviano. Hasta le asignaron dos guardaespaldas por si podía surgir algún inconveniente.

Los agentes habían construido un supuesto laboratorio para el proceso de la cocaína en una barraca de Weast Broward. Una muestra de fino producto, con 97% de pureza, fue colocada a la vista en el caso de que el boliviano quisiera hacer los ensayos respectivos.

Seguidamente el agente Fiano fue al Banco Federal de Reserva de Miami con un cheque del Tesoro de Estados Unidos por valor de 9 millones de dólares, el montón más elevado girado en la historia de la represión de la droga. El dinero fue empacado en tres maletines y transportado por un convoy armado hasta el Banco Kandall.

Ibáñez llegó a Miami el 15 de mayo de 1980. El agente Levine le presentó a Fiano como si fuera «su hijo». Una agente de DEA desempeñó el papel de mujer de Levine. Otros agentes actuaban como miembros de la «familia».

Ibáñez quedó tan bien impresionado que llamó apresuradamente a Santa Cruz para darle la buena noticia a Roberto Suárez: «Los 'mafiosos' aceptaban comprar 500 kilos pagando por cada uno 16.000 dólares.»

Al día siguiente, 16 de mayo, Fiano y tres pilotos, juntamente con Ibáñez, despegaban de una «pista clandestina» de Florida rumbo a Bolivia. Su aparato era un Convair 440.

Hicieron las escalas necesarias sin ningún inconveniente. Cuando el Convair aterrizó en las cercanías del lago Roguaguado (Departamento de Santa Cruz) allí estaba esperándoles el hijo de Suárez, Roberto Suárez Levy.

A Miami había viajado dos días antes Alfredo «Cutuchi» Gutiérrez a quien Ibáñez había puesto en contacto con Levine. El sería el encargado de cobrar los 9 millones de dólares. Levine condujo a Gutiérrez hasta el Banco Kendall para que comprobase que allí estaba el dinero de la operación. Gutiérrez, una vez comprobado, llamó por teléfono a Suárez, para informarle que todo estaba listo y que se podía proceder a cargar la pasta en el avión. Cuando casi todas las bolsas estaban cargadas en el avión, los agentes disfrazados simulaban que había que despegar urgentemente. En realidad juzgaban que los 500 kilos era una carga excesiva para el Covair. Despegó con dificultad llevando exactamente 854 libras contenidas en 34 bolsas.

Una vez en el aire, Fiano llamó por radio a Miami y dijo a su «padre» que ya podía entregar el dinero al boliviano. Para cobrarlo no se presentó sólo Alfredo Gutiérrez. Lo acompañaba otro «pez gordo» del narcotráfico, Roberto Gasser Terrazas. Llevaban sendas maletas cuando se presentaron en la puerta del Banco Kendall. Les recibió «un empleado del Banco» a quien ya conocían. Su nombre era John Lawier. No sospechaban, sin embargo, que también él era un agente de DEA. Les condujo a los dos hasta los sótanos del Banco donde él y Levine los arrestaron y maniataron en un abrir y cerrar de ojos.

El Convair llegó a Miami con el tren de aterrizaje averiado, pero traía la mayor carga de pasta básica de cocaína jamás confiscada.

En marzo de 1982 dos agentes de DEA fueron enviados a Bolivia para colaborar en la campaña antidroga. Más tarde DEA envió un equipo especial de adiestramiento compuesto por 45 agentes, 30 de los cuales desertaron porque consideraron que el trabajo en Bolivia era sumamente riesgoso.

Fiano y otros agentes que tomaron parte en el gran operativo son muy escépticos. Estados Unidos no tiene convenio de extradición con Bolivia, de ahí que los cargos contra Gasser quedaron sin efecto. Pudo obtener su libertad pagando una fianza de un millón de dólares. Alfredo «Cutuchi» Gutiérrez logró que el Juez Alcee Hasting le disminuyera su fianza de 3 millones de dólares hasta un millón. El millón de dólares lo pudo hacer efectivo firmando en el acto dos cheques de medio millón cada uno. El juez le dio la libertad provisional, pero Gutiérrez se fugó de los Estados Unidos hasta Bolivia. El es un experto aviador. Fue justamente él quien trajo clandestinamente a Bánzer desde Paraguay para que encabezara el golpe de 1971 contra Torres.

Después de trece meses, Gutiérrez tuvo que volver de nuevo a Miami. Pero esta vez no era para hacer negociados. Venía acompañado de dos oficiales bolivianos que lo entregaron a las autoridades judiciales norteamericanas. El pagaba en su persona, no sólo sus propios delitos, sino también la obsecuencia del gobierno militar boliviano ante las exigencias de Washington. («The Herald Miami», 16-V-1981.)

Aunque alejados todavía del poder económico y político de Roberto Suárez, el segundo puesto en el «ranking» del narcotráfico les corresponde, sin duda, a los hermanos Widen y Miguel Razuk, de ascendencia siriolibanesa, muy amigos del General Bánzer y protegidos del Coronel Faustino Rico Toro.

Miguel fue arrestado en Miami en el mes de junio de 1980 al intentar cambiar un cheque por valor de 3 millones de dólares que había sido girado desde Santa Cruz como pago por entrega de cocaína.

Widen fue Prefecto del Departamento de Santa Cruz bajo la Presidencia del General Bánzer y es conocido por sus exabruptos temperamentales, así como por su vinculación directa con grupos paramilitares. Su fábrica principal de sulfato de cocaína la tiene en la hacienda «La Perseverancia» (Norte de Santa Cruz). Otra de sus fábricas está en las cercanías de San Javier y se denomina «Verdún». Razuk ha construido una pista de aterrizaje en Sorotocó. Esta pista está celosamente custodiada por paramilitares armados entre los cuales se encuentran algunos alemanes mercenarios y quince bolivianos «La Perseverancia» produce 30 kilos diarios de pasta.

Tiene perfectamente montada la red clandestina. Su estrecha amistad con el Presidente Stroessner le ha abierto las puertas del Paraguay para exportar la droga desde ese país hasta Europa y el Medio Oriente, donde tiene muy buenos contactos. Sirviéndose de camiones cisternas que aparentemente transportan gasolina, ha logrado internar al Paraguay, no sólo pasta básica, sino también grandes cantidades de hoja de coca.

Conviene también hacer resaltar la importancia del matrimonio Pachi y Sonia Atalá. Sus relaciones con el Coronel Arce Gómez, con el General Hugo Echeverría y con el General García Meza han sido siempre muy estrechas. En su casa se han realizado las más importantes reuniones para coordinar las acciones ilícitas del narcotráfico.

Sonia fue tomada presa en La Paz en la presidencia de la señora Lidia Gueiler. Se la encarceló en la prisión de mujeres, en Obrajes. Pero muy poco duró su encierro. Sus importantes amigos lograron inmediatamente un certificado médico por medio del cual el juez accedió, sin mayores problemas, a que fuera trasladada a una clínica desde donde la hicieron fugarse con la mayor facilidad. Sigue existiendo una orden de captura en contra de ella, pero, por el momento, no sólo se siente totalmente libre, sino que ha incentivado aún más sus actividades delictivas.

Sonia y Pachi Atalá no quieren trabajar en la venta de pasta básica a los colombianos. Prefieren obtener directamente clorhidrato cristalizado, o sea cocaína pura y exportarla ellos directamente hasta Panamá y a Estados Unidos.

Los treinta principales narcotraficantes de Bolivia	
1 . Roberto Suárez Gómez	Catalogado por DEA como el número 1 de los narcotraficantes de cocaína.
2. Roberto Suárez Levy	Hijo y principal colaborador del anterior. Preso en Suiza.
3. Alfredo «Cutuchi» Gutiérrez	Socio de Suárez. Preso en Estados Unidos.
4. Marcelo Ibáñez	Enlace de Suárez con los narcotraficantes colombianos. Preso en Estados Unidos.
5. Renato Suárez	Sobrino y socio de Suárez.
6. Coronel Luis Arce Gómez	Primo de Suárez. Propietario de una compañía aérea compuesta por 12 aviones, dedicados principalmente al narcotráfico. Propietario de las principales fábricas de

	cristalización de la cocaína en San Ramón y en San Borra.
7. Coronel Norberto «Buby» Salomón	Socio de Arce en la compañía aérea.
8. Widen Razuk	Fábricas de sulfato de cocaína en sus haciendas « Perseverancia» (S. C.) y «Verdún» (San Javier). Exporta directamente desde su pista de «Sorotocó» a los mercados de Europa y Oriente Medio a través de la conexión paraguaya.
9. Miguel Razuk	Hermano y socio del anterior. Fue apresado en Miami.
10. José «Pepe» Paz Hurtado	Gran productor de sulfato de cocaína en la zona de Montero. Conexión con el Coronel Arce Gómez y con el General Echeverría.
11. Alex Pacheco	Exporta sulfato de cocaína directamente a Colombia desde la pista de Madidi (Norte del Dep. de La Paz).
12. José Roberto Gasser	Hijo de Edwin Gasser, dueño del ingenio azucarero «La Bélgica». Tanto el padre como el hijo son socios de Roberto Suárez.
13. Sonia y Pachi Atalá	Productores directos de clorhidrato de cocaína (cocaína pura). Exportan a Estados Unidos a través de Arce Gómez.
14. Roger Aponte	Antiguo contable de Suárez. En la actualidad exporta directamente desde su aeropuerto a la altura del km 13 de la carretera Santa Cruz-Cocha bamba.
15. Hugo Chávez López.	Posee sus fábricas en la zona de San Ramón.
16. Lina Badani de Malki	Del grupo de Arce Gómez. Contacto con los grupos colombianos.
17. Alfredo Pinto Landívar	Posee el mejor aeropuerto privado además de ser dueño del hangar 7 en el aeropuerto El Trompillo de la ciudad de Santa Cruz. Protegido del General Waldo Bernal.
18. Pedro Sorocho	Yerno y protegido del Coronel Ariel Coca.
19. Osman Yáñez	Es Mayor de Carabineros. Tiene producción propia y exporta a Leticia (Colombia) desde el aeropuerto de Bella Unión.
20. Oscar Roca	Primo y socio del anterior.
21. Guillermo Bánzer Ojopi	Contacto con los narcotraficantes de Miami. Preso.
22. Coronel Juan Fernández Vizcarra	Opera en Apolo (Dep. de La Paz). Protegido del Coronel David Fernández, primo de él.
23. Jorge Nallar.	Productor de sulfato de cocaína en el Norte de Santa Cruz. Protegido del General Juan Pereda Asbún.
24. Amado Nallar	Hermano y socio del anterior.
25. Pedro Bleyer	Presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz.
26. Francisco «Paco» González	Socio de Suárez.
27. Coronel José Camacho	Contacto con los grupos colombianos.
28. Oscar Aldunate	Vendedor de droga decomisada.

29. Lorgia Roca	Productora de sulfato de cocaína.
30. Erland Echevarria Barrancos	Fue socio de Abraham Baptista. Contacto directo con la mafia de Miami.

Nota: 1. A principios de septiembre de 1982, Roberto Suárez Gómez salió a la luz pública con una carta abierta al Presidente de los Estados Unidos para denunciar que su hijo Roberto Suárez Levi, de 22 años, había sido «secuestrado» de la prisión de Lugano (Suiza) por agentes del gobierno norteamericano y trasladado a una prisión de Miami (Estados Unidos) «sin haber esperado la finalización de los trámites internacionales de extradición». Suárez atribuye la persecución de que es objeto por parte de la DEA norteamericana a «la necesidad de justificar ciertos hechos que desembocan en hegemonías internacionales» y, tras amenazar con revelaciones públicas acerca de la corrupción de la DEA, ofrece entregarse a la justicia norteamericana a cambio de la libertad incondicional de su hijo y... ¿de la cancelación, por parte del gobierno norteamericano, de la deuda externa de Bolivia!

EL PODER DE LA MAFIA

1. El Militarismo en Bolivia

¿Cómo explicar el fenómeno de que una auténtica mafia civil-militar, que ha nacido de la corrupción y del abuso del poder y que ha engordado con el ilícito flujo de dólares que atrae del tráfico de drogas, llegue a hacerse dueña de todo un país como es el caso de Bolivia? Para aproximarse a una respuesta mínimamente consistente es preciso esbozar, aunque sólo sea a grandes rasgos, las características del poder de esta mafia. Y, para ello, hay que comenzar echando una mirada al pasado reciente de Bolivia.

La larga secuencia de golpes de Estado militares desde 1964 es, sin duda, lo que más llama la atención en la política boliviana. El resultado de ello es una inestabilidad político-institucional crónica que, a su vez, es la causa más profunda del golpismo. Las raíces más profundas de esta inestabilidad por su parte, habrá que buscarlas en las contradicciones del desarrollo del capitalismo en un país dependiente como Bolivia, lo cual queda fuera del objeto de este estudio.

El hecho básico es que las Fuerzas Armadas (FF.AA.) ocupan el escenario político de Bolivia casi ininterrumpidamente desde 1964. Ya entonces (dictaduras del General Barrientos), pero sobre todo desde 1971 (dictadura del General Banzer), los militares trataron de institucionalizar su presencia en el escenario político boliviano imitando el modelo brasileño, primero, y los sistemas argentino y chileno, después. Sin embargo, Y ésta es la particularidad sobresaliente del caso boliviano, no pudieron conseguirlo y fracasaron en su empeño, no obstante el decidido y directo apoyo que recibieron, abierta y encubiertamente, del gobierno de los Estados Unidos.

El poder militar es, esencialmente, de carácter fascista. Según un estudio del ex Presidente de la República Walter Guevara Arze, «Los militares en Bolivia» -editado en el exilio en agosto de 1981-, el origen del militarismo en su país es, en primera instancia, de tipo ideológico. «Como para todos los grupos humanos, la educación determina en gran medida la conducta militar», escribe Guevara. «La educación que reciben los oficiales producen en ellos ciertas deformaciones profesionales, que ocurren en otras partes, pero que en Bolivia resultan más profundas.»

Después de explicar que «los oficiales son educados dentro del país en el Colegio Militar de La Paz y en otras escuelas superiores de especialización que existen en Cochabamba», Guevara subraya el hecho de que, «además de esa educación reciben otra en el exterior, en la Escuela Militar de Las Américas de la zona del Canal de Panamá y en diversos institutos de los Estados Unidos». Y anota que por esa Escuela «han pasado unos 4.000 oficiales bolivianos, lo que equivale a decir casi todos los que ahora forman parte del establecimiento militar del país».

Ahora bien: según el ex presidente boliviano, es precisamente en las escuelas norteamericanas donde los oficiales bolivianos fueron formados ideológicamente en los esquemas de la llamada «Doctrina de la Seguridad Nacional y de la Defensa Ampliada», según los cuales la defensa exterior del país queda en manos de los Estados Unidos, mientras que el ejército local debe dedicarse a combatir al «enemigo interno», combinando la represión contra el movimiento popular con el desarrollo económico y social.

«Semejante educación simplista y parcial, sin el más insignificante elemento crítico -concluye el estudio de Guevara-, ha convencido a los militares bolivianos que su función 'sagrada' es gobernar Bolivia. Ni siquiera los estrepitosos fracasos que han sufrido en la ejecución de tales conceptos los han hecho cambiar de criterio. Por lo demás, incluso

aquélos que dudan de la validez de las enseñanzas recibidas se mantienen estrechamente leales al sistema por los beneficios que derivan del mismo».

¿Por qué los repetidos fracasos en institucionalizar el poder militar en Bolivia y cuáles son los beneficios que, a pesar de ello, extraen de él los militares? Estas preguntas tienen que ver con las peculiaridades del fascismo en Bolivia. De hecho, el intento más serio de institucionalizar el poder militar tuvo lugar bajo la dictadura del General Bánzer (1971-1978), período durante el cual se puso en marcha un experimento de acumulación acelerada de capital bajo moldes fascistas. Según otro pensador economista Pablo Ramos, en un estudio editado en México en mayo de 1981 bajo el título «Radiografía de un golpe de Estado», el objetivo del experimento consistió en crear las condiciones para un crecimiento económico autosostenido desmantelando la economía estatal y popular en beneficio de la hegemonía de la empresa privada.

«Apoyado en distintos factores tales como la explotación irracional de los recursos naturales (...), la expansión inflacionaria del crédito bancario al sector empresarial-privado, el uso desenfrenado del gasto público, la depresión sistemática de los salarios y, sobre todo, el irracional endeudamiento externo, el régimen fascista pudo mostrar, transitoriamente, ciertos éxitos económicos», anota Ramos.

La explicación de este éxito reside en que el régimen banzerista «no fue una dictadura militar al estilo tradicional», sigue diciendo Ramos. «Formó parte de un esquema continental de fascistización y puso todos los engranajes del Estado al servicio del capital. Fue un régimen ferozmente represivo de la clase obrera y se sustentó en el terror sistemático, aplicado como política de gobierno. Usó grandes cantidades de recursos, en magnitudes que ningún régimen anterior había dispuesto en toda la historia de Bolivia.» Y, sin embargo, el experimento fracasó. «Al final, sólo quedaron los pasivos; es decir, las deudas, junto con los socavones cada vez más vacíos, tanto en los yacimientos mineros como en los petroleros.»

Las causas del fracaso del fascismo en Bolivia no son de carácter coyuntural, sino estructural, sostiene Ramos. Sintéticamente, afirma que «las fuerzas que pueden generar una dinámica capitalista autónoma no existen, ni pueden existir, en Bolivia (...), ya que la burguesía se resiste a transformar en capital productivo las grandes masas de recursos que llegan a sus manos, por medios políticos principalmente».

¿Qué hace la burguesía boliviana con esas grandes masas de recursos? «Las distrae y dilapida en consumo suntuario, fugas al exterior y otros destinos alejados de la esfera productiva»,. Más adelante, Ramos se explica mejor: «La burguesía boliviana es inmediatista y está condenada a serlo de por vida. Es ventajista, en el sentido de que está sólo preocupada por lograr la prebenda inmediata, aunque ese logro agrave la situación del sistema en su conjunto. Cada fracción burguesa actúa dentro del estrecho marco de sus intereses de hoy y se preocupa por dar un zarpazo antes de que otra fracción se le adelante.» Además, «no están seguras de que su permanencia en el poder esté garantizada. Por eso se extranjerizan y trasladan al exterior una parte creciente de los excedentes generados en el país. Para el grueso de las fracciones burguesas, Bolivia es un país de tránsito, no es el país definitivo».

He ahí porqué el esfuerzo banzerista «resultó evidentemente vano, pues no aparecieron las fuerzas sociales y económicas que pudieran llevar adelante el desarrollo capitalista. El sacrificio de la economía fiscal y de la economía popular se convirtió en un aporte unilateral de carácter forzoso, pero no dio origen al crecimiento capitalista autosostenido».

«Sin embargo -concluye el economista boliviano-, el fascismo resultó indudablemente atractivo y de gran beneficio para los grupos dominantes en Bolivia. El uso irrestricto del poder estatal, sin limitación legal o moral de ningún tipo, ofrece innegables posibilidades de enriquecimiento. Es una forma política que permite la explotación sin freno de la fuerza de trabajo y facilita la transferencia del valor creado en la esfera de la empresa pública hacia manos privadas. Por lo demás, un régimen de este tipo utiliza los mecanismos de la corrupción como uno de los pilares centrales de la estructura de poder y como una de las condiciones para su permanencia y reproducción».

La corrupción como finalidad del poder: he ahí la «clave» de la subsistencia del fascismo en Bolivia y, por ende, del poder militar. En efecto, no se debe olvidar que una de las diferencias más importantes entre los fascistas europeos anteriores a la segunda guerra mundial y el neofascismo latinoamericano contemporáneo radica en la ausencia, aquí, de partidos políticos capaces de aportar una base de sustentación social amplia al régimen de terror. Todos los intentos de crear un movimiento político de masas desde el gobierno han fracasado en los fascismos latinoamericanos. De ahí que las FF.AA. hayan asumido, en todas partes, el rol de partido político para llenar, con sus propios subordinados, ese vacío. Lo demás sería cubierto con mercenarios.

Es así que a su tradicional función de «gendarme» y «guardia pretoriana» al servicio del «orden establecido», las FF AA. de Bolivia le añadieron la nueva función de «partido» de la burguesía para el ejercicio del poder político.

Pero el militarismo boliviano fue aún más allá: a fuerza de detentar el poder estatal y de ocupar la administración pública durante tanto tiempo, terminó convirtiendo a la institución militar en un semillero de «burgueses». O, para decirlo en palabras de otro analista de la realidad boliviana, autor de un estudio titulado «Ejército y vacas gordas en Bolivia: del General Bánzer al General García Meza», editado en noviembre de 1980, los militares han ingresado en un proceso de «aburguesamiento relativo».

Este proceso es consecuencia del enriquecimiento que experimentaron los militares en función de gobierno durante el período 1974-1977, cuando una coyuntura económica internacional favorable permitió unos ingresos extraordinarios en el país por concepto de exportación de materias primas y de endeudamiento externo. Este flujo de ingresos se tradujo, en el interior de la institución militar, en un considerable aumento de los sueldos militares (sin contar que los

innumerables militares que ocupan funciones civiles de toda índole, tales como prefectos, alcaldes, presidentes o gerentes de empresas autárquicas o estatales, reciben además un sueldo civil), en grandes beneficios sociales de carácter personal y facilidades financieras (gracias a los cuales, por ejemplo, se han podido construir casas, comprar tierras o invertir en negocios) y en escandalosas ventajas aduaneras (con lo cual tienen al alcance de la mano, en tiendas militares libres de impuestos, toda clase de productos manufacturados traídos directamente desde Panamá o Miami y automóviles de lujo).

Con todo esto, previene el estudio citado, no se quiere decir que los militares «constituyan una nueva burguesía susceptible de invertir en negocios (aunque algunos lo hayan hecho), sino que han aumentado su consumo y su nivel social hasta el punto de aparecer como nuevos ricos».

Más aún. El grupo de oficiales más próximos a Bánzer se benefició, además, de toda clase de favores y licencias derivadas de la posición que cada uno de ellos ocupaba en la administración de los asuntos públicos. De ahí a los abusos y a la corrupción sólo hay un paso. Así, varios jefes y oficiales se involucraron en negociados y tráficos escandalosos, al margen de toda ley y con total impunidad, las más de las veces conjuntamente con civiles. Ese es el origen de algunas fortunas espectaculares. De todos los tráficos (de gasolina, de maderas preciosas, de automóviles, de armas...), el que mayores superganancias engendra es, sin duda alguna, el de la cocaína. De este modo nació la mafia militar-civil narcotraficante.

A este respecto apunta el ex presidente Guevara en su estudio ya citado: «El negocio se remonta a diez o doce años atrás, época a partir de la cual buscó y obtuvo la protección directa o indirecta de los gobiernos militares. Los primeros grandes traficantes se establecieron bajo el gobierno de(General Bánzer,y, a partir de entonces, el negocio se ha incrementado en proporciones gigantescas. Los militares han ido comprometiéndose cada vez más, deliberadamente o no, proporcionando a los narcotraficantes impunidad, protección e incluso la utilización de ciertas facilidades oficiales, como los sistemas de comunicación de las propias Fuerzas Armadas.»

«La cocaína se ha convertido en un componente importante del poder político en Bolivia», reza la conclusión a la que ha llegado el ex presidente de Bolivia. «Al parecer, ni siquiera en los Estados Unidos se percibe la verdadera significación de este problema para el país. Desde luego, la fabricación y comercialización de esta droga ha introducido un nuevo y significativo elemento para aumentar la solidaridad interna y determinar las decisiones de las Fuerzas Armadas.»

El autor de «Ejército y vacas gordas en Bolivia: del General Bánzer al General García Meza» extrae una segunda conclusión: la corrupción (y hoy, sobre todo, el tráfico de la cocaína) se ha convertido en el cordón umbilical que une a los militares bolivianos al poder.

Tres son las hipótesis que alimentan semejante conclusión. En primer lugar, antes que el deseo de un mayor enriquecimiento, es más bien el temor de sufrir una disminución de sus ingresos tras un período de «aburguesamiento» lo que incita a los militares a permanecer en el poder, o, si han tenido que dejarlo (como en 1979), a regresar a él. En segundo lugar, con Bánzer fue sólo una fracción del Ejército la que alcanzó los más altos niveles del poder estatal; es, pues, entre los jefes y oficiales que menos se han aprovechado de la situación por haber sido relegados a puestos secundarios durante todo el gobierno de Bánzer que se encontrarán los partidarios más exaltados de una continuidad del Ejército en el poder. En tercer lugar, cuanto más se hayan implicado militares en negociados y tráficos ilícitos y cuanto más condenables sean éstos, tanto más temerán estos militares tener que rendir cuentas algún día y tanto más estarán dispuestos a cualquier aventura golpista.

En todo caso, estas tres hipótesis buscan explicar desde el punto de vista de la lógica y dinámica institucional del sistema militar (es decir, «desde dentro», sin perder de vista que una explicación completa requiere otros datos de carácter sociopolítico) el porqué del golpismo boliviano, el porqué de la supervivencia del militarismo contra viento y marea y el porqué de la voluntad suicida de los militares de aferrarse al poder a cualquier precio.

2. Economía y Narcotráfico

No intentaremos desentrañar el «programa económico» de los últimos gobiernos militares de Bolivia, ni aun, siquiera, el señalar sus crasos errores y las dolorosas frustraciones que vive actualmente ese pueblo. En realidad, la burguesía boliviana y los militares que la representan no tienen un proyecto político-financiero que represente sus intereses. Están preocupados por enriquecerse lo más rápidamente posible, siendo incapaces para formular los lineamientos que abarquen un amplio horizonte del futuro nacional. La burguesía boliviana vive cada instante como si fuera el último, y dentro de ese que hacer, la formulación de programas a largo plazo es sólo una tarea distraccionista. La burguesía boliviana es inmediatista. Está preocupada por lograr prebendas inmediatas, aunque ese logro agrave la situación en su conjunto. Los gobiernos militares, fieles a esa concepción tremendamente egoísta, han administrado el poder dentro del estrecho marco de sus propios intereses inmediatos.

No puede resultar extraño, por lo tanto, que un régimen fascista se instaure en Bolivia, no sólo sin el más mínimo programa económico, sino también demostrando incompatibilidades profundas y total incompetencia.

El estancamiento de las negociaciones para el refinanciamiento de la deuda externa ha sido el más duro revés para la política económica de los últimos regímenes militares bolivianos. El periódico «Wall Street Journal» señala que la inestabilidad política del país y la participación de sus gobernantes en el narcotráfico han conducido al estancamiento de las negociaciones. El periódico llega a afirmar: «El gobierno boliviano está pagando los salarios del sector público y proyecta comprar aviones franceses con fondos obtenidos por el mercado ilícito de la cocaína...» (8-V-81).

Muchos de los militares creyeron, lo mismo que García Meza y Arce Gómez, que los fabulosos ingresos del narcotráfico serían más que suficientes para reflotar la economía boliviana. El problema merecería un estudio especializado y profundo que no es el objetivo de esta publicación. La situación económica actual no deja de presentar una aparente contradicción: Cuando ingresa al país una extraordinaria corriente de dinero estimada en unos 1.600 millones de dólares anuales por la venta de la cocaína es justamente en ese momento cuando el país presenta la mayor crisis económica de su historia. ¿Cómo se explica todo esto?

No es posible ignorar que un alto porcentaje de las divisas que circulan en Bolivia se obtienen a través del mercado ilegal de la cocaína. Es más: la mayor parte de esas divisas tiene relación directa o indirecta con el narcotráfico. El valor de todas las exportaciones del país no sobrepasa los 850 millones de dólares. Es muy posible que los fondos obtenidos a través del mercado de la cocaína doble esa cantidad.

Un ingreso tan voluminoso y tan desproporcionado con la realidad económica del país no puede dejar de tener impacto decisivo en la economía nacional. El mayor efecto se produce, a no dudarlo, sobre la situación cambiaria, pues la afluencia de «coca-dólares» permite incrementar la oferta de moneda extranjera y mantener, en cierto grado, un tipo de cambio más bajo de lo que correspondería si no se dispusiera de esa entrada ilegal de dólares.

Los «coca-dólares» llegan en efectivo, en forma de remesas, a las manos de los productores de sulfato o de clorhidrato de cocaína y de éstos (en forma mucho más reducida) a los productores de hoja de coca, pasando por los revendedores y transportistas. Una parte de las divisas ingresa al mercado cambiario a través de las casas de cambio y otras agencias que operan en el canje de divisas. El resto ingresa al circuito a través de compras de bienes durables (televisores, coches, radios, grabadoras...) que se adquieren generalmente en Panamá, pagando en dólares, «Así los «coca-dólares» financian una parte importante de las salidas de divisas al exterior y una parte, también, de las importaciones legales de bienes.

Es evidente que los «coca-dólares» no llegan y no pueden llegar directamente al Banco Central y, por lo tanto, no tienen un efecto monetario directo. Lo que tienen es un efecto indirecto sobre la economía del país. Las personas que poseen dólares provenientes del narcotráfico necesitan siempre una cierta cantidad de pesos bolivianos para solventar sus gastos corrientes. Por medio del mercado cambiario obtienen la moneda nacional requerida. El vínculo, por lo tanto, es a través de mercado de cambios.

Es por intermedio de ese mercado por el que se «blanquean» los «coca-dólares». Pero esta especie de «legalización» del dinero mal habido se lo hace también por medio de las cuentas corrientes en los Bancos del Exterior (Bancos de Suiza, de Estados Unidos, de Panamá, de las Bahamas...). El «blanqueo» es importante para borrar las huellas de narcotráfico. Los narcotraficantes bolivianos, contando con las grandes posibilidades que les ofrece su país para internar contrabando, prefieren muchas veces «blanquear» los dólares adquiridos por la venta de cocaína en Miami o Panamá, comprando mercancía e internándola ilegalmente a Bolivia. Este contrabando se lo hace generalmente por medio de los aviones Hércules que poseen las Fuerzas Armadas de Bolivia. El año 1981 uno de esos aviones, cargado de contrabando, se vino abajo, desapareciendo en las aguas del Caribe.

En un mercado libre de divisas el problema del «blanqueo» no es tan agudo, pero siempre existe. De ahí que los narcotraficantes busquen vincularse con gente que tenga en Bolivia negocios establecidos para lograr de este modo la cobertura necesaria. Esto provoca un ensamblamiento de intereses, muy difícil de desdoblarse, entre los negocios lícitos e ilícitos. ¡Con más razón aún si los que los hacen ocupan posiciones claves en el gobierno! En estas circunstancias, aun el propio «blanqueo» deja de ser un problema importante. Con una política económica de libre cambio y con unas posibilidades ilimitadas para internar al país cualquier producto a través del contrabando, los «coca-dólares» se limpian fácilmente perdiéndose todo rastro para saber qué productos han sido adquiridos legalmente y cuáles lo han sido con dinero ilegal. Los «coca-dólares» se transforman en automóviles, televisores o en suntuosos edificios. No es casual el que en Bolivia, los principales narcotraficantes estén estrechamente vinculados a los grandes negociantes de Santa Cruz a través de la Cámara de Industria y Comercio.

La política económica de los últimos regímenes militares de Bolivia está marcada con el signo de la cocaína y así pasará a la historia. Como herencia queda para los futuros regímenes civiles la difícil tarea de desenredar y cortar los hilos del narcotráfico que se ha extendido por el país como una gigantesca tela de araña (P. Ramos: «Radiografía de un golpe de Estado». Mimeografiado. México, 1981, p. 41 y ss.)

Sería interesante analizar si, aún en términos meramente económicos, la afluencia de los «coca-dólares» ha sido positiva para la economía boliviana. Existen poderosas razones para ponerlo en duda. El primero y el más negativo efecto ha sido que, por razón de las implicaciones de los gobiernos últimos con el narcotráfico, a Bolivia se le ha impuesto internacionalmente una especie de cerco económico de consecuencias desastrosas para su economía. La consecuencia más impactante de ese bloqueo ha sido la suspensión de los créditos, así como las tratativas tendientes a refinanciar la deuda externa.

Otra consecuencia negativa emergente del narcotráfico ha sido la fuga de capitales. La cantidad más grande de «cocadólares» no ingresa a la corriente de bienes del país, sino que va a parar, cada vez con más facilidad y frecuencia, a los Bancos de Suiza, de Panamá, de Nassau o de Taiwán. No deja de ser sintomático que el Banco de Santa Cruz de la Sierra, muy ligado, junto con el banco Ganadero del Beni, a personas muy vinculadas al narcotráfico, ya ha establecido una filial en Panamá, uno de los lugares privilegiados para el «blanqueo» de los «cocadólares».

Otro de los efectos contraproducentes de los dólares provenientes del tráfico de drogas contra la economía boliviana es que gran parte de ese dinero se invierte en Miami o en Panamá en la compra de productos manufacturados que

después se internan a Bolivia por las vías (legales del contrabando... Gran parte de los automóviles, radio-cassettes, grabadoras, relojes, televisores, tocadiscos... son adquiridos en el extranjero con esos dólares y entran al país por esos medios ilegales.

Pero ha habido instituciones que se han visto favorecidas por la corriente de los «coca-dólares». Lo han sido, de una manera muy destacada, las Fuerzas Armadas y los Organismos de Seguridad. Entre los Organismos de Seguridad (sería más acertado llamarlo «de inseguridad») cabe señalar la eficaz infraestructura que el Coronel Arce Gómez ha dado con esos fondos a los temibles paramilitares y a los organismos pseudo-estatales como el SES o el DIE.

3. Los «Paramilitares»

La existencia de bandas armadas de carácter absolutamente irregular e ilegal, compuestas de elementos organizados militarmente y vestidos de civil, dedicados a las «tareas sucias» de la represión política y del terrorismo al servicio del Estado, genéricamente denominadas «policías paralelas» o «grupos parapoliciales» o «paramilitares», no es, por cierto, algo propio al fascismo boliviano. Desde hace mucho tiempo y en muchos países del mundo, muchos pueblos han tenido que enfrentarse a esta excrecencia social. Sin embargo, las dimensiones que este fenómeno ha cobrado en Bolivia tienen, sin duda, pocos precedentes.

Los «paramilitares» en Bolivia han llegado a constituirse en un verdadero «ejército paralelo», no sólo debido a su capacidad operativa y la impunidad con que actúan, sino también porque su poder se nutre de la misma fuente que el poder las Fuerzas Armadas.

Aunque como «poder paralelo» son un fenómeno absolutamente nuevo e inédito en la historia de Bolivia, se puede rastrear parte de sus orígenes remontándose hasta los grupos de choque que, en los años cincuenta, organizó la fascistoide Falange Socialista Boliviana (FSB) con el nombre de «Camisas Blancas» para hacer frente a las milicias populares del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), entonces en el poder. De esa época data el nombre de Carlos Valverde Barbery, que llegó a protagonizar una aventura guerrillera en Santa Cruz y, en 1971, lanzó a sus huestes falangistas contra el movimiento popular bajo la consigna «Como en Yakarta, casa por casa», siendo por ello premiado por el dictador Banzer con el Ministerio de Salud.

Fue con ocasión del sangriento golpe de Estado que implantó el fascismo en Bolivia, en agosto de 1971, cuando hicieron su aparición los primeros embriones de grupos paramilitares. Mientras en La Paz hacían el oficio de francotiradores asesinos (militantes falangistas como el «Mosca» Monroy o Alberto Alvarez y delincuentes juveniles como la banda de los «Marqueses»), en Santa Cruz se hacía el experimento de aplicar el sistema de «escuadrones de la muerte» importado del vecino Brasil. Widen Razuk Abrene y Oscar Román Vaca dirigieron dos de estos «escuadrones» que entre el 19 de agosto de 1971 y marzo de 1972 se cobraron la vida de 304 personas (según testimonio del más tarde ministro del Interior del gobierno Gueiler, Jorge Selum). A raíz de su probada adhesión a un régimen terrorista como lo fue el de Banzer, todos fueron premiados con cargos públicos: Monroy fue a la Dirección de Aduanas, Alvarez a la Presidencia de la Lotería Nacional, Razuk a la Prefectura del Departamento de Santa Cruz y Román Vaca a la Presidencia del Comité Pro Santa Cruz.

Con estos y otros elementos provenientes del ejército, la policía y el hampa, el régimen banzerista organizó su policía política bajo la denominación de Departamento de Orden Político (DOP) encubierto como dependencia del Ministerio del Interior. Desde entonces suenan los nombres del eterno coronel Rafael Loayza, jefe de Inteligencia del Ministerio del Interior (en la práctica, lo mismo que el Servicio de Inteligencia del Estado o SIE), del entonces capitán Carlos Mena (jefe de Operaciones del Ministerio del Interior, más tarde sucesor de Loayza), del coronel Jorge Cadima, el capitán Rudy Landívar y el mayor Tito Vargas (de la Sección II del Ejército) y de los civiles Guido Benavides (inspector de Policía, jefe del DOP, luego de la Dirección de Investigación Nacional o DIN), Jorge «Coco» Balvián y Daniel «Damy» Cuentas (ex militantes revolucionarios) o «El Trío oriental», del hampa de Santa Cruz, todos ellos tristemente célebres torturadores.

Durante los siete años que duró el régimen fascista, estas bandas semiclandestinas y parapoliciales fueron las encargadas de sembrar el terror entre la población, especializándose en los asaltos nocturnos a los domicilios de quienes resultan molestos al régimen y en cada vez más refinados sistemas de «interrogatorio» y tortura a los «detenidos» (en realidad, secuestrados) políticos.

Fue el 7 de agosto de 1978 cuando se denunció por primera vez públicamente la existencia de grupos paramilitares en Bolivia. En un comunicado de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia se acusó concretamente al «grupo paramilitar FSB, célula I» de Oruro, dirigido por Víctor Hugo Méndez y Alfonso Dalence, de ser el autor del atentado, robo y destrucción de la oficina local de Derechos Humanos. Igualmente se denunció al grupo paramilitar «Legión Boliviana» de Cochabamba, a cargo de los hermanos Alarcón, y al grupo paramilitar de Raúl Fuentes, activo en el distrito minero de Siglo XX.

El 13 de septiembre de 1978, un atentado dinamitero destrozaba la residencia de los sacerdotes de la parroquia católica de Loreto, en la ciudad de Cochabamba, y cuatro días después, la Asamblea de Derechos Humanos volvía a alertar a la opinión pública sobre «el recrudecimiento de la actividad paramilitar».

El 15 de junio de 1979, la Asamblea volvía a la carga con «un nuevo llamamiento para que se adopten a la brevedad posible acciones energéticas y contundentes para la disolución de los grupos paramilitares y el enjuiciamiento de sus responsables». La denuncia documental sobre el accionar de estos grupos incluía, esta vez, la nómina de una treintena de elementos componentes de los mismos. La Asamblea terminaba su comunicado profetizando que «las garantías del

advenimiento de una democracia están en gran parte dependiendo de que nuestro pedido sea tenido en cuenta». Un año después, en julio de 1980, los paramilitares ya estaban en el poder.

¿Cómo fue eso posible? Para entenderlo, es preciso referirse al contexto en que se produjo el vertiginoso desarrollo de la organización paramilitar. En enero de 1978, movilizaciones populares habían obligado al régimen fascista a conceder una amnistía total, gracias a la cual miles de exiliados políticos habían podido regresar a su país. En julio del mismo año, el régimen no había podido impedir que, en unas elecciones prefabricadas, un candidato oficial (el general Juan Pereda, ministro del Interior desde 1974) fuese derrotado por la oposición. Ante el fracaso del proyecto de «legitimación electoral» de la dictadura, Pereda se alzó en armas contra Banzer y le quitó el gobierno, el 2 de julio, para ser derrocado, a su vez, el 24 de noviembre, por el comandante del ejército, general Padilla. Bajo presión norteamericana, éste prometió nuevas elecciones, esta vez limpias, para julio del año siguientes. Fue en este contexto de «debacle», y desmoronamiento del régimen militar que los sectores fascistas más lúcidos del mismo empezaron a organizarse para sobrevivir y preparar su contraofensiva.

Ahora se sabe que fue en 1978 cuando empezaron a llegar a Bolivia los primeros mercenarios extranjeros reclutados por el criminal de guerra alemán Klaus Barbie-Altmann (jefe de la policía política nazi GESTAPO en la ciudad francesa de Lyon durante la Segunda Guerra Mundial) por cuenta del Ministerio del Interior boliviano (léase DOP-SIE), del que el nazi refugiado en Bolivia era asesor.

Así llegaron a Bolivia los argentinos Alfredo Mario Mingolla, González Bonorino y Silva, todos ellos procedentes de la tenebrosa «Alianza Anticomunista Argentina» (o «Triple A»), con tratados por el Ministerio del Interior, por intermedio de Altmann, para actuar como provocadores durante la campaña electoral de 1978. Fue este grupo terrorista el que dinamitó la sede parroquial de Loreto, en Cochabamba, en septiembre del mismo año.

También en septiembre de 1978 fue cuando llegó a Bolivia, contactado por Altmann, el terrorista alemán Joachim Fiebelkorn (desertor del ejército alemán, mercenario de la Legión Extranjera, vinculado a la «Internacional neonazi»), procedente de Paraguay. A fines del mismo año, Altmann se trajo de Paraguay a otro alemán, el ex soldado nazi Hans Joachim Stelifeld, que trabajaba allí al servicio de la organización nazi «Kamaradenwerk». Por otra parte, fue también en 1978 cuando llegó a Bolivia el mercenario belga «coronel» Jean Schramme, igualmente desde Paraguay. Todos ellos recibieron sueldo y credenciales del Ministerio del Interior boliviano y fueron encargados de la instrucción militar de grupos irregulares.

Entretanto, los viejos matones falangistas dan muestra no sólo de vitalidad y capacidad operativa, sino también de impunidad, ocupando, en acción militar, durante la campaña electoral de 1979, el aeropuerto de Santa Cruz para impedir la llegada del candidato de la oposición. En esa ocasión reaparecen Carlos Valverde, Widen Razuk y el «Mosca» Monroy.

Pero no es sino hasta la derrota del efímero régimen fascista del coronel Natusch, en noviembre de 1979, que el proceso de organización de grupos paramilitares «profesionalizados» arranca propiamente. En una carrera contra reloj, se trata de poner en pie todo un «ejército de paramilitares» con el objetivo de conquistar el poder, puesto que el ejército había sido derrotado y la desmoralización cundía en sus filas.

En efecto, desde la victoriosa insurrección popular de 1952 nunca el ejército había vuelto a morder el polvo de la derrota como esta vez. Sólo tres meses antes había culminado el proceso democrático-electoral boliviano con la elección de un presidente interino de la República en la persona del abogado Walter Guevara Arce; haciendo de tripas corazón, los militares habían tenido que replegarse a sus cuarteles tras 15 años de ejercicio del poder. Era el 6 de agosto de 1979. El 1 de noviembre ya estaban de vuelta. Tras un «ensayo general» en octubre, el coronel Natusch proclamó el fin de la democracia representativa en Bolivia y reimplantó el régimen militar. Quince días más tarde, Natusch tuvo que abandonar el Palacio de Gobierno por la puerta trasera repudiado por el pueblo. El Parlamento nombró un nuevo presidente interino en la persona de la señora Lidia Gueiler y ésta convocó nuevas elecciones para junio de 1980.

El ex presidente Guevara escribió más tarde: «Si los militares bolivianos aprendieron o no algunas lecciones del golpe fracasado de Natusch Busch es algo que puede discutirse. Lo que no puede ignorarse es que los asesores argentinos del Estado Mayor sacaron las conclusiones apropiadas y eso fue muy importante, porque ellos dirigieron el golpe del 17 de julio de 1980.»

Al día siguiente del aplastamiento del golpe de Natusch, el proceso de preparación del próximo golpe teniendo como brazo ejecutor a una fuerza paramilitar arrancó con fuerza. La influencia argentina fue decisiva. Se trataba de aprovechar al máximo la experiencia de la «represión clandestina» puesta en marcha por el Ejército argentino antes del golpe de 1976 a través de grupos «parapoliciales» tales como la «Triple A» dirigida por el ministro López Rega y oficiales superiores de la Policía Federal. Las ventajas de este método eran múltiples: el ejercicio del terrorismo de Estado desde las sombras es mucho más efectivo que desde una institución expuesta a la luz pública, pues logra bajar la moral del «enemigo» (léase movimiento popular) desatando el pánico en sus filas, al mismo tiempo que mantiene la ilusión de una «neutralidad» de las Fuerzas Armadas o, por lo menos, no las desgasta en las «tareas sucias» de la represión política; por otra parte, logra intimidar a los sectores militares «blandos» (léase institucionalistas o democráticos) que se atreven a cruzarse en el camino de los sectores «duros».

Los expertos argentinos en las técnicas de provocación, el terrorismo, el secuestro, la tortura y la «desaparición» llegaron en masa a Bolivia. Es verdad que el capitán Miguel Angel Benazzi, oficial de Inteligencia y uno de los primeros torturadores de la Escuela de Mecánica de la Armada argentina, ya se hallaba en Bolivia desde 1978,

mimetizado como funcionario de la Agregaduría Naval de la Embajada argentina. En 1980 llegaron los «pesos pesados»: el siniestro capitán Antonio Pernía, que antes se había fogueado en operaciones clandestinas en París y Madrid, y el capitán Schelling, ex jefe de Inteligencia del aparato represivo montado en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) en Buenos Aires, quien se llevó a todo su equipo de torturadores. En poco tiempo, la Misión Militar argentina en Bolivia infló su personal encubierto, hasta llegar a contar 70 funcionarios.

La piedra fundamental para la construcción de esta fuerza paramilitar golpista fue, sin duda, el Departamento II (o Sección de Inteligencia) del Estado Mayor General del Ejército desde el momento en que, a raíz del golpe de Natusch, cayó en manos del coronel Luis Arce Gómez. Tras el fracaso del golpe, Arce Gómez se atrincheró en el Departamento II y, ante la pasividad del gobierno y de los demás jefes militares, hizo de él su feudo. Aún más: el 22 de noviembre (sólo una semana después de la vergonzosa retirada de Natusch del Palacio de Gobierno), Arce Gómez se atrevió a desafiar al nuevo gobierno, saqueando él personalmente las oficinas del DOP-SIE sitas en el edificio del Ministerio del Interior y llevándose sus archivos y su personal al Departamento II, instalado en el Cuartel General del Ejército.

De este modo, los Loayza, Mena, Benavides y demás torturadores del antiguo DOP pasaron a depender del Departamento II del Ejército, desde noviembre de 1979, a las órdenes directas de Arce Gómez. Este, desde luego, reunía las mejores condiciones para hacer de centro de la red: experto en explosivos, envuelto en asesinatos políticos diez años antes, resentido social, inescrupuloso y megalómano. Y, además, una «cualidad» que resultó ser la más importante: narcotraficante. Fue a través de Luis Arce Gómez y de sus contactos con la mafia del narcotráfico que la fuerza paramilitar en construcción encontró no sólo su principal fuente de financiación, sino también su principal forma de crecimiento cuantitativo mediante la incorporación masiva de los pistoleros a sueldo de los narcotraficantes a las filas de la fuerza paramilitar. Los encargados del reclutamiento de los traficantes de cocaína fueron, precisamente, dos oficiales de la Sección II del Segundo Cuerpo de Ejército (estacionado en Santa Cruz), personalmente vinculados a la mafia del narcotráfico: el mayor Abraham Baptista y el capitán Rudy Landívar.

Así se fue tejiendo, desde los primeros meses de 1980, una extraña y tenebrosa simbiosis de servicios secretos, hampa del narcotráfico, militantes falangistas, mercenarios extranjeros, torturadores de la policía política y oficiales del Ejército, todo ello bajo la dirección invisible de la Misión Militar argentina. La jefatura de esta banda terrorista quedó en manos del coronel Arce y su coordinación operativa fue encargada a un equipo de «diplomados» en técnicas modernas de represión o «contrainsurgencia», encabezado por el coronel Freddy Quiroga y el capitán Hinojosa, ambos procedentes del SIE.

La banda «debutó» en marzo de 1980, secuestrando y asesinando, con técnicas desconocidas hasta entonces en Bolivia, al sacerdote jesuita Luis Espinal, director del semanario de izquierda «Aquí», único órgano de prensa abiertamente crítico del golpismo militar. Una ola de atentados y explosiones, varios de ellos mortales, recorrió el país los meses siguientes hasta la víspera misma de las elecciones del 29 de junio. Nunca antes se había dado en Bolivia un terrorismo de esa naturaleza. A mediados de junio, los paramilitares falangistas protagonizaron, inclusive, un «ensayo general» con la toma de la ciudad de Santa Cruz. La pasividad, si no complicidad, de los mandos del Ejército con la subversión y las conjuras de los paramilitares del coronel Arce era evidente. Así se llegó hasta el golpe del 17 de julio.

Las operaciones del golpe de Estado estuvieron por completo a cargo de los paramilitares. En el transcurso de sólo una hora y media, unas cuantas decenas de individuos vestidos de civil, entrenados militarmente y armados con metralletas, recorrieron la ciudad de La Paz en ambulancias, al mediodía, y lograron secuestrar a la presidenta de la República y a su gabinete ministerial en pleno (se hallaban sesionando en el Palacio de Gobierno), a la dirección político-sindical del país (estaba reunida en el local de los sindicatos) y acallar por la fuerza a todas las radioemisoras de la ciudad. Una vez paralizada la capital, los paramilitares entregaron el poder en bandeja de plata al Ejército en la persona de su comandante general, el general Luis García Meza.

El intelectual boliviano Pablo Ramos Sánchez ha escrito al respecto: «En la mecánica de este golpe, los paramilitares tuvieron a su cargo las tareas sucias de asaltar locales, tomar prisioneros, perseguir políticos, allanar domicilios, robar, torturar, asesinar y desencadenar el terror en Bolivia. Al utilizarlos, los golpistas no sólo mostraron a sus camaradas de armas que podrían actuar independientemente del resto de las FF.AA., es decir, que tenían capacidad para lanzarse a la calle sin necesidad de recurrir a la movilización de regimientos militares cuyos comandantes podrían no estar dispuestos a ensuciarse las manos y el uniforme en tareas gansteriles. Pero, además, les permitía demostrar a los indecisos o reticentes que también podrían correr la misma suerte que los políticos a manos de los paramilitares».

De esta forma, la mayor parte de los comandantes de regimientos no dudaron en participar en la represión, especialmente sangrienta en las minas. El dinero proveniente del narcotráfico se encargó del resto. En cuanto a la tropa, fue embarcada en las «tareas sucias» en virtud de los principios militares de disciplina y subordinación. A este respecto sigue escribiendo Pablo Ramos: «Es cierto que, después de cumplidas las primeras acciones, salieron a la calle las patrullas militares (...) Es de tener en cuenta que en los allanamientos actuaban juntos, militares y paramilitares, correspondiendo a estos últimos la iniciativa, mientras que los primeros representaban el respaldo de la fuerza.»

«Es digno de anotar, para la historia», sigue el comentario, «lo que ocurría en estas operaciones conjuntas: mientras los oficiales y soldados actuaban con el rostro descubierto, los paramilitares se recubrían con medias nylon de mujer, dando a su presencia un aire de tenebrosidad capaz de desencadenar el pánico en los familiares de los perseguidos. Tales precauciones de los paramilitares obedecían a razones de seguridad, pero también a propósitos específicos de amedrantamiento. Seguramente los propios soldados sentían escalofríos cuando escuchaban las voces deformadas de quienes les daban órdenes desde el fondo de una máscara (...) Tales hechos se marcaron de manera indeleble, para

bien o para mal, en la conciencia de los jóvenes militares que participaron en ellos» (Pablo Ramos, en «Radiografía de un golpe de Estado», México, mayo de 1981).

Tras el golpe, las filas de los paramilitares se nutrieron con centenares de individuos, oportunistas o convencidos, procedentes de todos los sectores sociales (desde la empresa privada hasta el hampa), ultraderechistas por anticomunismo, catolicismo integrista o, simplemente, por narcotraficantes.

Desde entonces, los paramilitares se han convertido en una especie de «ejército paralelo» o guardia pretoriana al servicio, indistintamente, del sector fascista del Ejército y de la mafia del narcotráfico. Con los fondos provenientes de éste se les ha dado un sueldo regular, inscribiéndolos en la plantilla de personal de diversas instituciones, tales como la oficina de Formación de Mano de Obra (FOMO), la Lotería Nacional, la Aduana, la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) de La Paz, el magisterio, varios ministerios, sin contar el Ministerio del Interior y la Sección II del Ejército. También se les ha dado un status semilegal con la creación del Servicio Especial de Seguridad (SES) como marco para encuadrarlos.

Primero apareció el Comando de Operaciones Conjuntas (COC), según el modelo argentino, como una especie de «Estado Mayor General de los paramilitares», a cargo del coronel Faustino Rico Toro, ex ministro del Interior que acababa de regresar de una larga estadía en los Estados Unidos. Luego, Rico Toro fue transferido a la Jefatura del Departamento II del Ejército como sucesor de Arce Gómez, pues éste decidió hacerse cargo personalmente del Ministerio del Interior. A la Jefatura del COC pasó el coronel Carlos Rodríguez Lea Plaza, jefe del Departamento III (Operaciones) del Ejército y rival de Rico Toro. Entonces se creó el SES como dependencia del Ministerio del Interior (en realidad se pretendía sustituir al ex DOP-SIE), cuya dirección fue encomendada al coronel Freddy Quiroga, incondicional de Arce Gómez. En octubre de 1981, mediante decreto, el SES fue disuelto y en su lugar se creó la Dirección de Inteligencia del Estado (DIE), a cuyo frente siguió el coronel Quiroga, al menos hasta marzo de 1982.

Pero los paramilitares son algo más que el «brazo largo» de los sectores fascistas del Ejército. Son un verdadero poder del Ejército, pues los jefes y oficiales vinculados a ellos controlan, al mismo tiempo, los puestos claves dentro del Ejército. Estos jefes y oficiales funcionan, incluso, como una «logia secreta», que dice llamarse «Aguilas Negras». Por otra parte, los paramilitares mismos funcionan como una verdadera «mafia» que ha logrado penetrar en todos los entresijos del aparato estatal.

Como dice Pablo Ramos en su estudio ya citado: «Los paramilitares no sólo desempeñaron tareas militares y represivas, pues formaron parte importante entre las bases de sustentación política y social del régimen. Surgidos de las capas medias y del lumpen, constituyen los sectores más agresivos en el accionar político de la derecha boliviana. Incluso llegaron a copar segmentos importantes de la administración pública, especialmente aquéllos donde existe la posibilidad de enriquecimiento fácil. Así, lo primero que controlaron fue la Lotería Nacional, la Caja de Seguro Social, las oficinas recaudadoras de impuestos a la coca, las oficinas de la Renta Interna y de las aduanas. Demás está decir que coparon todas las reparticiones del Ministerio del Interior.»

En un afán por justificar su existencia ante la opinión pública, el dictador García Meza dijo una vez que los paramilitares «no son gente sin oficio ni beneficio, ya que muchos de ellos son abogados, médicos, ingenieros y arquitectos» y que «muchos de ellos son elementos nacionalistas y conscientes, pero necesitan ser controlados para evitar abusos como el cometido por un paramilitar en Santa Cruz, que disparó contra un camarero porque se negó a servirle una cerveza después del toque de queda».

Más brutal fue Arce Gómez. A una pregunta periodística, en mayo de 1982, acerca de quién tenía razón, si la opinión pública que piensa que aún existen los paramilitares o si el Ministerio del Interior que los niega, Arce Gómez respondió: «Pienso que el Ministerio del Interior está mal informado. Que salgan los anarquistas a verificar si existen o no».

4. La «Conexión» Nazi

Otra parte importante de la base de sustentación del fascismo en Bolivia está constituida por una numéricamente pequeña fuerza social, a cuyo poder económico e ideología de extrema derecha se suma un curioso elemento unificador: su condición de alemanes. Se trata de un pequeño pero poderoso grupo de familias alemanas, la mayor parte de las cuales emigraron a Bolivia antes de la primera guerra mundial o en los primeros años de la posguerra. Prosperaron en el mundo del comercio y la industria y asimilaron la ideología nazi de su patria de origen como su principio de identidad y comportamiento en su patria de adopción.

La llamada «Colonia alemana» en Bolivia salió a la luz pública como estrechamente vinculada a la instauración del fascismo banzerista en 1971, cuando uno de sus más connotados miembros, el industrial azucarero Edwin Gasser reveló, en una entrevista con la televisión de la República Federal Alemana, que fue la «Colonia» quien financió el golpe de Bánzer (él mismo descendiente de alemanes) con dineros que sirvieron para sobornar a numerosos jefes militares.

Otro personaje de gran influencia durante el régimen de Bánzer fue Federico Nielsen Reyes, el traductor oficial al castellano del panfleto «Mein Kampf» de A. Hitler. En 1976 era el delegado en Bolivia del Comité Intergubernamental de Migraciones Europeas (CIME) y estuvo implicado en el fallido negociado de importar a Bolivia a colonos rhodesianos expulsados de África por su mentalidad racista. A principios de la década, su hijo Roberto apareció implicado en otro escándalo: hallándose en Frankfurt (RFA) disfrutando de su condición de Cónsul de Bolivia, no

tuvo reparos en vender su título de Cónsul a un zapatero local para comprarse un caballo de carreras con la pretensión de querer competir en los Juegos Olímpicos de 1972.

Las aficiones hípias de Roberto lo llevaron a trabar amistad con otro experto en caballos: el oscuro General Luis García Meza Tejada. Tras el sangriento golpe del 17 de julio de 1980, que llevó a García Meza al poder, Roberto Nielsen apareció como Jefe de Seguridad del dictador y ayudante administrativo del Palacio de Gobierno, encargado de cubrir todas las necesidades de la vida privada de García Meza, incluidos los servicios de provisión de prostitutas.

Fue, pues, natural que fuera Roberto Nielsen quien, junto con otros seis guardaespaldas, acompañara a la esposa del dictador, Olma Cabrera de García Meza, en un supuesto viaje a España. En realidad, el destino del viaje era Zurich (Suiza) y su objeto: depositar una enorme cantidad de dinero, que la revista semanal alemana «Der Spiegel», evalúa en nada menos que cuarenta millones de dólares, en un banco suizo.

En cuanto a Federico Nielsen, éste también es cómplice de los robos y manejos dolosos de dinero del dictador: tras la caída de éste, en agosto de 1981 fue el encargado de comprar, a nombre de García Meza, la suma de 50.000 dólares del Banco Central de Bolivia a menos de la mitad del precio oficial para los gastos del numeroso séquito que el ex dictador se llevó a su semiexilio en Taiwán.

Pero el más conocido de los alemanes colaboradores del fascismo en Bolivia es, sin duda, el criminal de guerra Klaus Barbie. Al igual que varios otros criminales de guerra que huyeron de Alemania al terminar la segunda guerra mundial, Barbie también buscó refugio en América del Sur y terminó instalándose en Bolivia. Aquí cambió su nombre por el de Klaus Altmann, para tratar de encubrir su pasado de asesino de miles de judíos y patriotas franceses durante el tiempo en que se desempeñó como jefe de la policía secreta del Estado alemán (Gestapo) en la ciudad francesa de Lyon. De ahí que sea conocido como «el carnicero de Lyon».

El nombre de Altmann está asociado a la represión política, al tráfico de armas, al reclutamiento de mercenarios para la formación de grupos paramilitares y al tráfico de cocaína. Durante el régimen barrientista se vinculó a los militares y fundó una empresa marítima en conexión con otras instaladas en Perú y dedicadas a la importación y exportación; de esta forma entró en las redes del tráfico internacional de armas.

Tras el golpe de 1971, Bánzer lo incorporó al aparato represivo del régimen, en tareas relacionadas con su propia seguridad personal y con la renovación de los métodos de represión en el Ministerio del Interior. Bánzer también le otorgó la ciudadanía boliviana y le dio un pasaporte diplomático, con el cual recorrió Europa negociando la importación de carros de combate y armas ligeras para el Ejército.

Aunque siempre cubrió sus actividades y se mantuvo en la sombra, la célebre «cazadora de nazis» alemana Beate Klarsfeld terminó descubriéndolo, posibilitando que el gobierno francés presentara al de Bolivia un pedido de extradición por «asesinato y complicidad en secuestros arbitrarios, seguidos de deportaciones de cientos de ciudadanos muertos como resultado de las torturas y actos de barbarie». La solicitud francesa fue negada por las autoridades judiciales bolivianas por presión de Bánzer.

Altmann se relacionó estrechamente con los responsables sucesivos del aparato represivo de los distintos regímenes; así, trabó amistad con el que fue ministro del Interior de Bánzer durante cuatro años, el General Juan Pereda Asbún (más tarde, autor de la defenestración de Bánzer y efímero dictador), y con el entonces jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército, Coronel Luis Arce Gómez (más tarde, autor del golpe de Estado de 1980 y ministro del Interior del régimen de García Meza). A través de ellos, Altmann se vinculó también al tráfico de la cocaína y al mundo de las mafias del narcotráfico.

El 31 de diciembre de 1980, el diario «El País» de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra publicaba en su edición-anuario una fotografía y una esquela mortuoria absolutamente insólita en Bolivia y profundamente reveladora del submundo donde se entrelazan las mafias del narcotráfico, los paramilitares y los nazis. La foto está tomada en la hacienda de José Gutiérrez en Santa Cruz.

En ella destaca, al centro, la figura de Hans J. Stellfeld, ex oficial del Ejército nazi e instructor de los grupos paramilitares. Stellfeld murió el 16 de diciembre de 1980, a la edad de 68 años, por sobredosis de cocaína, y fue enterrado con honores militares en el cementerio alemán de Santa Cruz ([U](#)). Según la nota necrológica, Stellfeld llegó a Bolivia dos años antes (o sea, en el segundo semestre de 1978, cuando Pereda era presidente de la República y Rico Toro su ministro del Interior, Justicia e Inmigración) con el objeto de realizar «estudios de la flora cruceña».

Sin embargo, la nota revela también que «últimamente tuvo una brillante actuación como consejero de los elementos nacionalistas», es decir, fascistas, que protagonizaron la reinstauración del fascismo en Bolivia. Por su parte, el Contralor General de la República, Adolfo Ustares Ferreira, que también figura en la fotografía y asistió al sepelio de Stellfeld junto con «numerosos amigos y miembros de la Colonia Alemana», pronunció un discurso, donde llama a Stellfeld «camarada», revela que todos eran integrantes de una «Legión», que pasaron juntos «largas noches y días de vigilia ante la acechanza roja», que fue la tenacidad de Stellfeld lo que hizo que «nos preparemos y actuemos» y que «fue el 17 de julio que culminó la camaradería».

Ustarez es un abogado relacionado con la mafia del narcotráfico, que integró las bandas armadas fascistas y, por ello, fue distinguido por García Meza con el cargo clave de Contralor General de la República, función administrativa encargada de la defensa de los intereses del Estado, que fue utilizada por el régimen para hacer «blanquear» o reciclar los fondos provenientes del narcotráfico y «cubrir» las operaciones ilícitas de los altos jefes militares. Tuvo que dejar el cargo en febrero de 1981, al mismo tiempo que los Coroneles Arce Gómez y Ariel Coca, por presiones del gobierno norteamericano.

En la histórica fotografía figura también Fernando Monroy, alias «Mosca Monroy», delincuente común con un grueso prontuario. A comienzos de la década de los 70 integraba los grupos de matones de la Falange Socialista Boliviana (FSB) que se dedicaban a «desestabilizar» los gobiernos reformistas de los generales Ovando y Torres. En 1979 fue detenido por haber asesinado a sangre fría a un joven universitario que participaba en una manifestación. En vísperas del golpe del 17 de julio de 1980 fue puesto en libertad por orden expresa del Coronel Arce Gómez para que integrara el grupo paramilitar que asaltó el local de la Central Obrera Boliviana (COB) y asesinó a los dirigentes políticos Marcelo Quiroga Santa Cruz y Carlos Flores Bedregal y al dirigente minero Gualberto Vega Yapura.

El «Mosca Monroy» formaba parte también -como no podía ser de otra manera- de las bandas armadas al servicio de la mafia del narcotráfico. El 18 de junio de 1982 apareció muerto en su casa, en el barrio residencial de Guapay, en la ciudad de Santa Cruz, donde residía desde dos años antes, con herida de bala. Los vecinos informaron que, por la tarde, habían escuchado varios disparos de armas de fuego, pero que no les dieron mayor importancia, porque en esa casa «se practicaba tiro al blanco». Aunque el gobierno del General Torrelio ha querido encubrir los pormenores de su muerte, lo más probable es que se trate de un típico «ajuste de cuentas» entre distintas bandas de narcotraficantes.

Finalmente, en la fotografía aparecen varios mercenarios extranjeros, entre ellos el francés Jacques Edouard Leclere (luchó contra la independencia de Argelia en las filas de la organización terrorista OAS, detenido en Bolivia en 1979 cuando intentaba sacar 7 kilos de cocaína y puesto en libertad con el fin de que ayudara al entrenamiento de los grupos paramilitares en Santa Cruz), el austríaco Wolfgang Walterkirche y los alemanes Joachim Fiebelkorn, Herbert «Ike» Kopplin y Manfred Kullman.

Todos ellos resultaron pertenecer a una siniestra logia secreta denominada «Los Novios de la Muerte», o «Frente Bolivia Joven», que salió a la luz pública con motivo de su desarticulación. Todo comenzó el 2 de mayo de 1981, cuando el aventurero falangista y viejo paramilitar Carlos Valverde Barbey se apoderó, al frente de un pequeño grupo de civiles armados, del pozo petrolífero «Tita» de propiedad de la norteamericana Occidental Co., para exigir la renuncia de García Meza. El operativo fracasó al intervenir las tropas de la VIII División del Ejército, al mando del Coronel «constitucionalista» Gary Prado Salmón (quien resultó gravemente herido en la columna vertebral), que por entonces se hallaban empeñadas en una intensa batida contra los narcotraficantes y los paramilitares en todo el Departamento de Santa Cruz.

Días después, un grupo de ocho personas atravesaba la frontera boliviana con el Brasil en precipitada huida desde la ciudad de Santa Cruz. Detenidos por la policía brasileña, fueron trasladados a la ciudad de Campo Grande (Mato Grosso, a 200 km de la frontera), donde les fueron decomisados 3 kilos de cocaína, uniformes militares, panfletaría nazi y armamento moderno. El grupo resultó ser parte de otro mayor, compuesto por 36 personas, comandado por el alemán Joachim Fiebelkorn.

El grupo comenzó a ser desarticulado en Santa Cruz, donde fueron apresados seis de sus integrantes. Entre los detenidos en Campo Grande figuran, además de tres bolivianos, dos argentinas y un peruano, el austríaco Walterkirche y el alemán Kullman. Los demás lograron escapar. El propio Fiebelkorn comandaba al grupo de los ocho, pero logró evitar ser detenido él también. Se hospedó durante algunos días en el hotel Beira-Río, de Campo Grande, y luego desapareció.

Entre los papeles incautados a los prófugos, la policía brasileña encontró una lista con 20 nombres, donde Fiebelkorn figura como «Primer Comandante del Grupo Especial de Comando». Como «Segundo Comandante» aparece Jaime Gutiérrez, un connotado narcotraficante que consiguió huir hasta el Paraguay. El «Tercer Comandante» resultó ser Omar Cassis, conocido miembro de la policía política de Bánzer y uno de los tres que dio su nombre para encubrir el asesinato del ex ministro del Interior de Bánzer, Coronel Andrés Selich Chop, por el nuevo ministro Alfredo Arce Carpio.

De las declaraciones de los detenidos en Campo Grande se supo también que el grupo tenía dos funciones: preparar paramilitares para acciones terroristas y suministrar protección a los narcotraficantes. El mismo Jefe de Estado Mayor de la VIII División, Coronel Edwin Peredo, confirmó que se trataba de «un grupo paramilitar de protección a los narcotraficantes y a los productores de cocaína». En la casa que ocupó Fiebelkorn en Santa Cruz se encontró ametralladoras ZK, lanzadoras de granadas, nitroglicerina, fósforo blanco y otras muchas armas modernas.

De toda esta documentación se sabe que Fiebelkorn es un neonazi fanático, que coleccionaba banderas nazis, uniformes militares de los SS, discursos y películas de Hitler, esvásticas y canciones; todos los días escuchaba cintas grabadas con los discursos de Hitler y buscaba imitarlo en las actitudes, las expresiones y hasta en la misma voz ([2](#)).

Fiebelkorn llegó a Bolivia en 1978 (como Stellfeld), en compañía de otro compatriota suyo, Hans-Jürgen Lewandowski, ex soldado de las SS hitlerianas, a quien asesinó en noviembre de 1980 en la ciudad de Santa Cruz. En el asesinato estuvo también implicado el mercenario francés Napoleon Forlangier, a quien Fiebelkorn conocía desde la época de las luchas por impedir la independencia de Argelia. El médico boliviano Alberto Chávez, otro integrante de «Los Novios de la Muerte», emitió el certificado de defunción de Lewandowski, según el cual éste habría muerto de «cirrosis hepática aguda».

Fue Klaus Altmann quien contrató a Fiebelkorn para el Servicio Especial de Seguridad (SES) -eufemismo que encubría la estructura de los paramilitares, más tarde cambiado en Dirección de Inteligencia de Estado (DIE)- y le entregó las credenciales correspondientes. Otros viejos y nuevos nazis contratados por Altmann como instructores para los paramilitares son: Franz Josef Hoefle, Manfred Konter, Castern Vollmer y Kai Gwinner.

A Kullman, cuando la policía brasileña lo detuvo en Campo Grande, le encontraron en su bolsillo una carta de «recomendación» que le había dado el entonces ministro del Interior de García Meza, General Ceiso Torrelio Villa (más tarde, sucesor del dictador). En cuanto a Kopplin, que logró evitar el ser detenido, su nombre salió en la prensa cuando, a mediados de junio de 1981, asesinó al argentino Alonso Estévez mientras éste, en estado de ebriedad, tenía una discusión con el administrador del club Playboy. Kopplin le disparó a quemarropa. Después, como descargo, reveló que era agente de la Comisión Nacional de Lucha Contra el Narcotráfico dirigida por los Coroneles Doria Medina, David Fernández y el Mayor Luis Cossío.

En efecto, entre los protectores de los nazis de viejo y nuevo cuño figuran muchos jefes militares, incluida la máxima cúpula. Así, días después de la detención del grupo de «Novios de la Muerte» que huían al Brasil, se supo que el Jefe de Estado Mayor del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia, General de División Edén Castillo Galarza (antiguo cómplice de la camarilla García Meza-Arce Gómez), había intercedido en favor de dos de los bolivianos detenidos (Tatiana Vaca Díez y Ramón Ortiz), argumentando que «gozan de la confianza de las Fuerzas Armadas». Por si fuera poco, la madre de Tatiana Vaca Díez también hizo publicar las recomendaciones que obtuvo en el Ministerio del Interior, la Guardia Nacional de Seguridad Pública y la Prefectura del Departamento de Santa Cruz. El «affaire» le costó el cargo al General Castillo.

Pero no sólo a él. Otro militar que tuvo que poner los pies en polvorosa por culpa de los «Novios» es el Capitán Rodolfo «Rudy» Landívar, a la sazón cónsul general de Bolivia en Campo Grande. Landívar es un antiguo integrante de los aparatos represivos del régimen de Bánzer, especializados en la represión a los campesinos (su cargo era el de «coordinador del Pacto militar-campesino»), además de connotado miembro de la red de narcotráfico desde su puesto en la Aduana de Santa Cruz. Su ubicación misma en Campo Grande es sospechosa: ¿qué hace ahí un Consulado de Bolivia, en una ciudad que no tiene comunicaciones con Bolivia? La razón del porqué el grupo de terroristas huía en dirección a Campo Grande parece evidente: su contacto allí era Landívar. La policía brasileña le acusó de «conocer todos los nombres de los jefes neonazis que operan en Bolivia». Antes de que fuera demasiado tarde, Landívar renunció de inmediato y se volvió a Bolivia.

Es verdad que no son sólo alemanes los mercenarios de ideología nazi que operan en Bolivia al servicio del régimen militar y de la mafia del narcotráfico. Según una nota secreta de los Servicios de Seguridad del Estado de Bélgica, cuatro mercenarios de origen flamenco forman parte también de las bandas paramilitares en Bolivia. Se trata del «Coronel» Jean Schramme, de Albert Van Ingelgom (de 66 años, que fue comandante de las SS alemanas destinado en el campo de concentración de Auschwitz), de Roger Van de Zande (también de 66 años, brazo derecho de Schramme) y del hijo de éste, de 30 años, que trabajaría en el SES (hoy DIE) en La Paz, donde le apodan «El Tigre» por su dominio de las técnicas de tortura.

La historia de Schramme (de 53 años) es muy elocuente. Hijo de un abogado de Brujas (Bélgica), ingresó en el Ejército como voluntario. A los 24 años se compró una plantación en el Congo Zaire. Cuando se produjo la guerra de la ex colonia belga, hoy secesión de la provincia de Katanga (provocada por los colonialistas belgas reacios a la independencia de la colonia en 1960), Schramme se convirtió en el hombre de confianza del cabecilla de la secesión, Moise Tschombé, cuyas fuerzas policiales dirigió. Tras el fracaso de la aventura se refugió en Angola y en 1964, cuando Tschombé ya fue primer ministro, regresó a Leopoldville. Bajo la dirección del General Mobutu, entonces brazo derecho de Tschombé, reprimió a los seguidores de Lumumba, el padre de la independencia. Cuando Mobutu se apoderó del gobierno mediante un golpe de Estado, Schramme fue promovido a Mayor y Comandante Militar de la región de Maniema. En 1967, a raíz de una aventura golpista protagonizada junto con el mercenario francés Bob Denard, Schramme es expulsado del Zaire.

De vuelta en Brujas, el 26 de junio de 1968, es detenido acusado del asesinato de un belga cometido en mayo de 1967 en el Zaire. Dos meses después logra su libertad en condiciones oscuras, obtiene un pasaporte y, en 1969, huye a España. En 1970 se instala en Portugal, pero a la caída del fascismo en 1974 vuelve a huir, esta vez al Brasil. De aquí es expulsado en 1976, por lo que debe trasladarse al Paraguay, de donde, en 1978, se interna a Bolivia. ¿Sería también Altmann el que lo reclutó?

En agosto de 1981 dos periodistas norteamericanos intentaron conversar con Altmann sobre éste y otros temas en su casa de Cochabamba. Pero el nazi recurrió a sus influencias y los hizo detener por la policía. Por razones de seguridad, Altmann suele cambiar su lugar de residencia entre Cochabamba, su departamento en La Paz (calle 20 de octubre, Edificio Jazmín) y su hacienda de Santa Cruz. Pero ya no se oculta. Con frecuencia se le puede ver entrando o saliendo del Ministerio del Interior. Una vez reveló a la revista de gran tiraje alemana-occidental «Stern»:

«Siempre que necesitan ayuda, me llaman. Tengo una reputación muy buena.»

El 22 de julio de 1982, Altmann demostraba que, tras el último golpe militar, nada había cambiado en Bolivia. Días antes, el General Celso Torrelio había sido destituido por la «mafia de los coroneles» garcíamezistas tras haber cedido a la presión popular decretando una amnistía general y convocando a elecciones generales. Después de un largo forcejeo interno, los coroneles acabaron imponiendo a uno de ellos, Guido Vildoso, en la Presidencia de la República. Al día siguiente, Altmann hacía una aparatosa aparición en el Palacio de Gobierno para visitar a su amigo Vildoso. (3)

1. Según pudo averiguar el enviado especial del diario brasileño «O Globo» en Santa Cruz de la Sierra, José Eustaquio de Freitas, «Stellfeld fue asesinado por otros dos alemanes, miembros del "Frente Bolivia Joven" Franz Josef Hoefle, de 39 años, y Manfred Konter, quienes le robaron dinero y regresaron a Paraguay» («O Globo», 7 de junio de 1981).
2. El 11 de septiembre de 1982, el juez italiano Aldo Gentile emitió una orden de detención contra Joachim Fiebelkorn y otros cuatro neonazis terroristas, integrantes todos ellos de la llamada «Internacional negra», como presuntos autores del asesinato de 85 personas en la estación de trenes de la ciudad italiana de Bolonia, el 2 de agosto de 1980, mediante la explosión de una bomba
3. El nuevo embajador de la República Federal de Alemania en Bolivia, Helmut Hoff, al presentar sus credenciales, el 3 de septiembre de 1982, renovó el pedido de extradición de Barbie, presentado por su gobierno en el mes de mayo del mismo año. El pedido alemán se basa en el hecho de que Barbi sigue siendo ciudadano alemán, pues la ciudadanía boliviana la obtuvo en 1957 bajo la falsa identidad de Klaus Altmann. Esta sirvió para que las autoridades judiciales bolivianas rechazaran dos veces, en 1974 y en 1979, el pedido de extradición presentado por Francia

POST SCRIPTUM

Cuando este libro, se hallaba ya en la imprenta, revelaciones de primera mano sobre la utilización de mercenarios extranjeros por parte del poder militar en Bolivia fueron hechas públicas en la revista italiana «Panorama» (números del 20 y del 27 de septiembre de 1982). Aunque, en el fondo, no añaden nada que sea sustancialmente nuevo a lo ya expuesto en diferentes capítulos de este libro, sí lo enriquecen, aportando numerosos detalles que permiten verificar, precisar, corregir, completar y profundizar la información disponible hasta entonces.

Se trata de dos sensacionales testimonios que, dadas las pruebas con que son presentados, ofrecen un gran margen de credibilidad. Por eso, y a título de ilustración, se reproducen a continuación amplios extractos de los mismos.

En el primer caso, un agente secreto francés de origen italiano, Elio Ciolini, aparece revelando ante las autoridades judiciales italianas los nombres de los autores del atentado terrorista cometido el 2 de agosto de 1980 en la ciudad italiana de Bolonia. En virtud de estas revelaciones fueron inculcados del asesinato de 85 personas, mediante la colocación de una bomba en la estación de ferrocarriles de Bolonia, los neofascistas italianos Stefano Delle Chiaie, Maurizio Giorgi y Pierluigi Pagliai, el neonazi alemán Joachim Fiebelkorn y el mercenario francés Oliver Danet. Según Ciolini, el comando terrorista estaba encabezado por Delle Chiaie y obedecía las órdenes de Licio Gelli, el «padrino» de una tenebrosa logia masónica denominada «Propaganda 2».

En sus extensas declaraciones, Ciolini asegura haber visto a los cuatro primeros en Bolivia. De Delle Chiaie dice que se encontraba en La Paz por lo menos desde abril de 1980, que estaba contratado por el Ministerio de Defensa pero asignado al Ministerio del Interior, que se hacía llamar Vincenzo o Alfredo Modugno y tenía un pasaporte boliviano con el nombre de Ramiro Fernández Valverde, que era muy amigo del coronel Luis Arce Gómez y que tenía a varios terroristas italianos, alemanes y franceses a sus órdenes. La revista «Panorama» recuerda a sus lectores que Delle Chiaie es un peligroso terrorista, responsable de innumerables crímenes políticos en Italia desde 1969, prófugo de la justicia italiana, fundador de la neofascista «Avanguardia Nazionale» y principal animador de la llamada «Internacional negra».

Según un informe de la CIA norteamericana, citado por Ciolini, Delle Chiaie se asoció con los argentinos Mario Mingolla (otro terrorista al servicio del Ministerio del Interior boliviano, que también se hacía llamar Pablo Hervas Chiriboga o Christian) y Jorge Lynch para editar una revista neofascista internacional con el nombre de «Confidential». La dirección de la revista estaba en Buenos Aires, a cargo de Sandro Saccucci y Maurizio Giorgi. Este último colaboraba, además, con la policía política del régimen de Pinochet y, según Ciolini, está implicado en el asesinato, en Buenos Aires, del general chileno opositor Carlos Prats. En cuanto a Pierluigi Pagliai (otro de los acusados de la matanza de Bolonia), Ciolini se remite también al informe de la CIA ya mencionado, que confirma que Pagliai se hacía llamar Mario Bonomi, que trabajaba para el Servicio de Seguridad boliviano y que «es un notorio torturador».

Tras referirse al alemán Joachim Fiebelkorn (de quien dice que era hombre de Delle Chiaie, que trabajaba como instructor militar en Santa Cruz por cuenta del Ministerio del Interior y que al mismo tiempo organizaba el servicio de guardia de Roberto Suárez Gómez, el «padrino» de la mafia del tráfico de cocaína en Bolivia), Ciolini termina confesando que él mismo estuvo al servicio de Delle Chiaie en Bolivia desde fines de 1980 hasta abril de 1981, con credenciales de inspector de la Dirección de Recaudaciones del Ministerio del Interior para Santa Cruz y con sueldo del «séptimo Departamento del Cuartel General de las Fuerzas Armadas bolivianas, entonces a cargo del coronel Zurita».

El segundo de los testimonios publicados por «Panorama» tiene otro carácter. Es una verdadera historia de los mercenarios neonazis en Bolivia, contada por uno de ellos y centrada en la figura de Joachim Fiebelkorn. Su interés es evidente. He aquí su transcripción literal:

«Todo comenzó hacia mediados de 1978. Habíamos sido reclutados en Alemania. Todos éramos 'negros'. Nos habíamos conocido en los mismos night clubs y en las mismas cervecerías. El jefe era él, Joachim Fiebelkorn. Tenía un saco de dinero. Lo había ganado en Frankfurt explotando a cuatro prostitutas. La policía le estaba pisando los talones. Había tenido que empacar sus cosas y huir a Sudamérica. De la generación de la posguerra, Joachim era un fanático. Desertor del Ejército Federal Alemán, había terminado en la Legión Extranjera Española. Coleccionaba uniformes, banderas, distintivos y armas del Ejército nazi y, sobre todo, de las SS. Tenía un uniforme negro. Se lo ponía en las veladas de gala de los oficiales bolivianos. Antes de llegar a Santa Cruz, la segunda ciudad de Bolivia y centro de oscuros negocios y oscuros personajes, Fiebelkorn había estado en Paraguay.

En Asunción, los nazis son bienvenidos. Sobre el Paraná, en los confines con Brasil, vive el doctor Mengele. Cuida a los niños y los indígenas lo aprecian tanto que lo protegen de los servicios secretos israelíes. Entre los alemanes de Asunción, todos más o menos nostálgicos de Hitler, Joachim se ganó buena fama. Se alojaba en el Hotel Guaraní. Frecuentaba los burdeles de lujo, como el Dardo Rojo, Casa Mami, el Imperial, el 741. Llegaba de noche, a caballo, con una pistola al cinto. Una tarde, en el Dardo Rojo, delante de una bella prostituta, propuso a Adolf Meinike, un ex SS de 63 años, jugar a la ruleta rusa. El viejo sacó su P38. Joachim tuvo suerte. Pero Meinike se mató. La policía de Stroessner, el dictador de Asunción, lo apresó. Durante algunos días lo torturaron, después lo soltaron en la frontera con Argentina.

Fiebelkorn llegó a Santa Cruz y allá, poco a poco, formó el grupo de los mercenarios alemanes. Helos aquí uno por uno. Estaba yo, ex boxeador de peso mediano. Estaba 'Ike', es decir Herbert Kopplin, de 52 años, berlinés, ex SS en la División Acorazada del general Steiner. Hasta 1952 había estado prisionero en Rusia: sabía desmontar y volver a montar todo tipo de armas. El más simpático era Hans Juergen, ex electricista de ferrocarriles, un alcohólico que murió después por beber demasiado. El más hábil conductor era Manfred Kuhlmann, un alemán de Rhodesia, un enano mordaz, siempre dispuesto a pelear con Kay, el alemán-chileno huido desde los tiempos de Salvador Allende. Rudi, un austriaco siempre sin dinero. Y Jean, el francés. Su verdadero nombre era Napoleón Leclerc. En Argelia, con la Legión, había torturado a mucha gente. Andaba siempre con uniforme militar y con granadas de mano en la cintura. No pagaba las cuentas en los negocios y veía comunistas por todas partes.

El amigo íntimo de Joachim era, sin embargo, Hans Stellfeld, de 65 años, ex Gestapo, huido a Sudamérica al fin de la guerra. Instructor militar, ceramista, comerciante de animales exóticos, contrabandista de drogas, guardaespaldas, importador de armas de los Estados Unidos, Stellfeld se suicidó hace pocos meses.

Nuestro grupo de nueve personas estaba en contacto directo con la central nazi de La Paz, dirigida por Klaus Altmann, ex capitán de las SS, gran traficante de armas y consejero del gobierno. En la segunda mitad del 78, nuestro cometido era uno solo: organizarnos para demostrar nuestra capacidad.

En Santa Cruz, nosotros éramos los que más sabíamos de armas. Los policías manejaban la pistola con poca destreza. Los soldados sólo sabían pelar papas y masticar hojas de coca. Cuando algún fusil-ametralladora se trababa, los servicios secretos, el ejército o la policía nos lo traía para repararlo. Trabajábamos para todos, también para Lidia Gueiler, la presidenta de izquierda. De día arreglábamos las ametralladoras y de noche nos divertíamos como locos. Nuestro punto de encuentro era nuestro restaurante, el Bavaria.

Para los altos oficiales y los grandes traficantes de droga, el servicio era gratis, mujeres incluidas. Los coroneles bolivianos se excitaban al oír cantar el himno de las SS. Para impresionarlos, Fiebelkorn se ponía su uniforme negro. Allí, en el Bavaria, se preparó el golpe del general García Meza. La gente nos tenía miedo. Por todas partes en Bolivia se decía que 'los alemanes' de Santa Cruz tenían un 'águila que saca los ojos a los enemigos'.

Nuestro gran protector era el general Hugo Echeverría, comandante del Segundo Cuerpo de Ejército con asiento en Santa Cruz. Ibamos a Estados Unidos a conseguirle armas ligeras muy sofisticadas y él nos garantizaba amistades y misiones importantes. Echeverría era el hombre de la mafia de la droga. Le pagaba Roberto Suárez, uno de los cinco reyes de la cocaína.

A Suárez le debemos nuestra fortuna de entonces. 'Don Roberto', así lo llamábamos los peones, tenía necesidad de hombres fuertes, de confianza, honestos. En Bolivia, en el comercio de la droga, cada uno engaña al otro. Suárez no quería perdersenos. Puso a nuestra disposición una lujosa mansión en la calle Paraguá (teléfono 32 543). Era 'el cuartel Fiebelkorn'.

Viajábamos en Toyota Landcruiser de vidrios oscuros. Eramos los supervisores del tráfico de la coca. En Bolivia, las plantaciones de coca son legales. Se encuentran por todas partes en el territorio de Cochabamba. Cada boliviano tiene derecho a una ración mensual de hoja para hacer el té o para masticar. Pero al menos dos tercios de esta producción legal es transformada en 'pasta negra', el semiproducto del cual los refinadores extraen los cristales de cocaína. Un kilogramo de 'pasta' cuesta en el mercado 8.000 dólares. Mil gramos de 'nieve' cuestan 52.000 dólares. Es un negocio enorme que enriquece a los militares en el poder.

Roberto Suárez producía él mismo la hoja, pero también hacía acopio de la producida por los pequeños cultivadores. Su central estaba frente al cine Florida, en Santa Cruz. Apenas la 'mamá negra', su encargada, juntaba 200 kilos de 'pasta', nosotros los llevábamos al aeropuerto. Suárez tenía 28 pequeños aviones con un águila negra sobre el fuselaje. Dos de nosotros acompañaban al piloto: se aterrizaba en el territorio boscoso del Beni, cerca de la frontera brasileña, y se esperaba a los intermediarios colombianos.

Los 'capos' de la mafia boliviana se habían comprado amplios territorios en el Beni para ocultar sus negocios. Había una pequeña pista en medio de los árboles donde aterrizaban los aviones. Antes de nuestra intervención, sucedía con

mucha frecuencia que los colombianos pagaran con paquetes ya preparados conteniendo pocos dólares y mucho papel y escaparan lo más pronto posible mientras disparaban ráfagas de ametralladora. Pero Fiebelkorn hizo instalar dos puestos de bazooka en torno a la pista. Desde aquel día, los colombianos empezaron a pagar regularmente. Tenían miedo y rabia de nosotros, los alemanes.

Era lindo hacer el viaje de regreso a Santa Cruz con el avión cargado de 'verdes'. Una vez tuve en mis manos cuatro millones de dólares, Suárez no nos hacía faltar nada y nos pagaba cinco mil dólares al mes, una gran suma para Bolivia. No sabíamos dónde gastarlos, porque en el Bavaria todo era gratis para nosotros. Había cinco chicas alemanas, más Gerlinde, la preferida de Joachim. Con las hermanas Marianna y Mara, dos ex cabaretistas del Treff, en el Taunus Feldberg de Frankfurt, Gerlinde había protagonizado breves films pornográficos. Los proyectábamos para los coroneles bolivianos y ellos perdían la cabeza.

Un día vino a visitarnos Klaus Altmann, entonces consejero de Seguridad del Ministerio del Interior boliviano. Nos dijo: "Llegó el momento. Es necesario hacer saltar este gobierno antes que Bolivia se transforme en una gran Cuba. Con los otros camaradas extranjeros (incluidos Delle Chiaie y Pierluigi Pagliai, NDR) estamos montando un servicio de seguridad. Uds. deben colaborar, pero naturalmente deben ser probados".

Comenzamos a seguir las manifestaciones sindicales, a fichar opositores, a amenazar y castigar a los subversivos. Trabajamos bien. Teníamos hasta una prisión privada para las torturas, las que, sin embargo, dejábamos a los bolivianos. Nuestro consejero político era el abogado Adolfo Ustáñez, uno de los más famosos de Bolivia, administrador del patrimonio (que incluía el tráfico de drogas) del ex presidente Banzer. "Debemos matar a todos los comunistas" decía Ustáñez. Y nuestro comandante le respondía: "Cuenten con nosotros. Estamos dispuestos a todo."

Desde aquel momento, nuestras relaciones con Roberto Suárez comenzaron a distanciarse. Estábamos al servicio de los golpistas. Retomamos el entrenamiento militar.

Nuestro cometido, fijado por los conspiradores, era la conquista del centro de Santa Cruz. Con un carro de asalto debíamos haber ido a tomar los reductos de los revoltosos. El día del golpe, no obstante, no fue muy trabajoso. Los militares habían pensado hacer una carnicería. Nosotros fuimos destinados a acciones importantes, pero no muy sangrientas y sin tener que usar el carro de asalto. El abogado Ustáñez nos felicitó y nosotros festejamos su nombramiento como Contralor General de la República.

El régimen de García Meza nos puso en bandeja de plata. Trasladamos nuestro cuartel general a un edificio cercano al aeropuerto, rodeado sólo de árboles y un muro de cemento de dos metros de alto. Sobre la terraza, instalamos dos ametralladoras. Los generales en el gobierno habían decidido tomar en sus manos el tráfico de la droga, pasando por encima de comerciantes e intermediarios. El asunto era gordo, dos mil millones de dólares, que hasta ese momento había estado controlado por cinco 'capos', Suárez incluido. García Meza y el coronel Arce Gómez no querían sólo el porcentaje sobre los ingresos de los traficantes. Querían todo el pastel.

A fines de 1980, Klaus Altmann nos llamó desde La Paz. Dijo: "El ministro del Interior, Arce Gómez, quiere verlos. La misión es importante". Fueron tres: Fiebelkorn, el chófer Kuhlmann y Kopplin. Arce Gómez los recibió en una especie de edificio prisión, junto a la Embajada de la República Federal Alemana, en La Paz. Dio a Fiebelkorn una lista de 140 nombres de traficantes de coca de Santa Cruz. Ninguno de los grandes 'capos' estaba incluido. El gobierno quería comenzar haciendo tabla rasa de los pequeños y medianos comerciantes de 'pasta', para después concentrarse sobre los grandes. Justo en aquellos días, García Meza, para satisfacer a los norteamericanos, contrarios al golpe y convencidos que el contrabando de droga en Bolivia estaba secretamente protegido por las autoridades, había ordenado un ridículo operativo anticoca. "Debemos usar mano dura" nos dijo Fiebelkorn, "es una misión moral".

El presidente García Meza, para lanzar mejor la campaña, nos recibió en el Palacio Quemado. Nos explicó: 'Debemos operar de modo convincente'. Toda la cocaína, según el presidente, debía ser entregada a la autoridad. Todo el resto del material secuestrado debía ser para nosotros "botín de guerra".

En Santa Cruz hicimos una gran fiesta. Fiebelkorn estaba espléndido en su uniforme de SS. Las señoras del Frente de Mujeres y Madres Nacionalistas nos ofrecieron flores perfumadas. La fiesta terminó con el grito de 'Heil Hitler'.

El mayor René Linda y otros 16 soldados bolivianos trabajaban a nuestras órdenes. Teníamos credenciales especiales entregadas por el Ministerio del Interior. Eramos el Grupo Comando Especial 'Novios de la Muerte' (como canta el himno de los legionarios españoles). En los primeros meses de 1981, requisamos toda Santa Cruz. Eramos dueños de la ciudad. Irrupciones. Arrestos. Habíamos secuestrado más de veinte coches de lujo e incautado 300.000 dólares. Qué comilona. Lástima que haya durado tan poco.

Como se sabe, la presidencia de García Meza fue breve. Caído él, también Arce Gómez, el ministro del Interior, fue obligado a dimitir. El buen general Echeverría ya no era más el comandante de la plaza de Santa Cruz. El nuevo coronel no nos veía con buen ojo. Día tras día nos quitaban mansiones y poder. Al fin, nos amenazaron con arrestarnos.

El aire olía mal. Decidimos cortar la cuerda. Fiebelkorn salió primero, con sus dos amiguitas, Mara y Marianna. Escapó al Brasil y desde entonces no le vi más. Después desapareció 'Woelfi', otro de los nuestros, y el rhodesiano Kuhlmann (fueron capturados en Brasil por la policía con dos kilos de cocaína encima). Ike y Carsten, convencidos de poder sobrevivir en Bolivia, fueron arrestados. Kay, Gwinner y Napoleon Leclerc consiguieron escabullirse a otra zona y ahora están en La Paz. Kugel y Juergen, como se sabe, murieron. El 13 de agosto, en Wiesbaden, un periodista amigo mío pidió noticias de Fiebelkorn al inspector Terstiege del Bundeskriminalamt (policía judicial) de Wiesbaden.

Este consultó en la computadora, pero no había rastros del comandante. El hijo de puta aún no figuraba en los archivos de la justicia alemana.»

Según informa la revista «Panorama», al enterarse de que Elio Ciolini había confesado a la justicia italiana lo que sabía sobre la matanza de Bolonia, Fiebelkorn se presentó a la policía alemana, estuvo encarcelado un tiempo y, finalmente, fue absuelto por los jueces de su país... ¡por falta de pruebas!

EL ROL DE LOS ESTADOS UNIDOS

1. Víctima y Culpable

Bolivia es acusada insistentemente por los Estados Unidos de ser el principal proveedor de la pasta básica, que después, a través de la conexión colombiana, entra en ese país ya en forma de cocaína. Las presiones, tanto económicas como políticas, se hacen cada vez más insistentes y radicales. Se quiere, ante todo, que Bolivia reduzca sensiblemente su producción de hoja de coca. Pero la solución no es tan sencilla ni tan justa como a algunos políticos y a algunos altos funcionarios de DEA les parece. En el fondo no es más que el reconocimiento de la incapacidad en el propio Estados Unidos para controlar a los poderosos grupos de la mafia organizada.

Un periodista, refiriéndose al tráfico y al abuso que actualmente se hace de la cocaína dice: «Este es un problema netamente norteamericano, por cuanto las mafias principales son manejadas por norteamericanos, los grandes especuladores son norteamericanos; los laboratorios son inventados, manejados y reparados por norteamericanos; los consumidores son norteamericanos... » Lo cierto es que todo gira alrededor del crecimiento geométrico, tanto del consumo como de los precios, que la cocaína ha tenido en ese país. Las diferencias exorbitantes que existen entre el precio de la hoja de coca en Bolivia y el de la cocaína en los Estados Unidos hacen que el tráfico, la corrupción y la violencia adquieran proporciones espantosas. Un número, cada vez mayor, de norteamericanos manifiestan como causa primaria del consumo de drogas el «stress» o sobrecarga emocional psíquico-patológica producto de las tensiones que crea la sociedad de consumo. Es un problema no inducido desde afuera, sino subproducto de las sociedades superdesarrolladas. Es bien sabido, por otro lado, cuánto se propagó el uso de la droga (y muy especialmente la cocaína) entre los soldados norteamericanos que participaron en la guerra de Vietnam. La corrupción y la organización de las mafias narcotraficantes en Bolivia no son más que una mala copia de las que existen en los Estados Unidos.

Sería imposible el internar al mercado norteamericano cantidades tan grandes de drogas sin la colaboración directa y total de las mafias norteamericanas y sin la complicidad de los agentes encargados de la represión del tráfico de las drogas.

En la ardua discusión que se ha entablado entre Estados Unidos y algunos países latinoamericanos, Washington no quiere reconocer responsabilidad ninguna de este aspecto. Ellos creen que países como Perú, o Colombia o Bolivia están envenenando su sociedad.

El conocido periodista Jack Anderson publicó, hace unos meses, informaciones según las cuales existía en el propio Congreso de los Estados Unidos tráfico y uso de drogas. En las investigaciones que hizo la FBI en torno a este asunto pudo comprobar que estaban implicados seis miembros de la Cámara de Representantes, un senador y dos ex diputados.

En Los Angeles y en otras ciudades de los Estados Unidos se venden libremente equipos denominados «keep cocaine», que sirven para medir el grado de pureza de la droga.

Algunas ciudades de los Estados Unidos y muy especialmente Miami viven dentro de un clima de violencia desatado entre las distintas mafias.

El vicepresidente de los Estados Unidos, George Bush, que preside la Comisión Especial creada por el gobierno de Reagan para combatir el crimen, ha señalado que el Sur de Florida se ha convertido en el lugar donde más ha aumentado la delincuencia. Para tratar de atajar esta marea de delitos el año 1981 se decidió aumentar el número de efectivos policiales. Se enviaron a la región 130 nuevos agentes de aduana, 43 nuevos agentes del FBI y 20 expertos del Departamento del Tesoro. También se han enviado a esta zona los supermodernos aviones AWACS.

El vicepresidente Bush decía: «Quiero destacar este punto lo más que pueda: Nuestras investigaciones van a ser tan intensas con los banqueros y con los comerciantes que logran ganancias con la delincuencia, como lo hacemos con los asesinos y otros delincuentes.» («USICA» número 59, 17-11-82).

El porcentaje de homicidios en el Distrito de Dale (incluida la ciudad de Miami) fue un 61 % más elevado el año 1980 que lo que había sido el año 1979.

Según el Procurador General del Estado de Florida, Jim Smith, el tráfico de drogas es el comercio minorista más grande de este Estado. El tráfico de drogas en los Estados Unidos, qué según DEA sobrepasa en su valor de reventa

los 50.000 millones de dólares (entre cocaína y marihuana) va acompañado de violencia y corrupción. Esta afecta aun a los propios organismos de Seguridad. Actualmente 20 policías y funcionarios públicos de Cayo Hueso están siendo interrogados por implicaciones en el tráfico de drogas. El Comandante de Marina, con base en Marathon, ha sido acusado de aceptar 50.000 dólares por dejar pasar un cargamento. En el distrito de Dade, 15 policías y detectives han sido suspendidos o cambiados de puesto por aceptar favores -incluso cocaína- de los traficantes de drogas.

El jefe regional de DEA dice: «La corrupción es uno de los mayores problemas con que nos enfrentamos.» Y esa corrupción no se limita a los empleados públicos. Los representantes de DEA dicen estar enterados de que algunos Bancos de Miami han recibido gratificaciones de hasta 500.000 dólares por remesa, para después transferirlas, falsificando los depósitos, hasta Bancos del exterior. En 1980 los agentes de DEA siguieron la pista de 2.000 millones de dólares que eran producto de la venta de cocaína y marihuana, destinados a los Bancos de Miami hasta llegar a cuentas de Bancos extranjeros. Se comprobó que 31 de los 250 Bancos de Miami daban servicio a 1.300 cuentas sospechosas, muchas de ellas abiertas bajo nombres falsos. Cinco Bancos eran propiedad de los narcotraficantes. Sin embargo, muchas de las inversiones que se hacen en Miami se deben al narcotráfico. En el primer semestre de 1980 los narcotraficantes habían invertido 192 millones de dólares en el Sur de Florida.

De todas las drogas que ingresan a Estados Unidos, la cocaína es, con mucho, la que deja mayores ganancias. Algunos investigadores calculan que son más de 20 millones de norteamericanos los que consumen cocaína con regularidad. Según las encuestas realizadas por el Instituto Nacional para el Estudio de Abusos de las Drogas, cerca del 28% de los adultos jóvenes (de 18 a 25 años) informaron que habían usado cocaína. Esta encuesta fue realizada en 1979. En cambio, la misma encuesta realizada dos años antes, en 1977, dio sólo un 19% de adultos jóvenes que habían usado la cocaína.

El consumo de la cocaína en los Estados Unidos crece en forma incontrolada. Algunos hablan de un crecimiento en proporciones de un 20% anual. La cocaína, hasta hace poco tiempo droga de las clases adineradas y símbolo de prestigio social, actualmente se ha extendido a todas las clases sociales, sobre todo entre estudiantes y profesionales jóvenes. Pero el crimen crece también en proporciones aún mayores. En el año 1980 se cometieron en el Distrito de Dale 135 asesinatos relacionados con la droga y la mayoría de ellos tenían relación con el tráfico de la cocaína que es la que mueve intereses más altos. («Selecciones Reader's Digest». «Miami: Drogas y Crimen». Mayo, 1980.)

El tráfico de droga en los Estados Unidos ha alcanzado proporciones enormes: Los embargos de cocaína en el sudeste de Norteamérica durante el año 1978 duplicaron el total de los de 1977. En la zona de Miami, sólo las cifras del tráfico de marihuana y cocaína en 1978 alcanzaron la cifra de 7.000 millones de dólares, cantidad muy superior a la derivada del turismo, con lo que el tráfico de drogas se convierte en la principal industria de la ciudad. Con 260 pistas de aterrizaje y más de 1.500 kilómetros de costa, Florida ha sido siempre uno de los lugares favoritos de los contrabandistas y de los narcotraficantes. Por el sur de este Estado entra del 60 al 80% de todo el tráfico de cocaína y marihuana a los Estados Unidos. Los sitios de aterrizaje son, por lo general, aislados trechos de playa o caminos desiertos. Los contrabandistas conocen a menudo las frecuencias de radio que usan la DEA y la Aduana y así logran eludir a las fuerzas empleadas contra ellos.

Según ciertos cálculos del gobierno, 160 barcos costeros van y vienen desde Colombia tocando puntos secretos de reunión en aguas internacionales cerca de Florida, justo donde terminan las aguas jurisdiccionales de los Estados Unidos. Allí estos barcos trasladan sus cargamentos a embarcaciones pequeñas y de alta velocidad que transportan la droga hasta la costa.

Si los riesgos de los narcotraficantes son pequeños, también lo son las penas que les imponen. En el sur de Florida, las condenas aplicadas en casos graves de narcotráfico son un 20% menores que el promedio nacional. Muchos contrabandistas extranjeros obtienen la libertad bajo fianza y logran escapar. Tal sucedió con Alfredo Gutiérrez, a pesar de que su fianza era de un millón de dólares.

Miles de millones de dólares en utilidades obtenidas por narcotráfico se transfieren de cuentas de Miami a Bancos de las Bahamas, de Panamá o de Suiza. Gran parte, sin embargo, se invierte en Estados Unidos. Un importante narcotraficante descubierto por DEA tenía en propiedad 30 negocios en Miami.

La corrupción ha infectado a un amplio sector de la población de Miami. Los dueños de las mansiones de la costa alquilan sus muelles a los narcotraficantes por sumas de hasta 100.000 dólares por cargamento. Algunos directivos de los Bancos aceptan sobornos del 2 % en grandes depósitos en efectivo, a cambio de falsificar informes de transferencias económicas internacionales.

La DEA tiene un archivo con informes de 300 pilotos, sólo del sur de Florida, que han hecho viajes a la Guajira. Con ganancias de hasta 40.000 dólares por viaje, los pilotos están dispuestos a correr tremendos riesgos. Con frecuencia cargan hasta tal grado los aviones que les es difícil despegar. Esto explica la elevada cantidad de accidentes. («Selecciones del Reader's Digest»: «Narcotráfico en América: Itinerario siniestro», V-79.) Los norteamericanos consumen entre doce y veinte toneladas de cocaína por semana. Ha llegado a tener tanta aceptación la cocaína en ese país que un psiquiatra de la Casa Blanca admitió que recetaba cocaína a los más cercanos colaboradores del Presidente de los Estados Unidos para que aliviaran su tensión en las horas de crisis.

En el Estado de Massachusetts existe ya un precedente judicial que impide a los policías detener a nadie por posesión de cocaína.

Los norteamericanos han inventado su propio estilo para consumir la cocaína. Si en otros países se empleaba simplemente el hueco de la mano para su inhalación, en Estados Unidos se inventó el cristal oscuro y el sorbete nasal,

aparte de los más sofisticados instrumentos para colocar la cantidad deseada en el centro mismo de la pituitaria. Todo ello se puede encontrar muy fácilmente, ya que se hace propaganda abierta en las revistas y en los periódicos. Así, por ejemplo, en la «Alpine Creations» de Miami se ofrece por ocho dólares la «flauta mágica» que controla la cantidad inhalada e impide la exageración y el desperdicio. Ha proliferado en todo Estados Unidos la venta de balanzas de precisión, lupas para examinar el brillo de los «cristales», coladores microscópicos, e instrumental muy delicado para analizar la pureza de la cocaína antes de comprarla. El más popular de estos instrumentos es la «Hot Box», del que una empresa en la ciudad de Santa Bárbara ha vendido medio millón al precio de 179 dólares. Su funcionamiento es sencillísimo: el clorhidrato de cocaína se sublima a relativamente baja temperatura, por ejemplo en las zonas más calientes del cuerpo humano. La «Hot Box» consiste en un termostato y una pequeña placa donde se coloca la cocaína. Si desaparece entre 38 y 39 grados centígrados, la cocaína es pura. Si queda intacta, es una falsificación.

La revista «Life» catalogó como uno de los objetos característicos de la última década en Estados Unidos el «Cocaine kit», un estuche con espejo, navajita para «peinar» la cocaína, inhalador y cristal para extenderla en montoncitos muy precisos. Se lo puede adquirir aun por correo postal.

La civilización del ocio y de la angustia lleva, en los países superdesarrollados, a muchas personas hacia las ilusorias soluciones que ofrece la cocaína.

2. ¿Quien Corrompe a Quien?

En el mes de marzo de 1982 el embajador norteamericano en Bolivia, Edwin Corr (un hombre profesionalmente vinculado a la DEA) viajó hasta la zona del Chapare (Departamento de Cochabamba), donde existe una alta producción de hoja de coca.

Los campesinos de la región se acercaron a dialogar con el embajador para exponerle sus puntos de vista. La charla fue cordial, pero los criterios permanecieron irreconciliables. En los hechos la posición del embajador Corr expresaba los intereses de la nación más poderosa del mundo y con el consumo más elevado de cocaína, en cambio, los campesinos eran la expresión de su propia pobreza y de la dependencia de su país. Los campesinos insistían en la necesidad del desarrollo agroindustrial de la zona, así como en la creación de nuevas fuentes de trabajo para que ellos fueran disminuyendo paulatinamente la producción de la coca. Pero el embajador no estaba dispuesto a soltar prenda. Cuando insistían, por ejemplo, en la urgente necesidad de que fuera electrificada la región, el embajador, encerrado en sus propias ideas, contestaba: «La electricidad servirá para que los narcotraficantes trabajen también de noche...»

El gobierno de los Estados Unidos insiste en que el medio más efectivo, más barato y más lógico para acabar internacionalmente con el narcotráfico es el de la erradicación de las plantaciones de coca. Sin embargo, son muchos los argumentos que los campesinos andinos pueden esgrimir en contra de tan drástica medida.

La producción de la coca data de mucho tiempo atrás, siglos antes de que se descubriese la cocaína y sus efectos euforizantes. Por otro lado, según los estudios más serios sobre la materia, la masticación de la coca produce efectos positivos y suple las deficiencias alimenticias de los indígenas quechuas y aymaras, dándoles renovada energía en su trabajo. La coca está relacionada con todo su mundo social y religioso, constituyendo un componente básico de su cultura.

La plantación de la coca, así como su comercialización, es algo legal, tanto en Bolivia como en Perú. Los ingresos que esa comercialización legal de la coca aporta al erario público son muy altos.

La profunda postración económica en la que ha vivido siempre el campesinado indígena andino se ha visto aliviada, en parte, gracias al mejoramiento progresivo del precio de la hoja de coca, pero es precisamente en estos momentos cuando, por presiones del gobierno de los Estados Unidos, las autoridades bolivianas comienzan a exigir la limitación y hasta la erradicación de las plantaciones de coca. Los distintos proyectos elaborados para la suplantación de la coca por otros cultivos, como es el cacao o el café, no convencen a los campesinos. Y tienen sus razones para ello. La planta de coca es original de estas regiones y, por lo tanto, perfectamente adaptada a sus condiciones climáticas y orográficas. La hoja de coca se da tres y hasta cuatro veces al año; por lo tanto, el trabajo que implica y sus ingresos están bien repartidos. Las plantas tienen un promedio de vida entre 15 y 20 años. El comercio es seguro y perfectamente organizado. La práctica de los campesinos y sus conocimientos con respecto al cuidado, recolección, selección y comercialización de la hoja son muy completos. Toda la familia puede trabajar por igual en la recolección. Las enfermedades de la planta son pocas y fáciles de controlar. Los rendimientos son superiores al de cualquier otra producción. El humilde campesino que produce la hoja se limita, por lo general, a venderla en el mercado, sin tener parte alguna en la elaboración de la cocaína y menos en el narcotráfico. Por lo tanto, ¿por qué razón se le va a exigir a él que deje de producir la hoja de coca...?

Pero el gobierno de los Estados Unidos y sus emisarios en Bolivia no parecen dispuestos a revisar sus criterios. El Consejo Nacional de la Lucha contra el Narcotráfico, bajo la continua presión de los Estados Unidos, ha declarado al año 1982 como «el año de la sustitución de la coca».

Con este motivo llegó a Bolivia el 7 de marzo de este mismo año el señor Dominick Di Carlo, Secretario Adjunto del Departamento de Estado para el Control del Narcotráfico. «El tema único para abordar es el reemplazo de la coca.» Así lo comunicó la embajada norteamericana en Bolivia.

En realidad, desde que el General Torrelío asumió la Presidencia de la República en septiembre de 1981 ya la Drug Enforcement Administration (DEA) se hizo cargo del asesoramiento y la supervisión de la institución oficial encargada en Bolivia del control del narcotráfico.

En fecha 11 de marzo de 1982 el Consejo Nacional de la Lucha contra el Narcotráfico presenta al señor Di Carlo un plan de destrucción sistemática de los cocales. Dice así:

«En lo que respecta a los cocales clandestinos que son todos los situados fuera de los Departamentos de La Paz y Cochabamba, las acciones que ha previsto realizar el Consejo Nacional de la Lucha contra el Narcotráfico se sujetarán al cronograma siguiente:

Entre el 10 de marzo y el 30 de abril, cumpliendo lo dispuesto por el artículo 19 del Decreto Ley 18714 y siempre que esté disponible el herbicida adecuado, se procederá a la destrucción de los cocales ubicados en la región de Yapacaní del Departamento de Santa Cruz.

Hasta el 15 de mayo se ubicarán y se destruirán otros cocales ilegales ubicados en el Departamento de Santa Cruz.

Hasta el 30 de junio se ubicarán y se destruirán otros cocales ilegales ubicados en el Departamento del Beni.

Entre el 30 de junio y el 31 de diciembre se procederá al descubrimiento y destrucción sistemáticos de todos los cocales ilegales ubicados en los Departamentos de Santa Cruz y del Beni.

Asumimos que el 50 % de los costos totales de esta labor de detección y destrucción de los cultivos ilegales de coca será cubierta por el gobierno norteamericano. Si así no fuera, dada la escasez de recursos del Consejo y la crisis económico-financiera que confronta el país, el cronograma expuesto sufriría recortes y retrasos considerables.» («Presencia». Solicitada 11-III-82.)

Con esas medidas, el Consejo Nacional de la Lucha contra el Narcotráfico piensa que, para fines del año 1983 la producción de hoja de coca en el Chapare se habría reducido en un 30 % en la superficie cultivada. Es decir, unas 4.000 hectáreas menos. Para el año 1984 se habría disminuido la extensión de los cocales en otras 3.000 hectáreas.

Sin embargo, existen profundas divergencias al respecto entre las autoridades bolivianas y los representantes de los Estados Unidos para el control de las plantaciones. El principal punto de fricción radica en la diversidad de opiniones con respecto a la extensión y a la producción actual de los cocales. Según los datos aportados por las autoridades bolivianas en el año 1971 la producción de coca del Chapare era de 2.666 toneladas métricas y en el año 1980 ha alcanzado las 24.146 toneladas métricas, siendo la extensión cultivada en el año 1971 de poco más de 3.000 hectáreas y en el año 1980 de 12.370 hectáreas. Pero la delegación norteamericana presenta otros datos muy distintos, basados en la información «vía satélite». Según las cifras contenidas en el estudio elaborado por la Earth Satellite Corporation y publicado en abril de 1981, el área de cultivo de coca del Chapare en 1980 fue de 27.500 hectáreas con una producción de unas 50.000 toneladas métricas. Ese mismo estudio proyectó una producción de 64.000 toneladas métricas en el Chapare para 1981 y de 82.000 para 1982.

Como se puede apreciar, las diferencias, tanto en los datos de la extensión de los cocales como en los de producción de coca, son enormes. El Consejo Nacional de la Lucha contra el Narcotráfico de Bolivia ha rechazado, como totalmente inexactas, las cifras aportadas por la delegación norteamericana que se basan en los datos proporcionados por el satélite Landsat, ya que esos datos están proporcionados a una escala de 1:100.000 y no han sido comprobados después sobre el terreno.

Sin embargo, y a pesar de tener criterios tan dispares, el 23 de abril de 1982, el Ejército y la Policía se movilizan para poner en ejecución el plan norteamericano de erradicación de la coca.

3. La Erradicación de la Coca: Solución Imposible

El gran operativo para la erradicación de la coca comenzó el 23 de abril de 1982, en el que participaron cinco compañías del Ejército con el apoyo de la Fuerza Aérea y la policía de narcóticos. La acción se desarrolló simultáneamente en el área de influencia del río Ichilo y en la región de Puerto Grether, abarcando una extensión de 1.100 kilómetros cuadrados. Participaron en ella efectivos de la Séptima y la Octava División, así como el Regimiento Ránger «Manchego».

Se encontraron 283 pozos de maceración de coca y fueron destruidas 30 fábricas de cocaína. En la región de Yapacaní y de Puerto Grether causó gran preocupación la constatación de que se estaban usando herbicidas para matar las plantas. Según las primeras denuncias de algunos periodistas, se trataba del herbicida «2-4ST» que Estados Unidos utilizó en la guerra del Vietnam para destruir las selvas, y denominado popularmente como «Agente Naranja». Algunos funcionarios de narcóticos insistieron en que se trataba del herbicida conocido como «2-4-D».

Sin embargo, en los letrados que los funcionarios de narcóticos pusieron en las zonas afectadas por el herbicida se podía leer esta advertencia: «Este cocal ha sido extinguido mediante la aplicación de herbicidas. Se recomienda no aproximarse y menos tomar contacto con los residuos durante 40 días.» Esta advertencia parece insinuar que el herbicida usado es bastante más nocivo que el «2-4-D»!

En el comunicado oficial que en fecha 26 de abril emitió el Consejo Nacional de la Lucha contra el Narcotráfico, después de afirmar que se está usando el herbicida 2-4-1) «con el fin de evaluar su costo y eficacia en comparación con la destrucción manual»... se dice que «el suelo quedará afectado por espacio de cuatro a ocho semanas». Esta afirmación es avalada por el científico norteamericano Fred Tachirley. Lo que hace suponer que las autoridades

bolivianas no conocen con exactitud ni la calidad real del herbicida que se está usando, ni cuáles son sus efectos sobre los terrenos, sobre los animales y sobre las personas.

El Instituto Nacional de Colonización, pocos días después, advirtió sobre el grave peligro que entraña la destrucción de las plantaciones de coca con herbicidas tóxicos.

En una reunión con la prensa, los representantes de este organismo oficial, encabezados por su Director Ejecutivo, refiriéndose a la campaña iniciada en algunas regiones del país para la eliminación de las plantaciones de coca por medio de herbicidas tóxicos, indicaron que ello destruiría la tierra totalmente por varios años, ya que desaparecerá la materia orgánica, los nutrientes químicos y microorganismos que nitrogenan la tierra. El uso de estos herbicidas tóxicos convertirá estas zonas en verdaderos eriales que sólo podrán ser rehabilitados con el trasplante de «humus» desde otras regiones no afectadas lo que implicaría millones de toneladas métricas.

Los técnicos del Instituto Nacional de Colonización indicaron, además, que incluso los plagicidas de uso muy común en la agricultura tienen graves consecuencias sobre la tierra, a pesar de que su toxicidad es mucho menor que la que tienen los que se están utilizando para erradicar la planta de coca. Por lo demás, afirmó el ingeniero Hernán Mufloz Durán, «en el caso de tener que usar herbicidas tóxicos, correspondería al Instituto Boliviano de Tecnología Agropecuaria realizar las investigaciones del caso y superar los posibles desajustes que se puedan producir con los campesinos que trabajan esas tierras». También manifestó que en la zona del Chapare no se han hecho estudios de suelos para que los campesinos puedan diversificar su producción agrícola en sustitución de la coca. («Presencia», 28-IV-82.)

Pero el Coronel Raúl González Ferry, Director Nacional del Consejo para la Lucha contra el Narcotráfico, se mostraba mucho más optimista al respecto. En declaraciones formuladas a la prensa, el día 29 de abril de ese mismo año, decía: «El Consejo garantiza que las tierras donde se están utilizando herbicidas para destruir plantas de coca, no sufrirán alteraciones de ninguna clase, puesto que el producto '2-4-D' ha sido probado científicamente. La Embajada de los Estados Unidos garantiza que no hay peligro si se lo maneja dentro de los consejos que dio el científico Fred H. Tachirley, quien llegó a Bolivia expresamente para asesorar en el uso de herbicidas.» («Presencia», 29-IV-82.) Pocos días más tarde los campesinos de la zona de Yapacaní, cuyos locales habían sido totalmente exterminados, presentaban pruebas fehacientes de que sus plantaciones eran legales, ya que contaban con la autorización respectiva del Departamento de Registros y la propia Dirección Nacional de Control de Sustancias Peligrosas había autorizado esas plantaciones cobrando anualmente 2.000 pesos por cada parcela de 20 metros por 100. Los campesinos expresaban: «Estamos desorientados y terriblemente afectados porque la hoja de coca era nuestra principal fuente de ingresos. No lo hubiéramos hecho si hubiera sido ilegal; el hecho de contar con autorización oficial nos da derecho a reclamar ante el gobierno y ante DEA, que dirigió estas operaciones de destrucción de los cicales. Queremos que se nos indemnice por las pérdidas y que se nos ofrezca un programa efectivo para continuar viviendo de la agricultura.» («Presencia», 4-V-82.)

El mismo día 4 de mayo se publicaba en la prensa del país un comunicado titulado: «El Gobierno del Presidente Torrelío y el Narcotráfico.» Dice este importante documento: «Desde la Presidencia de la República, el tristemente célebre 'Consejo Nacional de la Lucha contra el Narcotráfico' lanza sus comunicados pagados y permite que el herbicida '2-4-D' (Dichlorophenoxyacetic acid) se utilice en la zona de Yapacaní. El científico americano Fred Tachirley dice que dicho veneno es inofensivo, sabiendo perfectamente que no lo es. Le pedimos que lea el mejor libro americano de farmacología e insecticidas, 'The Pharmacological Basis of Therapeutics, de Goodman y Gilman, en el que dicen claramente: 'El 2-4-D con sus sales y ésteres son los herbicidas más familiares y potentes, que matan las plantas y arbustos provocando el crecimiento de hormonas; los animales expuestos a estos venenos mueren en forma instantánea y masiva de fibrilación ventricular. Los que no mueren instantáneamente, por haber sido expuestos a menor cantidad de herbicidas presentan rigidez en sus extremidades, entran en parálisis, caen en coma y mueren lentamente. En el hombre, además de lo anteriormente expuesto, pueden presentarse severas dermatitis de contacto, cambios irreversibles en el hígado y en los órganos reproductivos.» («The Pharmacological Basis of Therapeutics», Goodman y Gilman. Mac Millan Publishing Co.N.York. p. 1.653, cita solicitada. «Presencia», 5-V-82.)

En el simposio sobre «Ecología y Recursos Naturales», realizado en la ciudad de Cochabamba, llegó a establecerse que el uso del «2-4-D» es totalmente ilegal en Bolivia ya que, según el Decreto-Ley número 10283 de fecha 30 de mayo de 1980, se prohíbe la importación de insecticidas clorados, debido que afectan a la persona humana por ingestión oral, entre los cuales está comprendido el «2-4-D» cuya fórmula química es $\text{Cl}-\text{Cl}-\text{OCH}_2-\text{COOH}$.

Pero hay más: Según los participantes a ese simposio «la Ley de asistencia extranjera de los Estados Unidos prohíbe a las autoridades de la Dirección General de Estupefacientes de ese país exportar, e incluso aconsejar, a los gobiernos extranjeros el uso de herbicidas.

Tanto el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Bolivia, como las organizaciones sindicales campesinas y hasta representantes de la Iglesia, se opusieron al uso del herbicida. Los campesinos exigían que se actúe «con justicia y honestidad en todo este problema, pues si el narcotráfico está creciendo esto se debe a aquellos que se han desplazado hasta el Beni y que producen grandes cantidades de cocaína y de esto está bien informado el gobierno... Ellos saben dónde están los grandes. ¿Por qué solamente los pequeños están siendo atacados...?» (Federación Especial de Campesinos del Norte. «Presencia», 4-V-82.)

También la Academia de Ciencias de Bolivia toma parte en la discusión y, por medio de una carta al Ministro de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, señala: «Preocupa a la Academia Nacional de Ciencias de Bolivia los posibles efectos, por ahora no bien conocidos y estudiados, de estos productos químicos que se están aplicando y, en especial,

aquellos fenómenos que producirán, a corto o largo plazo, sobre la ecología de las regiones contaminadas.» («Presencia», 7-V-82.)

La Federación Sindical de Campesinos, consciente de las presiones internacionales a las que se ve sometido el gobierno de Bolivia, dice en un comunicado público: «Solicitamos al Gobierno el que se investigue las actividades desplegadas por algunos funcionarios de la embajada de los Estados Unidos en calidad de agentes de represión, que es totalmente ajena a las funciones diplomáticas. Exigimos al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica que si desea la destrucción o el control de la producción de la coca, pague el valor correspondiente de los ingresos que significa para un país subdesarrollado este producto, cancelando por hectárea 100.000 dólares Us.» («Los Tiempos», 7-V-82.)

4. ¿Hacia la Legalización de la Cocaína?

La solución a los problemas sanitarios y delictivos que crea la droga no es claro que se pueda alcanzar por la vía de extremar el rigor de la ley. La despenalización de la droga en cierto grado podría implicar un acercamiento más coherente y eficaz al problema.

En muchos países se ha despenalizado el consumo y, en cuanto a el tráfico, se hace una clara distinción entre drogas duras y drogas blandas. Se trata entonces de distinguir, en primer lugar, entre el toxicómano y el traficante mafioso que ha elegido esta actividad para enriquecerse a costa de la salud, e incluso, la vida de sus semejantes. El narcotraficante es tratado, en casi todas las legislaciones, como lo que realmente es: un vulgar delincuente.

Aunque muchos penalistas y médicos son partidarios de la despenalización total de la droga blanda (hachís, marihuana, cocaína...) surge el inconveniente de que su consumo «se dispare» hasta proporciones que son inadmisibles desde todo punto de vista. Porque no se penalice un comportamiento esto no quiere decir que se favorezca su difusión. Hay que reconocer que el abuso, aun de las drogas más blandas, es perjudicial, por más que su nocividad no sea penalizada por la ley. La coacción penal es útil para conseguir algunas cosas, pero ha sido totalmente ineficaz para controlar el tráfico y el consumo de estupefacientes. Aún se podría afirmar que ha sido contraproducente, ya que ha generado nuevos tipos de delincuencia. Año tras año van aumentando los consumidores de drogas. Estamos en una situación muy parecida a la que se generó en Estados Unidos por la llamada «Ley Seca».

El año 1919 se dictó en los Estados Unidos la «Volstead Act» prohibiendo el comercio y el uso de todas las bebidas alcohólicas. A raíz de esta ley se creó una verdadera mafia, generando una pavorosa corrupción en la policía. Después de varios años se llegó a constatar que había aumentado el consumo de bebidas alcohólicas en la juventud. La prohibición genera un mercado negro ilegal basado en la brutal diferencia de precios, tanto al por mayor como al por menor. Como en el caso de la «Ley Seca», el contrabando de drogas está generando delincuencia que, por la propia dinámica económica, tiende a constituirse en grandes monopolios capaces de desafiar a las personas y a las instituciones que traten de oponérseles, así como a los propios organismos del Estado. Estos monopolios tienen poder también para contener la oferta, haciendo subir los precios a su voluntad. Como, por otro lado, todo acuerdo que se haga entre las distintas mafias y los compradores, caso de no ser cumplidos, no pueden alegarse ante los tribunales, éstas se ven impulsadas a recurrir a la violencia como medio para imponer el cumplimiento de lo acordado. De este modo, la prohibición genera no sólo delincuencia, sino «delincuencia organizada» y tremendamente violenta. Una delincuencia, que, además, se desarrolla en espiral en la medida en que crecen constantemente los intereses económicos. Es muy difícil saber cuáles serían las restricciones ideales con respecto a las drogas y muy especialmente con respecto a uso de la cocaína, si tenemos en cuenta las circunstancias en las que se desenvuelve la vida actualmente. Muchos de los sufrimientos que se padecen en nuestra sociedad no tienen relación con agentes patógenos específicos, sino que son generados por causas mucho más generales. Gran parte de nuestra sociedad padece de «stress» físico o psicológico, de fatiga, de depresión, de dolor de cabeza, dolor de espalda, ansiedad... frente a los cuales no se encuentra remedio eficaz en la farmacopea tradicional. Todo esto hace pensar que la gente se vaya inclinando, cada vez más, a uso de las drogas y, muy especialmente hacia la cocaína, como solución, siquiera pasajera, a sus males. Por otro lado, no hay mucha diferencia entre el médico que receta un valium como sedante y la del profano que decide, por sí mismo, fumarse un cigarrillo de marihuana o una dosis de cocaína.

Sin duda que no se pretende con esto una liberación total que podría traer otros males, pero lo cierto es que no se resuelve el problema optando por un endurecimiento excesivo de la ley. Y menos todavía hacia una droga que, como la cocaína, ha cumplido una función positiva hacia muchas personas. Hay que insistir en que el problema principal que crea su ilegalidad es el que nutre un «mercado negro» que genera fabulosas ganancias, mafias poderosas y una espantosa secuela de crímenes.

Es, justamente, el aspecto de la criminalidad y la violencia lo más negativo y condenable de las drogas. Pero esto está más relacionado con su ilegalidad que con su contenido euforizante.

Con respecto a la cocaína cabe hacer, en primer lugar, una distinción que por obvia no deja de ser muy importante: la diferenciación fundamental entre coca y cocaína. Fuera de las distancias que separan contextos culturales profundamente distintos, el «coqueo» es algo legal y tradicionalmente aceptado. Aunque ha sido duramente criticado por personas e instituciones que lo han hecho desde contextos culturales muy diferenciados, cada día son más los científicos que ven la costumbre de «mascar coca» como algo fisiológicamente muy positivo. Nadie, por otro lado, ha podido constatar que «el coqueo» sea responsable de crímenes, actos violentos, o de pérdida del autocontrol. Algunos, eso sí, han relacionado el «coqueo» con la subalimentación del indígena altiplánico, como si aquella fuera la causante de la mala alimentación del indio. Habría que analizar más detenidamente «si no comen porque mascan coca o

mascan coca porque no tiene qué comer». Parecería más bien que es la falta de alimentos la que induce a mascar más coca.

Entre los efectos negativos de la cocaína el más grave, sin duda, es el que ha generado toda una ola de criminalidad y violencia. Aunque no se dé una relación directa e intrínseca entre cocaína y violencia, es esto lo que ha justificado las medidas legales para restringir, no sólo el tráfico, sino también su uso moderado en muchas legislaciones.

Con respecto a la criminalidad o violencia que puede generar el uso mismo de la droga no existen estadísticas que nos puedan llevar a una conclusión definitiva.

Es cierto que muchas veces se ha hecho referencia a la cocaína como generadora de violencia. Sin embargo, siempre ha habido una gran dosis de sensacionalismo y de prejuicios en ello. El miedo al «toxicómano violento» fue el argumento más usado para legitimar la prohibición de muchas drogas.

El uso de la cocaína puede comportar un cierto peligro de violencia al ser un estimulante del sistema nervioso que aumenta la confianza en sí mismo y disminuye las inhibiciones. Si alguien es de temperamento violento o tiene tendencia a encolerizarse, el uso de la cocaína puede actualizar esa tendencia o agravarla, ya que incita más a la acción que a la reflexión. Se han cometido crímenes por adictos a la cocaína, pero han sido personas que tenían marcadas tendencias criminales. Es posible, sin embargo, que el uso de la droga excite esas tendencias.

Un estimulante del sistema nervioso como es la cocaína puede dar al consumidor la voluntad necesaria para el cumplimiento de cualquier acto que necesita, ante todo, seguridad en sí mismo, ya sea un discurso, un presentarse en escena o un robo... El alcohol da un valor parecido, pero el sujeto que ha bebido no conserva el control de sí mismo a nivel psicomotor e intelectual. En cambio la cocaína da coraje y no quita, en lo más mínimo, el dominio pleno de las propias facultades. Esta, sin duda, es la razón para que tantos artistas del cine y del teatro hayan sido adictos a la cocaína. Si se compara la cocaína con el opio también se encuentran grandes diferencias: mientras el opio y la heroína dejan al consumidor insensible ante el dolor o al deseo de cualquier cosa, la cocaína reafirma en el consumidor su propia voluntad y le puede inducir a realizar actividades hasta el límite mismo de la propia capacidad. Si los consumidores de heroína o de morfina tienden a verse como monjes budistas que alcanzan el nirvana, el adicto a la cocaína se parece más al «superhombre» de Nietzsche que realiza su voluntad de poder. Pero no es evidente que de esa seguridad egocéntrica se pase a la violencia física como tal.

En un estudio de DEA realizado entre presos toxicómanos que habían cometido crímenes, eran mucho más numerosos los que habían tomado otras drogas que no cocaína. El expediente de crímenes contra personas es mucho menos voluminoso que el de otras drogas. («Drug Usage and Arrest Charges», 1971.)

Es la ilegalidad de la cocaína la que ha dado lugar a numerosos crímenes y actos de violencia. Esa ilegalidad, instrumentalizada por la alta oficialidad militar de Bolivia es la que ha generado los más grandes negociados y la más inhumana violencia. Contrabando, asesinatos, corrupción, tráfico de armas, compras de conciencias, complot, asaltos, golpes de Estado..., acompañan al tráfico de la cocaína. Una decena de «familias» relacionadas con el tráfico de la droga han convertido a Miami y a otras ciudades de Estados Unidos en sangrientos campos de batalla. Igual se puede decir de las ciudades colombianas como Medellín, Bogotá, Cali o Leticia. En Bolivia cada vez se hace más violenta la lucha entre las distintas mafias por llegar al control total del narcotráfico. Esta lucha se ve aún más agravada por la presencia de los paramilitares y por la impunidad con la que pueden actuar los grandes traficantes amparados por la protección oficial.

Epílogo

El análisis de los nexos que imbrican al narcotráfico con el poder político en Bolivia nos ha llevado a formular algunas conclusiones que se desprenden lógicamente de él.

La primera y más elemental de las conclusiones es la de dejar claramente establecida la distinción entre coca y cocaína. Gran parte de la polémica que aún rodea al consumo de la hoja de coca por parte de las grandes mayorías de aymaras y quechuas de Bolivia tiene que ver con los prejuicios y el desprecio colonialista con que el «hombre blanco» ha mirado desde siempre el fenómeno del coqueo. El «colonialista» (sea europeo, norteamericano o, incluso, boliviano) denigra y ataca lo que no conoce, lo que está fuera del radio de sus valores culturales. Debe quedar, pues, bien claro que los habitantes autóctonos de lo que hoy es Bolivia, que han cultivado cocales y han practicado el coqueo desde antes de la invasión del colonialismo español, no son responsables del uso y abuso que nuestra sociedad haga de la cocaína y, por lo tanto, no son responsables del tráfico de la misma. Pretender ver en la erradicación de los cocales la solución al tráfico de la cocaína es, pues, algo no sólo injusto, sino también totalmente equivocado.

Por otra parte, no es nada claro que los graves problemas delictivos y sanitarios que generan el narcotráfico y el uso incontrolado de la droga vayan a encontrar remedio en un mayor rigor de la ley y en una mayor represión. Habría que ver si, al contrario, una despenalización de las drogas consideradas como «blandas» no significaría una aproximación más realista, fecunda y eficaz al problema. Es verdad que una despenalización total podría provocar que el consumo «se dispare», causando estragos en la salud. Pero también es cierto que la penalización legal, bien es útil en algunos aspectos, ha resultado ser completamente incapaz de controlar el tráfico y el consumo de la droga. Lo que sí parece indudable es que la violencia y la criminalidad, que suelen acompañar con frecuencia al uso de la cocaína, tienen mucho más que ver con su ilegalidad que con su contenido euforizante.

El uso y el abuso de prácticamente todas las drogas conocidas, y muy especialmente de la cocaína, es un problema esencialmente norteamericano. Estados Unidos es, de lejos, el mercado de drogas más poderoso del mundo; su existencia se debe no sólo al elevado nivel de ingresos y de consumo que han alcanzado sus habitantes en promedio, sino también al tipo de sociedad que allí se ha creado. Este tipo de sociedad genera no sólo tensiones y angustias, que buscan alivio en el consumo de las drogas, sino también un afán y ansiedad desmedida de lucro. Mucho se ha insistido en el superpoder de las mafias de narcotraficantes colombianos o bolivianos, pero está claro que éstos nada podrían hacer sin la complicidad directa y colaboración decisiva de las mafias norteamericanas que operan fuera y dentro de los Estados Unidos. Cada vez aparece más claro que la impunidad con que operan los grandes narcotraficantes se debe, ante todo, a la corrupción imperante en los servicios aduaneros y en los organismos policiales, incluidos los que están encargados de la lucha contra el narcotráfico, de ese país (1).

Otra conclusión importante que se desprende del análisis llevado a cabo es que todo indica que las poderosas organizaciones de narcotraficantes que actúan dentro de Bolivia nada serían y nada podrían si no fuese porque cuentan con la complicidad directa de las Fuerzas Armadas o, al menos, de los altos jefes militares de ese país. Las Fuerzas Armadas ocupan el poder en Bolivia, casi ininterrumpidamente, desde 1964. El poder militar en Bolivia ha sido y es, en la actualidad, esencialmente fascista. El enriquecimiento más fácil y más rápido posible, a cualquier precio, es su finalidad primordial. El narcotráfico ha crecido bajo la protección de la dictadura militar y en él se originan las escandalosas fortunas de las que hacen ostentación muchos militares. El poder militar no sólo es ilegal en su origen, lo es también en todo el curso de sus actividades y quehacer políticoadministrativo. cuando asumen el poder, los militares imponen sus criterios o sus intereses por encima de toda ley. No hay poder capaz de controlar ni de juzgar su comportamiento. Únicamente el retorno al imperio de la ley podrá acabar con la impunidad de que goza el poder militar. Por lo tanto, sólo una auténtica democratización del poder político en Bolivia podrá poner coto al creciente poder del narcotráfico, hasta erradicarlo. Pero la condición para ello es que las Fuerzas Armadas dejen de protegerlo, regresen al cumplimiento de sus específicas funciones militares y, por lo tanto, se subordinen al poder civil democráticamente elegido por el pueblo.

Por último, no se puede dejar de ver que el poder militar en Bolivia ha terminado engendrando una criatura monstruosa, que ha crecido y se ha desarrollado a sus expensas y bajo su protección: los «paramilitares». Estos son como una deformación interesada del poder militar. Tienen el poder de las armas, pero lo camuflan bajo ropajes de civilidad. Gozan del anonimato de los civiles, pero también se benefician con la organización y la impunidad de los militares. Son «profesionales de la violencia», una verdadera máquina de destrucción, terror y muerte. Se alimentan con las fabulosas ganancias y aportaciones de los narcotraficantes a cambio de la escolta armada que les dan para garantizar la impunidad de su actividad delincencial. Su total desaparición es el más urgente de los requisitos para emprender la erradicación del narcotráfico y poder alcanzar la paz social en Bolivia.

Londres, octubre de 1982.

LISTA PARCIAL DE PARAMILITARES BOLIVIANOS Y DE MERCENARIOS EXTRANJEROS

Esta es, evidentemente, una lista muy incompleta, pues el número total de paramilitares en Bolivia suele cifrarse alrededor de los tres mil. Sin embargo, en ella figuran los nombres más notorios y los que se destacan por su influencia política o su poder de mando. Para confeccionarla se han compulsado numerosas y variadas fuentes de información, habiéndose preferido aquéllas de carácter público, de tal forma que la gran mayoría de los nombres aquí publicados está respaldada documentalmente en recortes de la prensa tanto boliviana como no boliviana. En el diario «Presencia», de La Paz, apareció, el 23 de mayo de 1982, una larga lista de presuntos paramilitares bajo la original cobertura de «**Deudores morosos de la Compañía importadora PARA MI Ltda. con sede en Buenos Aires y sucursal en Bolivia**». De ella, sólo una veintena de nombres coinciden con los aquí publicados, lo cual no quiere decir que el resto sea considerado apócrifo, sino sólo insuficientemente garantizado por tratarse de una fuente anónima. Por otra parte, el hecho de que la mayoría de los nombres aquí publicados provengan de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba no significa que en el resto del país no existan también grupos paramilitares, sino sólo que la información disponible al respecto es más deficiente. Por lo demás, aquí podrá observarse que, aunque entre los paramilitares abundan los elementos antisociales, esa no es su característica predominante, sino el hecho de que son elementos infiltrados (ya sea como informantes, como enlaces o como saboteadores) en una buena parte del tejido social boliviano: el Gobierno, la Administración Pública, las Fuerzas Armadas, la Policía, las aduanas, los partidos políticos, los sindicatos, el Magisterio, la Universidad, la Iglesia, la empresa privada.

Lista Parcial de Paramilitares Bolivianos y Mercenarios Extranjeros	
Alarcón, Alvaro	Delator. Agente del SES.
Alarcón, Gary	Integrista católico. Terrorista. Cabecilla de la Legión Boliviana Social Nacionalista de Cochabamba. Responsable nacional de los mercenarios extranjeros (GOA).
Alarcón, Guido	Hermano del anterior y seguidor suyo.
Alí Parada, José	Del FBJ, apresado en Brasil.
Algañaraz, Róger	De la Aduana de Santa Cruz
Alvarez, Alberto	De FSB
Angulo, Hugo	Supervisor de Escuelas Normales. Cochabamba
Aponte, Róger	Narcotraficante. Ex contador de Roberto Suárez Gómez
Arandía, Jaime	Teniente. Del GOESP.
Aranibar, Jaime	Informante. Huanuni.
Araoz, Eulogio	Campesino. Cochabamba.
Arce Gómez, Luis	Coronel. Terrorista. Narcotraficante. Ex jefe de Inteligencia del Ejército y ex ministro del Interior. Primer responsable de la organización de los grupos paramilitares. Cabecilla del «Grupo Armado de Lucha Bolivia Primero».
Arzabe, Oscar	Catedrático en la UMSA.
Atala, Miguel	Transportista. Santa Cruz.
Atala, «Pachi»	Automovilista. Narcotraficante. Santa Cruz.
Atala, Sonia Sanjinés de	Esposa del anterior. Narcotraficante.
«Atlas, Mister»	Luchador profesional. Torturador. Min. Interior. Asesino de Luis Espinal.
Balvián, Jorge "Coco"	Delator. Torturador. Min. Interior.
Ballón, Walter	Maestro rural. Guardaespaldas de Nelo Montero
Baptista, José Abraham	Ex jefe de la DID en Oruro, Cochabambay Santa Cruz. Agente de la Sección de Inteligencia del II Cuerpo de Ejército y enlace entre los narcotraficantes y el Alto Mando Militar. Asesinado en Santa Cruz en octubre de 1980 por orden de Arce Gómez.
Barbie (a) Altmann, Klaus	Criminal de guerra alemán. Ex jefe de la policía política nazi GESTAPO en Lyon (Francia). Agente del Min. Interior y asesor en técnicas de represión. Reclutador de mercenarios. Prófugo de la justicia francesa y alemana.
Barrenechea Aramayo, Víctor	Comisario de la DIN. Torturador. Min. Interior. Asesino de Luis Espinal.
Barrenechea, "Cocacho"	Torturador. Min. Interior.
Barrionuevo, Eduardo	Mercenario argentino procedente de la AAA.
Benavides Alvizuri, Guido	Inspector de Policía. Ex jefe del DOP y de la Sección de Informaciones de la DIN. Director Nacional de la DIN. Corresponsable de la organización de bandas paramilitares.
Benazzi, Miguel Angel(a) "Manuel" o "Salomón"	Capitán argentino. Torturador de la ESMA y agente de Inteligencia para operaciones en el exterior. Funcionario de la Agregaduría Naval de la

	Embajada Argentina en Bolivia desde 1978.
Bernal, Juan Carlos	Jefe de grupo en Cochabamba.
Bowles Rivero, Rolando	Director de Lotería Nacional.
Boza Lizarazu, Froilán	Supervisor de Escuelas Rurales. Cochabamba.
Bravo, Reynaldo	Funcionario en la Facultad de Economía de la UMSA. Agente del Min. Interior.
Buchón, Olivia	Secretario en la Facultad de Tecnología de la UMSA.
Caballero Lafuente, Julio	Maestro rural. Jefe de grupo en Cochabamba.
Caballero, René	Informante. Huanuni.
Callau Justiniano, Nelo	Coordinador del Min. Interior con la Prefectura de Santa Cruz.
Camacho, Alberto	Informante. Catavi.
Camacho Chávez, Mario.	Maestro rural. Cochabamba
Camacho Navia, Fausto	Maestro rural. Cochabamba.
Canelas, Fernando	Jefe de grupo en Cochabamba.
Carbonne, Mario	Mercenario italiano. Terrorista
Cassib, Oscar .	Contacto con narcotraficantes en Santa Cruz
Cassis, Omar	De FSB. Jefe de Seguridad y asesino del Coronel Selich, primer ministro del Interior de Bánzer. Tercer Comandante del GEC del FBJ.
Castañón, Ubaldo	Maestro. La Paz.
Castro, Edwin	Jefe del Departamento de Bienestar de la UMSA.
Castro Menacho, Jorge	Del Comando "Los Albertos", asesino de Luis Espinal.
Céspedes, Oscar	Ex dirigente campesino. Jefe de grupo en La Paz
Clarós, José	Campesino. Cochabamba.
Clavijo, Daniel	Mayor del Ejército. Coordinador en el campo.
Clavijo Molina, Valentín	Supervisor de Escuelas Rurales. Jefe de grupo en Cochabamba.
Córdoba Gutiérrez, Carmen	Informante. Cochabamba.
Crespo, Julio César.	De la banda de Gary Alarcón.
Cuellar, José «Palanca»	Asesino de Abraham Baptista. Santa Cruz.
Cuentas, Daniel «Damy»	Torturador. Min. Interior.
Chávez, Alberto	Médico. Del FBJ. Santa Cruz.
Dalence, Alfonso	Jefe de grupo en Oruro.
Deri, N	Oficial de la Policía Federal Argentina.
Dip, Ricardo	Mercenario argentino. Informante. Contacto con narcotraficantes.
Echevarría Barrancos, Erland	Narcotraficante. Ex socio de A. Baptista.

Eguez Mejillones, José	Agente del Min. Interior en la UMSA.
Elio, Antonio "Chicho"	Ex Subsecretario del Min. Interior. Jefe de grupo en Santa Cruz.
Escalier, Jorge	Agente del Min. Interior en la UMSA.
Estenssoro, Hugo	Informante. Santa Cruz.
Estrada, Francisco	Del Comando «Los Albertos», asesino de Luis Espinal.
«Fantón, Capitán»	Oficial de la Fuerza Aérea. Torturador. Min. Interior y zonas mineras.
Fernández González, Carlos	Mayor del Ejército. Encargado de la recaudación de impuestos y contribuciones de los narcotraficantes.
Ferrufino, José Faustino	Supervisor de Escuelas Rurales. Cochabamba.
Fiebelkorn, Joachim	Mercenario alemán del SES. Terrorista internacional y ex miembro de la Legión Española. Primer Comandante del GEC del FBJ. Prófugo de la justicia italiana, en Brasil o Paraguay.
Forlangier, Napoleón	Mercenario francés procedente de la Legión Extranjera. Instructor militar del FBJ.
Fuentes, Raúl	Informante. Siglo XX.
Gallardo, Juan Carlos	Encargado de la imprenta en la UMSA.
Gamarra Zorrilla, José	Jefe de grupo en La Paz.
Gamón, Pascual	Ex dirigente campesino. Jefe de grupo en LaPaz.
Gantier Quispe, Carlos	Maestro rural. Torturador. Cochabamba.
García, Juan Carlos	Narcotraficante. Agente del SES.
García Ricaldi, Angel	Teniente Coronel retirado. Subjefe de la Sección de Inteligencia del Ejército en 1980. Apresado por narcotraficante.
Gómez Laterrada, Carlos	Delator. Contraloría de Cochabamba.
González, Francisco «Paco»	Contacto con narcotraficantes. Santa Cruz.
González, Percy	Guardaespalda de Widen Razuk.
González Bonorino, Martín y «Gordo»	Mercenarios argentinos del grupo de Mingolla. Terroristas.
Gutiérrez, Jaime	Narcotraficante. Segundo Comandante del GEC del FBJ.
Gutiérrez, José Luis	Agente del Min. Interior.
Gwinner, Kai	Mercenario alemán del FBJ.
Herrera, Fernando	Director de la TV. Agente del SES.
Hinojosa, N.	Capitán. Subjefe del SES, luego del DIE.
Hirsch, Elías	Jefe de grupo en Cochabamba.
Hoefle, Franz-Josef .	Mercenario alemán del FBJ
Hurtado de Araoz, Manuela	Informante. Cochabamba.
Irazoque, Carlos	Agente del Min. Interior.

Ivanovich, Andrés «Flaco»	De FSB. Subdirector de Lotería Nacional. Agente de Min. Interior.
Jordán, Mario	De la banda de Gary Alarcón.
Koeller, «El Largo»	Cochabamba.
Konter, Manfred	Mercenario alemán del FBJ.
Kopplin, Herbert Manfred Paul «Ike»	Mercenario alemán del FBJ. Ex miembro de la Legión Extranjera. Agente del Consejo Nacional de Lucha contra el Narcotráfico.
Kullmann, Willi Herbert Manfred	Mercenario alemán del FBJ. Agente del Min. Interior. Apresado en Brasil.
Landívar, Rodolfo «Rudy»	Capitán. Ex Coordinador del Pacto Militar-Campesino en Santa Cruz. Jefe de grupo en Santa Cruz.
Lauer, Heinz	Ex oficial de las Tropas de Asalto SS del Ejército alemán. Alto funcionario del Min. Interior.
Leclerc, Jacques Edouard	Mercenario francés. Terrorista procedente de la antigua OAS.
Lewandowski, Hans Jürgen	Mercenario alemán del SES. Ex soldado de las Tropas de Asalto SS nazis y ex miembro de la Legión Extranjera. Asesinado por Fiebelkorn en Santa Cruz en noviembre de 1980.
Linale, «Mimo»	Agente del SES.
Loayza, Rafael	Coronel. Torturador. Ex jefe del DOP. Especialista en interrogatorios e investigación política. Funcionario permanente del Min. Interior.
López, Darío	Campesino. Norte de Potosí.
Loza, «Goyo»	Torturador. Min. Interior.
Magariños, Nicanor	Funcionario en la Facultad de Ciencias Puras de la UMSA. Agente del Min. Interior
Maldonado, Gualberto	Maestro rural. Torturador. Grupo «Los Tigres» de Cochabamba.
Maldonado, Ismael y Edgar	Hermanos y cómplices del anterior.
Maldonado Miranda, Aurelio	Supervisor de Escuelas Rurales. Cochabamba.
Martínez M., Pedro	Integrante católico y miembro de la Liga Mundial Anticomunista-Sección Bolivia. Jefe de la División de Personal de la UMSA.
Mena Burgos, Carlos	Coronel. Ex jefe de Inteligencia y de Operaciones del Min. Interior. Ex ministro del Interior. Asesor de la Sección de Inteligencia del Ejército.
Menacho, «Chicho»	Santa Cruz.
Menacho, Edwin Casto	Santa Cruz.
Menacho, Rosendo	Santa Cruz.
Méndez Peinado, José	Control del Aeropuerto de Santa Cruz.
Méndez V., Víctor Hugo	Jefe de la zona de Oruro.
Méndez, Teófilo	Informante. Huanuni.
Mendíaz, Víctor	Coronel argentino. Responsable de la represión en el norte de Argentina y de las incursiones de comandos terroristas en el sur de Bolivia. Enlace de los

	«asesores» argentinos con el Coronel Faustino Rico Toro.
Mendizábal, Guillermo	Informante. Colquiri.
Mendizábal, Víctor Hugo	Del Comando «Los Albertos», asesino de Luis Espinal.
Mingolla, Alfredo Mario	Mercenario argentino. Agente del Min. Interior. Terrorista y provocador.
Molina, Lisandro	Campesino. Santa Cruz.
«Mono Relojero»	Del Comando «Los Albertos», asesino de Luis Espinal. Terrorista.
Monroy Munguía, Fernando «Mosca»	De FSB. Terrorista. Jefe de grupo en La Paz y gangster en Santa Cruz. Asesinado en Santa Cruz en junio de 1982.
Monroy Munguía, N.	Hermano del anterior. Del FBJ.
Montaño, N.	Capitán. Del SES.
Montero, Nelo	Mayor del Ejército. Coordinador del Pacto Militar-Campesino en Cochabamba.
Montero Negri, Humberto	Norteamericano. Traficante de armas y de cocaína.
Montes Nieto, Norach	Agente de la Sección II del Ejército en la UMSA.
Morant, Ernesto	Torturador. Santa Cruz.
Morato, Oscar	Informante. Santa Cruz.
Moscoso, Guillermo	Agente de la DIN. Torturador. Min. Interior. Asesino de Luis Espinal.
Moscoso, Tomás	Agente del SES. Narcotraficante.
Moya, Atilio Benito	Mercenario argentino. Santa Cruz.
Muñoz, Lidia de	Informante. Colquiri.
Muñoz Torres, Weymer	Capitán. De la Sección II del Ejército.
Nielsen, Roberto	Capitán. Jefe de Seguridad de García Meza.
Orellana, Juan	Campesino. Cochabamba.
Ormachea, Víctor	Torturador. Min. Interior.
Ortega, Justo	Director de núcleo de escuelas rurales. Torturador. Jefe de grupo en Cochabamba.
Ortega, Víctor Hugo	Del Comando «Los Albertos», asesino de Luis Espinal.
Ortiz Gutiérrez, A. Ramón	Del FBJ. Apresado en Brasil.
Osco, Dionisio	Dirigente campesino. La Paz.
Ostria Trigo, Marcelo	Funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Otarola, Juan Carlos	Del Comando «Los Albertos», asesino de Luis Espinal.
Otero Arrién, Edmundo «Piqui».	Jefe de grupo en Santa Cruz. Apresado por narcotraficante.
Pacheco, Alex	Narcotraficante. Enlace con Arce Gómez.
Pamo, Melquiades	Torturador. Min. Interior.

Paz, José «Pepe»	Narcotraficante. Montero.
Paz Hurtado, Manuel	Capitán de la Fuerza Naval. Narcotraficante.
Penseroli, Imelda Lourdes	
y Rosa Mariana	Mercenarias argentinas. Del FBJ. Apresadas en Brasil.
Peredo, Luis	Informante. Huanuni.
Pereira, «Mozo»	Santa Cruz.
Pereira Quiroga, Alvaro	Director distrital de escuelas rurales. Jefe de grupo en Cochabamba.
Pereira Quiroga, Elena	Hermana del anterior.
Pernia, Antonio (a) «Rata»«Trueno» o «Martín»	Capitán argentino. Destacado torturador de la ESMA y agente de Inteligencia para operaciones en el exterior. Agregado Naval de la Embajada de Argentina en La Paz. Asesor del SES.
Perrota, N.	Capitán argentino. Agregado Naval de la Embajada argentina en Santa Cruz de la Sierra.
Pinto, Rufino	Dirigente transportista. La Paz.
Pizarroso, N .	Teniente. Del SES.
Poggi de Quesada, Rosario	Coordinadora de los paramilitares en el Min. Interior.
Portocarrero, Edwin	Agente del Min. Interior en la UMSA a cargo de la parte docente.
Puyol, Germán	Capitán. De la Sección II del Ejército.
Quiroga, Fernando «Freddy» (a) «Lince»	Coronel. Ex jefe del SIE. Fundador y jefe del SES, luego del DIE. Corresponsable de la organización de bandas paramilitares.
Quiroga, Orlando «Caballo»,	De la Aduana de Cochabamba.
Ramírez, Jaime	Agente del SES. Narcotraficante.
Razuk Abrene, Widen	Prefecto de Santa Cruz bajo Bánzer. Terrorista. Narcotraficante. Jefe de grupo en Santa Cruz.
Recacochea, Carlos	Santa Cruz.
Rivera, Soledad	Magisterio. Cochabamba.
Roca, Lorgia	Funcionaria del Min. Interior en Montero. Enlace con narcotraficantes.
Rocha, Lucio	Jefe del Departamento de Acciones y Control de la UMSA. Agentes del SES.
Rocha, Oscar	Del Comando «Los Albertos», asesino de Luis Espinal.
Rojas, Anacleto	Campesino. Cochabamba.
Rojas, Marcelo	Oficial de la Fuerza Naval.
Sagra, Oscar	Mercenario argentino procedente de la AAA. Informante.
Salamanca Trujillo, Daniel	Subsecretario del Min. Interior bajo Arce Gómez. Ideólogo y panfletista de los paramilitares.
Salamanca Trujillo, Hugo	Hermano del anterior. Secretario privado de García Meza.
Salazar, Pedro	Sargento. Del GOESP.

Salinas, Walter	Interventor de la Federación de Maestros Rurales de Cochabamba.
Sánchez, José Luis Machiavello	Mercenario peruano. Del FBJ. Apresado en Brasil.
Sánchez de Loria, Gonzalo	Catedrático en la UMSA.
Sánchez Peña, Pablo	Agente del SES.
Sandoval Morón, Willy	Encargado de la recaudación de impuestos a los grandes transportistas de coca a nombre del SES.
Santa Cruz, Antonio	Jefe de personal en unidad sanitaria de Cochabamba.
Saravia, N .	Capitán. Del SES.
Schelling, N. (a) «Pingüino», «Mariano» o «Miranda»	Capitán argentino. Torturador. Jefe de Inteligencia del aparato represivo de la ESMA en Buenos Aires y agente para operaciones en el exterior. Responsable del equipo de expertos en Terrorismo e Inteligencia de la ESMA que se trasladó a Bolivia en 1980.
Schelling, N .	Coronel argentino. Hermano del anterior. Profesor en la Escuela de Estado Mayor en Cochabamba.
Schramme, Jean	Mercenario belga. "Coronel" de mercenarios y ex jefe de Policía en Katanga (ex Congo belga, hoy Zaire). Beni.
Soto, N .	Capitán. Tránsito de Cochabamba.
Stellfeld, Hans Joachim	Mercenario alemán del FBJ. Ex soldado nazi. Guardaespaldas de Ustarez. Muerto (por sobredosis de cocaína) o asesinado (por Hoefle y Konter) en Santa Cruz en diciembre de 1980.
Suárez, Héctor	Agente del Min. Interior.
Téllez Mier, Víctor	Cochabamba.
Torres, Hilarión	De FSB. Jefe del Departamento de Inscripciones y Registros de la UMSA.
Torres Vilela, Melquiades (a) «Jemio»	Detective de la DIN. Torturador. Min. Interior. Asesino de Luis Espinal.
Torrico, Epifanio	Magisterio. Cochabamba.
Torrico, Santiago	Campesino. Norte de Potosí.
Trigo, Raúl	Del Comando «Los Albertos», asesino de Luis Espinal.
Trujillo, Galo	Luchador profesional. Torturador. Min. Interior. Asesino de Luis Espinal.
Urefia, Adalid	Magisterio. Cochabamba.
Usnayo, Marcial	Agente de la DIN y del SES. La Paz.
Ustarez Ferreira, Adolfo	Contralor General de la República bajo García Meza. Integrante y portavoz de los GOA.
Vaca, Oscar Román	Presidente del comité Pro Santa Cruz bajo Bánzer. Ministro de Salud bajo Pereda. Prefecto de Santa Cruz bajo García Meza. Terrorista.
Vacaflor, Juan	Teniente Coronel. Ex jefe del SIE. Jefe del GOESP.
Vaca Díez de Ortiz, Tatiana	Del FBJ. Apresada en Brasil.
Valdivia, Alberto	Oficial del Ejército.

Valdivia, Alfonso	Catedrático de Metalurgia en la UMSA.
Valenzuela de Alvarez, Marina .	Informante. Cochabamba.
Valverde Barbery, Carlos	Organizador de los grupos de choque de FSB. Terrorista. Ministro de Salud bajo Bánzer. Jefe de grupo en Santa Cruz.
Van de Zande, Róger	Mercenario belga. Del grupo de Schramme.
Van de Zande, N. (a) «Tigre»	Mercenario belga, hijo del anterior. Del SES. Torturador.
Van Ingelgom, Álbort	Mercenario belga. Ex oficial de las Tropas de Asalto nazis. Del grupo de Schramme.
Vargas, Willy	Cochabamba.
Vázquez, Beatriz	De la División de Bienestar de la UMSA.
Velarde E., Percy	Torturador. La Paz.
Velázquez Paz, Carlos .	Supervisor de Escuelas Rurales. Torturador. Cochabamba
Velázquez, Nancy R. de	Esposa del anterior.
Vildoso, Franklin	Informante. La Paz.
Vollmer, Carsten	Mercenario alemán del FBJ. Ex miembro de la Legión Extranjera.
Valterkirche, Wolfgang	Mercenario austríaco del FBJ. Apresado en Brasil
Zambrana, Jorge	Aeropuerto de Santa Cruz.
Zanabria Pérez, Félix .	Guardaespalda del Mayor Nelo Montero
Zegarra, Walter	Notario en Quillacollo.
Zuna, Humberto	Informante. Huanuni.

PRINCIPALES JEFES Y OFICIALES DE LAS FUERZAS ARMADAS CON PODER DE MANDO SOBRE LOS PARAMILITARES

Principales Jefes y oficiales de las Fuerzas Armadas con poder de mando sobre los Paramilitares	
1. Coronel Luis Arce Gómez.	Ex jefe del Dep. II EMGE. Ex ministro del Interior. Ex director del Colegio Militar. Director de la Escuela de Inteligencia Militar.
2. Coronel Faustino Rico Toro	Ex ministro del Interior. Ex jefe del Dep. II EMGE. Jefe de la Casa Militar de García Meza. Director del Colegio Militar.
3. Coronel Freddy Quiroga	Ex jefe del SIE. Jefe del SES, luego del DIE.
4. Coronel Carlos Rodrigo Lea Plaza	Jefe del Dep. III EMGE y del COC.
5. Coronel Rafael Loayza .	Funcionario permanente del Min. Interior

6. Coronel David Fernández Viscarra	Jefe de la Sección de Inteligencia de la Fuerza Aérea.
7. General Natalio Morales Mosquera	Comandante de la Fuerza Aérea. Integrante del COC.
8. Capitán Hinojosa .	Subjefe del SES, luego del DIE
9. Coronel Carlos Mena Burgos .	Ex jefe de Inteligencia del Min. Interior. Ex ministro del Interior
10. Teniente Coronel Juan Vacaflor .	Ex jefe del SIE. Jefe del GOESP
11. Coronel Carlos Casso Michel .	Jefe de Inteligencia del Min. Interior
12. Capitán Montaña	Del SES.
13. Capitán Saravia	Del SES.
14. Teniente Pizarroso	Del SES.
15. Capitán Weymer Muñoz Torres	Del Dep.II EMGE.
16. Capitán Germán Puyol	Del Dep.II EMGE.
17. Capitán Rudy Landívar	Ex coordinador del Pacto Militar-Campesino.
18. Mayor Nelo Montero	Coordinador del Pacto Militar-Campesino.
19. Mayor Daniel Clavijo	Coordinador de grupos campesinos.
AAA = Alianza Anticomunista Argentina o «Triple A». COC = Comando de Operaciones Conjuntas. Dep. II EMGE = Departamento II (inteligencia) del Estado Mayor General del Ejército. Dep. III = Departamento II (Operaciones). DID = Dirección de Investigación Departamental DIE = Dirección de Inteligencia del Estado. DIN = Dirección de Investigación Nacional. DOP = Departamento de Orden Político. ESMA = Escuela de Mecánica de la Armada. FBJ = Frente Bolivia Joven. FSB = Falange Socialista Boliviana. GEC = Grupo Especial de Comando. GOA = Grupos Operacionales de Apoyo. GOESP = Grupo de Operaciones Especiales. OAS = Organisation Armée Secrète SES = Servicio Especial de Seguridad. SIE = Servicio de Inteligencia del Estado. UMSA = Universidad Mayor de San Andrés, de La Paz. Min. Interior = Ministerio de Interior.	

ANEXOS

La coca
Estadística de la producción de coca en Bolivia
El coqueo
Los efectos fisiológicos del coqueo
La cocaína
Las drogas
La drogadicción
Del "Vin Mariani" a la Coca-Cola
Datos básicos sobre el mercado de la cocaína
Drogas decomisadas en todo el mundo (1947 y 1980)
Narcotraficantes y apresamientos

Narcotráfico: Dos casos elocuentes
 Asesores Argentinos
 La inestabilidad política de Bolivia
 Periodistas apresados al tratar de entrevistar a Altmann
 La secta de Sun Myung Moon
 La cocaína en Europa: el «Cocaine-Express»
 La droga de la moda y de la muerte
 Los herbicidas de la muerte
 La política ambigua de EE.UU

La Coca

La coca es un arbusto que exige bastantes cuidados. Es de clima amazónico, pero sólo rinde cosechas de buena calidad entre los 1.000 y 2.000 metros de altura sobre el nivel del mar; por debajo de estas alturas, la exuberancia de su propia vegetación disminuye la riqueza de sus hojas, pero también necesita sombra.

Por estas características, la coca ha sido cultivada tradicionalmente sólo en las cabeceras de valle de los primeros contrafuertes al Este de la cordillera oriental de los Andes, denominados «yungas»; más precisamente, en la franja que se extiende entre las ciudades de La Paz (Bolivia) y el Cuzco (Perú): los Yungas, Larecaja, Carabaya, Paucartambo, Vilcabamba, etc. La conformación del terreno, sumamente quebrado e inclinado, ha obligado a cavar una especie de «andenes», encareciendo mucho la explotación. En cambio, en la región de El Chapare (Bolivia) no existe ese problema, pues el terreno es mucho más llano.

El arbusto se multiplica por medio de su semilla. Esta se siembra en almácigo, donde la plantita vive un año. Pasado éste, se trasplanta a su lugar de crecimiento definitivo. Su ciclo vital puede alcanzar los 40 o más años, pero su producción principal tiene lugar entre los 4 y los 20 años. La hoja del arbusto se cosecha entre tres y cuatro veces al año. Cada cosecha recibe el nombre de «mita» (turno de trabajo) y suele tener una duración de 40 a 50 días.

Pero no basta con cosechar la hoja de la planta. Inmediatamente después hay que tenerla toda una noche bajo techo, luego extenderla durante tres días al aire libre, cuidando de removerla cada día para que reciba los rayos solares por ambos lados. Al cabo de los tres días y antes de recogerla es preciso humedecerla para evitar que se quiebre en el momento de encestarla. Sólo después de todas estas minuciosas operaciones se la puede meter en cestos de junco (como se hacía durante la Colonia y el siglo pasado) o en «tambores», que son unos mazos trenzados de hoja de plátano, con una capacidad de 60 libras cada uno ([u](#)).

Una vez embalada, la coca puede conservarse en buen estado durante todo un año en un ambiente seco como es el clima del Altiplano andino.

Estadística de la producción de Coca en Bolivia

Año	Cestos	Tm (u)	Fuente Especial
A) Epoca Colonial			
1548	17.190	139	
ca. 1798	375.000 (mín)	3.037	
	450.000 (máx)	3.641	
B) Epoca republicana			
1832	400.000	3.240	D'Orbigny
1845	441.927	3.579	
1868/69	238.593	1.935	
1882/1883	228.431	1.850	
1923		5.000	SPY
1935		3.000	Morales
1937		7.335	Censo Agropecuario

1944		4.651	
1945		4.830	Meneses
1950		4.830	Censo Agropecuario
1955	240.556	1.948	
1958		3.287	Aduana de La Paz
C) Epoca estadística mundial (2)			
1960		3.638	
1963		4.800	Muñoz Reyes
1965		5.515	INE
1966		5.276	
1967		6.460	INE
1968		4.220	INE
1969		4.860	
1970		6.000	INE
1971		6.800	INE
1972		8.818	South
1973		9.400	INE
1974		12.015	South
1975		11.800	INE
1976		6.440	
1977		15.600	
1978		15.410	PRODES
		19.500	
		25.248	DNSCP

Notas:

(1) Para la equivalencia de los cestos en toneladas métricas se calcula el peso de cada cesto en 18 libras y la libra en 450 gramos.

(2) Esta serie ha sido confeccionada en base a los datos recopilados anualmente por los organismos especializados de la ONU; cuando había a disposición cifras superiores- procedentes de estudios realizados en Bolivia, se han preferido éstas.

El Coqueo

El verbo «masticar» que se emplea en castellano no es el más apropiado para explicar en qué consiste el «coqueo»; en Bolivia se utiliza la expresión aymara de «acullicar» para referirse a la acción de consumir la coca masticándola.

El «acullico» se realiza de la siguiente manera. Las hojas de coca son extraídas de una pequeña bolsa -denominada «chuspa», tejida en multicolor filigrana, que los indígenas suelen llevar a la altura del pecho, pendiendo del cuello- y depositadas en el fondo de la boca, entre la mejilla y las encías. Se le añade una sustancia alcalina denominada «llujta» o «tocra», extraída de cenizas vegetales, que sirve para liberar los alcaloides de las hojas de coca y acelerar su

absorción por la sangre. Las hojas no son, pues, propiamente masticadas, sino sólo mezcladas con la saliva, hasta que hayan desprendido todo su «jugo».

Los 45 minutos durante los cuales una bolita de coca es conservada en la boca constituyen una unidad de medida del tiempo que se designa con el nombre de «cocada». Antigüamente la cocada servía también para medir la distancia: 3 kilómetros, correspondientes al trecho que era capaz de caminar un indígena por terreno llano y con carga; dos kilómetros, si era por montaña.

Según un análisis nutricional de las hojas de coca llevado a cabo por el Museo Botánico de la Universidad de Harvard (Estados Unidos), la ingestión de 100 gr. de coca puede satisfacer la cantidad diaria que un organismo adulto necesita en calcio, hierro, fósforo, y en las vitaminas A, B2 y E. En 1977, Timothy Plowmann, de la misma universidad, demostró que 100 gr. de coca proporcionan 305 calorías, 19 gr. de proteínas, entre 3,3 y 5 gr. de grasas, 46 gr. de hidratos de carbono, 1,5 gr. de calcio, 1,4 gr. de vitamina C y 11.000 UI de vitamina A. Entre 50 productos vegetales latinoamericanos, la coca aparece a la cabeza en contenido de esas sustancias nutritivas.

El médico boliviano Cecilio Oliva subraya que entre los que coquean no se da la diabetes, ni la poligibulia (el aumento de glóbulos rojos que produce la altura), ni las caries dentales, ni la calvicie ni el cáncer. Por otra parte, el coqueo aumenta la glucosa en la sangre, disminuyendo así la sensación de hambre.

Los efectos fisiológicos del Coqueo

APETITO Aumenta 115 Disminuye 27	CIRCULACION Estimulada 107 Deprimida 0	CORAZON Fortalecido 117 Irregular 3
RESPIRACION Más honda 14 Atenuada 40 Disminuida 5	TEMPERATURA Aumentada 14 Disminuida 3 No influye 3	PRESION SANGUINEA Elevada 88 Disminuida 2
FUNCION SEXUAL Aumentada 60 Disminuida 4	MUSCULATURA Fortalecida 36 Debilitada 1	SUEÑO Mejorado 58 Disminuido 30
NERVIOS Estimulados 109 Sedativo 21	ACTIVIDAD MENTAL Estimulada 109 Deprimida 3	FUNCION DIGESTIVA Mejorada 104 Igual 8
INTESTINOS Constipación 6 Igual 17	NUTRICION Mejorada 85 Igual 4	VISION Aumentada 21 Disminuida 5

Resultados de una encuesta realizada en 1987 por el médico norteamericano William Golden Mortimer entre 369 médicos que dijeron haber recurrido a la coca para sus pacientes. Se reproduce el número de respuestas obtenido a cada una de las preguntas, tal como aparecieron publicadas en "Perú: A history of Coca", Nueva York, 1901 8reeditado en 1974)

La Cocaína

La cocaína es un alcaloide que se extrae de la hija de coca, cuya fórmula química es $C_{17}H_{21}NO_4$. En el argot de sus adictos se la conoce también bajo diversas denominaciones, tales como «nieve» o «pichicata» en Bolivia, «tía blanca» en Perú, «perica» en Colombia, «girl» o «lady» en Estados Unidos, «soplo», «pitazo», «coke» o simplemente «la C».

Su aislamiento en laboratorio y su identificación como el principal de los numerosos alcaloides que contiene la coca tuvo lugar en Alemania entre 1855 y 1862, aunque el principio básico de la producción de lo que hoy se denomina «pasta» de coca (que no es otra cosa que una mezcla de alcaloides compuesta de dos tercios de cocaína) ya era conocido por los guajiros colombianos desde mucho antes.

El descubrimiento de la cocaína fue resultado de una época en que en Europa se comenzaba a tomar en serio las virtudes de la hoja de coca, gracias sobre todo a la obra del neurólogo Paolo Mantegazza «Sulie virtio igieniche e medicinale della Coca» (1859). Sin embargo, durante mucho tiempo aún se siguió hablando de la coca cuando se pensaba en la cocaína, confundiendo ambos términos o atribuyendo a la cocaína todas las propiedades conocidas de la coca (como si fuese su «esencia» o su único principio activo), por lo que al descubrimiento no siguió la profundización del conocimiento de sus propiedades específicas y de su utilidad.

Fue la aplicación de las propiedades anestésicas de la cocaína a la cirugía (lo que permitió la invención de la anestesia local) por parte de Karl Koller, en 1884, y la publicación, el mismo año, del ensayo «Ueber Coca» del más tarde famoso creador del psicoanálisis Sigmund Freud lo que despertó el primer interés general por la droga.

Freud tampoco distinguía la coca de la cocaína y las recomendaba indistintamente contra todo tipo de enfermedades, especialmente para aliviar la tensión nerviosa, la fatiga y los malestares físicos que entonces se designaban con el nombre de «neurastenia». Aunque abandonó sus investigaciones sobre la cocaína en 1887, Freud dejó claramente sentado que debía ser considerada como un estimulante del tipo de la cafeína y no como un narcótico del tipo del opio y el cannabis (Lester Grinspoon y James B. Bakalar, en «Cocaine: A Drug and its Social Evolution», Harvard, 1977).

Durante la última década del siglo XIX, el multifacético uso terapéutico del extracto de coca empezó a ser desplazado (en buena medida, bajo los auspicios de la empresa farmacéutica norteamericana Parke Davis) por el consumo de cocaína pura con fines recreativos en forma de polvo para inhalar. Este tipo de uso de la droga se extendió rápidamente entre todas las clases de la sociedad, tanto en Estados Unidos como en Europa, sobre todo en el submundo de la llamada «alta sociedad» y del mundo artístico.

Con el fin de contribuir a la necesaria diferenciación entre la coca y la cocaína y defender las virtudes del coqueo frente a las nacientes acusaciones de «cocainismo», entendido como una nueva forma de toxicomanía, el médico norteamericano William Golden Mortimer se dedicó a sistematizar todos los conocimientos existentes hasta entonces acerca de la coca y, en 1901, publicó el estudio más completo que se haya escrito sobre ella, «Perú: A History of Coca» (reeditado en 1974 con el título de «History of Coca: 'The Divine Plant' of the Incas»).

No obstante, a pesar de los descubrimientos de Freud y de las aportaciones de Mortimer, la ignorancia y los prejuicios dominantes (derivados del desprecio colonialista hacia la hoja de coca y su uso por parte de los habitantes nativos de los Andes americanos) terminaron imponiéndose: pronto acabó la cocaína siendo reducida a la misma categoría que la morfina y la heroína y, por tanto, clasificada como una droga tanto o más peligrosa que las opiáceas.

A partir de 1906, el gobierno de Estados Unidos emprendió una escalada legislativa en contra del uso de la cocaína. Los países europeos adoptaron legislaciones análogas, en parte debido a las presiones ejercidas por los Estados Unidos. En 1922, el Congreso norteamericano definió oficialmente a la cocaína como un narcótico y prohibió su importación, así como la de las hojas de coca. En virtud de su ilegalización, tanto el consumo de la cocaína como el interés científico-médico por ella declinaron casi completamente desde entonces hasta el final de los años sesenta.

Las Drogas

Está claro que las grandes potencias no se han preocupado por la marea de las drogas más que desde el momento en que se han visto inundadas por ella.

De hecho, el tráfico internacional de las drogas es un fenómeno tan viejo como el colonialismo europeo y se desarrolló bajo la protección de banderas como la inglesa, holandesa y portuguesa.

Así, la «Compañía de las Indias Orientales», creada en 1599, se dedicó a fomentar, sin escrúpulo alguno, la producción, el comercio y el consumo de opio en la India, droga sobre la cual se arrogó el monopolio mundial y de la cual extrajo enormes ganancias. Al comienzo, la droga estaba destinada al propio país productor, pero llegó un momento en que la producción sobrepasó al consumo interno e incitó a los traficantes a buscar nuevos mercados.

China fue la siguiente víctima de la expansión del narcocolonialismo. Sin embargo, la inundación corruptora del mercado chino terminó provocando una legítima reacción de defensa: las dos «Guerras del Opio» (1839 y 1857/58) contra los ocupantes ingleses. Si bien la primera constituyó un triunfo de la dignidad nacional china (en Cantón se incineraron 1.500 Tm de la droga), en la segunda ésta sucumbió debido a una serie de claudicaciones de funestas consecuencias, en 1870, por ejemplo, los victoriosos intereses mercantiles ingleses, franceses y norteamericanos envenenaban a la población china a razón de 7.000 Tm anuales de opio.

Pero los intereses económicos creados por el tráfico del opio ya no se podían parar. El afán del lucro los llevó a la búsqueda de nuevos mercados. Fue así como se fue extendiendo el hábito de la drogadicción por toda el Asia, el mundo árabe, hasta llegar a Europa. Y así como cada vez más iban aumentando los volúmenes de producción y distribución de la droga, también se iban tecnificando los procedimientos de transformación de la materia prima original.

Así fueron surgiendo derivados del opio como la morfina y la heroína (que es éter diacético de morfina) o la codeína, la tabaína y la papaverina; o nuevas drogas, como la marihuana, el hachís y la grifas extraídas de la planta denominada «cannabis sativa», la mesalina de la planta de mescal, el LSD o ácido lisérgico y la cocaína de la planta de la coca.

Fue entonces, cuando la marea de las drogas ya no se podía parar, que los gobiernos de las potencias coloniales se empezaron a preocupar por controlar el fenómeno y, en 1909, crearon una Comisión del Opio en Shanghai hasta llegar, en 1931, a la suscripción, en el marco de la Sociedad de las Naciones, de la primera Convención de Limitación en la Fabricación y Distribución de Estupefacientes.

La Drogadicción

Tanto el informe de La Guardia de los EE. UU. como el informe Callaghan de Gran Bretaña sostienen que la nocividad de las drogas elaboradas a partir de la planta denominada «cannabis», es decir, el hachís y la marihuana, no es peor que la del alcohol o la del tabaco. Es precisamente por eso que han alcanzado la gran difusión que tienen en todo el mundo. Ambos informes sostienen también que no es cierto que el consumo de estas drogas (denominadas «blandas»,

dentro de las cuales se sitúa también la cocaína) conduzca necesariamente al consumo de las drogas «duras», como son la heroína o la morfina.

La nocividad de las drogas suele ser enfocada desde tres puntos de vista: el de su capacidad de crear dependencia, el de su potencialidad de generar abuso y el de sus posibilidades terapéuticas. El caso más sorprendente es el del alcohol y el tabaco: tienen capacidad adictiva, generan frecuentemente abuso y no tienen ninguna utilidad terapéutica. Y, sin embargo... ¡son tolerados por la sociedad!

Es verdad que cada individuo se comporta respecto a cada droga de forma generalmente diferente, de tal modo que no es fácil predecir cuál será el resultado del consumo en cada caso. Pero la peligrosidad del consumo de una droga determinada también tiene que ver con su tolerancia o no por parte de las normas sociales.

Así, por ejemplo, la represión penal indiscriminada es, sin duda, una de las causas de la delincuencia y de la consiguiente violencia a las que suele estar asociado el consumo de drogas. El toxicómano, para procurarse la cantidad de dinero que necesita para adquirir la sustancia prohibida, fácilmente puede caer en las redes del narcotráfico, convirtiéndose en revendedor o incluso en traficante y hasta puede verse impulsado a recurrir, alguna vez, al robo o a la prostitución.

También es verdad que, cuando una droga tolerada por la tradición sale de su contexto y, por ejemplo, se exporta, los nuevos consumidores. Por lo general, son más proclives al abuso y los daños son más notorios. Así ha sucedido cuando negociantes sin escrúpulos han introducido grandes cantidades de alcohol en grupos indígenas que no lo conocían. Lo cual no quita que, en los países llamados «desarrollados», el alcoholismo se haya convertido en la cuarta causa de la mortalidad (después de las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y los accidentes). Y, sin embargo, su consumo aún no está legislado en la mayor parte del mundo.

Del " Vin Mariani " a la Coca-Cola

Angelo Mariani, químico corso y comerciante avisado, fue el primero en hacer de la cocaína un gran negocio. En su laboratorio-invernadero de París llegó a cultivar plantas de coca. En 1863 lanzó al mercado un vino hecho a base de extracto de coca, que bautizó «Vin Mariani». En poco tiempo, esta bebida se convirtió en uno de los productos farmacéuticos de prescripción médica más populares de la época.

Mariani escribió varios artículos propagandísticos de sus productos (elixir, pastas, pastillas, té, todo a base de coca), el más difundido de los cuales fue «La coca y sus aplicaciones terapéuticas», en 1880. Su vino ganó premios y medallas, en Inglaterra fue declarado «el vino de los atletas», en Francia era considerado como «el tensor por excelencia de las cuerdas vocales». Entre sus clientes figuraban conspicuos personajes, tales como los Papas León XIII y Pío X, los escritores Emilio Zola, Julio Verne y Alejandro Dumas, el científico Tomás A. Edison, el compositor Ulysses Grant, el zar de Rusia, los reyes de España, Grecia, Noruega y Suecia, el Príncipe de Gales y numerosos artistas y gentes del mundo del cine y del teatro.

En la misma época, la empresa farmacéutica norteamericana Parke Davis vendía cocaína bajo forma de cigarrillos, en bebida alcohólica llamada «Coca Cordial», así como en aerosoles, ungüentos, en barritas y en soluciones de sal a punto para ser inyectadas.

Es muy probable que la popular Coca-Cola sea, en su origen, una mala imitación del vino Mariani. Su inventor es un farmacéutico de Georgia (Estados Unidos), John Sinyth Pemberton, que lanzó su bebida en 1895 como medicamento contra el dolor de cabeza y como estimulante. Su «secreto» radicaba en que la nueva bebida contenía, aunque en ínfima dosis, cocaína. En 1886, Pemberton retiró de ella el alcohol y le añadió nuez de cola (que contiene cafeína) y ciertas esencias agrias. En 1888 sustituyó el agua ordinaria por agua gaseosa.

Fue en 1891 cuando Griggs Candler, otro farmacéutico, compró todos los derechos relacionados con la Coca-Cola y, al año siguiente, fundó la actual empresa multinacional. En 1906, la cocaína empezó a ser ilegalizada en los Estados Unidos y los administradores de la «Coca-Cola Company», como buenos hombres de negocios, se apresuraron a retirarla de la fórmula secreta de la Coca-Cola y la reemplazaron con cafeína. Sin embargo, en 1909 aún existían en el mercado 69 imitaciones de la Coca-Cola, conteniendo todas cocaína.

Datos básicos sobre el mercado de la cocaína

El día 13 de julio de 1981 se realizó en Lima una Conferencia de Ministros de Justicia y Delegados de 22 países para elaborar un Convenio destinado a combatir el tráfico internacional de las drogas. En este importante encuentro se dieron los siguientes datos.

- Los tres países latinoamericanos más implicados en la comercialización y el tráfico de la droga son Perú, Bolivia y Colombia.
- Entre Bolivia y Perú producen el 90 % de la hoja de coca del mundo.
- A Bolivia le corresponde el 60 % de esa producción.
- Colombia, a través de sus laboratorios clandestinos, es el mayor productor de clorhidrato de cocaína.
- La demanda interna boliviana de hoja de coca es de 15.000 toneladas anuales.
- La producción boliviana de hoja de coca en los últimos años alcanza a unas 80.000 toneladas métricas.

- El año 1980 se introdujeron en los Estados Unidos unas 40 toneladas de clorhidrato de cocaína.
- En el mercado primario, los 500 kilos de hoja de coca se cotizan a unos 1.200 dólares.
- Un kilo de clorhidrato de cocaína, cuando llega a los Estados Unidos, vale 60.000 dólares.
- En la reventa, ese kilo se convierte en 8 kilos a través de múltiples adulteraciones, llegando a valer hasta 500.000 dólares.
- El valor de las ventas totales de cocaína en las calles de las ciudades de los Estados Unidos supuso un gasto de unos 30.000 millones de dólares.

De estos datos se desprenden dos conclusiones importantes:

1. Que en realidad el dinero que sale de los Estados Unidos para pagar la cocaína es de unos 2.400 millones de dólares, quedando en manos de los grupos mafiosos de ese país la fabulosa cifra de 27.600 millones de dólares. Es, por lo tanto, un problema prioritario interno de los Estados Unidos.
2. En todo este proceso, mientras la cocaína va perdiendo pureza aumenta, sin embargo, su valor. El problema de la adulteración y el de la subida exorbitante de los precios también son aspectos netamente internos de los Estados Unidos.

Drogas decomisadas en todo el mundo (datos comparativos entre los años 1947 y 1980)

	Año 1947	Año 1980
Opio	41.845 Kg	51.785 Kg.
Morfina	264 Kg.	1.487 Kg
Heroína	187 Kg.	2.511 Kg
Otros opiáceos (dosis)	148.033 Ds.	452.577 Ds.
Cocaína	41 Kg	11.967 Kg.
Cannabis (hierba)	2.355.354	Kg. 5.521.296 Kg.
Cannabis (resina)	45.877 Kg.	140.445 Kg.
Cannabis (líquida)	336 Kg	1.025 Kg
Estupefacientes sintéticos	148.000 Ds	241.798 Ds.
Estimulantes	5.775.978 Ds.	30.628.662 Ds.
Depresivos	849.960 Ds	25.291.507 Ds.
LSD	13 7.3 10 Ds.	284.504 Ds
Otros alucinógenos	3.845.020 Ds.	7.785.830 Ds.

Fuente: Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas 1981.

Narcotraficantes y apresamientos

Analizando las listas de las personas que están presas en las cárceles de Bolivia por tráfico, por elaboración o por consumo de cocaína se llega a las siguientes conclusiones:

1. La mayoría de los detenidos son hombres y mujeres de condición muy humilde, meros colaboradores o peones en la elaboración o el transporte (generalmente a pie) de la pasta básica.
2. La mayor parte de las señoritas presas lo están por haber colaborado personalmente en el tráfico internacional de cocaína. La mayoría lo ha hecho por necesidad económica, ya que se les pagaba 5.000 dólares por cada viaje.

3. Es muy alto el número de extranjeros presos en Bolivia, correspondiendo el número más elevado a los ciudadanos de los Estados Unidos y en segundo lugar a los de Colombia.
4. Entre los detenidos se puede decir que no se encuentra ninguno de los grandes. «Los peces gordos», tanto militares como civiles, siguen «gozando de buena salud». De los tres importantes que permanecen detenidos, dos están en Estados Unidos (Alfredo Gutiérrez y Marcelo Ibáñez) y uno en Suiza (Roberto Suárez Levi, hijo).
5. La palabra «prófugo» que emplean los Servicios de Seguridad bolivianos cuando se refieren a los narcotraficantes que no están presos, en realidad significa que siguen gozando de total libertad, ya que no se ha abierto proceso contra ellos.

Los asesores argentinos

La Paz, 15 de enero de 1982.- Jefes militares de Bolivia y Argentina afirmaron en La Paz que proseguirán luchando unidos contra el extremismo internacional, al tiempo que enunciaban críticas al proceso democrático que vivió Bolivia en 1979 y a los «guerrilleros de salón», entre los que se mencionó a los editorialistas.

Los planteamientos fueron formulados durante la condecoración a tres oficiales de la Misión Militar argentina que prestaron asesoramiento al Ejército boliviano. Se trata de los tenientes coroneles Julio César Durand, Benjamín Cristoroforetti y Osvaldo Guarnaccia.

Durand manifestó que «hoy como ayer, un puñado de soldados argentinos, integrando el Ejército boliviano, lucha por preservar la libertad que ambos países obtuvieron en los albores de la liberación americana». Luego hizo un balance histórico de esa tarea y reveló que «no hace muchos meses, en el proceso político boliviano, en el que siglas, frentes, etc., pugnar por alcanzar el poder político, se debatieron intereses internacionales, directamente en convivencia con la delincuencia ideológica». (Tomado de «El Diario», de La Paz, reproducido en «Resumen de la actualidad argentina».)

Narcotráfico: Dos casos elocuentes

México, 9 de septiembre de 1982 (IPS). Elementos del ejército y de la policía capturaron en el sur del país, luego de un enfrentamiento a tiros, una banda de cinco traficantes de droga que transportaban a Estados Unidos 343 kilogramos de cocaína pura procedente de Colombia, se informó hoy aquí.

El contrabando, el más grande que se ha registrado en México, venía en una avioneta bimotora «Cesna» con matrícula norteamericana, que fue sorprendida por el ejército cuando sus tripulantes la reabastecían de combustible en una pista clandestina ubicada en las cercanías de la ciudad de Palenque, en el Estado sureño de Chiapas.

Según un portavoz policial, el grupo de contrabandistas está compuesto por Richard Lyman Pitt, ex piloto de la Fuerza Aérea estadounidense, Michael Joseph Culler, James Scott y Gayla Stieffel, todos norteamericanos y aviadores y, los tres primeros, ex combatientes en Vietnam. El quinto es Alfonso Santander, de nacionalidad mexicana y residente en Miami.

La droga incautada tiene un valor aproximado de 490 millones de dólares en el mercado negro de Estados Unidos, según las estimaciones policiales.

Durante su confesión ante la policía mexicana, el piloto Pitt indicó que éste era el tercer viaje que realizaba con droga procedente de Colombia, utilizando a México como trampolín. El primero lo efectuó en enero pasado, cuando transportó 174 kilogramos de cocaína, por la cual le pagaron 174 mil dólares.

Durante el segundo viaje transportó 120 kilogramos e igual que en anterior hizo una escala técnica en una pista clandestina en el Estado oriental de Quintana Roo.

Según la versión policial, Pitt reveló que había efectuado estos viajes por cuenta de un grupo de contrabandistas de droga, cuya sede central está en Miami y entre los cuales mencionó a Angel García, un cubano nacionalizado norteamericano, quien le contrató personalmente.

La policía mexicana añadió, a su vez, los nombres de los colombianos César Romero y Kick Rodríguez y al jamaiquino Jaime Ramírez, quienes presumiblemente radican en Miami, como miembros de esta banda internacional de narcotraficantes.

Los cinco detenidos fueron puestos hoy a disposición de un juzgado criminal de esta capital, que los enjuiciará por delitos contra la salud y contrabando, señalaron los portavoces policiales.

Río de Janeiro, 30 de septiembre de 1982 (IPS). La policía federal anunció hoy la captura de la mayor partida de narcóticos de que se tenga noticia en el país: 100 kilos de cocaína pura, valuados en casi 100 millones de dólares, interceptados en la localidad de Cerqueira César, Estado de San Pablo.

La droga era transportada en un avión bimotor «Seneca», procedente de Corumbá, en la frontera boliviana. Se señaló que el responsable del contrabando es el Cónsul de Bolivia en Corumbá, Rubén Julio Saucedo, de 33 años.

Saucedo fue sorprendido por la policía en la casa de una hacienda de Cerqueira César cuando cargaba un saco de cuatro kilos de cocaína. En el interior de la casa fueron encontrados otros 24 sacos, que acababan de ser descargados del avión.

La policía conjetura que la banda de Saucedo ya había conseguido con anterioridad pasar varias partidas de cocaína y todo indica que la última vez que lo hicieron lograron introducir casi 150 kilos de cocaína pura.

Los traficantes, que comenzaron a prestar testimonio hoy, confesaron que el destino final del cargamento de cocaína era Estados Unidos, donde Saucedo tiene varios contactos. El Cónsul, dijo la policía brasileña, es hijo de Rubén Julio Castro, quien desempeñó un alto cargo en el Ministerio de Gobierno de Bolivia durante la presidencia del general Hugo Bánzer.

La inestabilidad política de Bolivia

Una de las causas, si no la principal, de la inestabilidad política de Bolivia es, a todas luces, el tristemente célebre fenómeno del golpismo militar. La imagen pública de Bolivia aparece en todo el mundo indisolublemente asociada a la del golpe militar; como si fuese una enfermedad endémica, como si fuese un producto típico, como si perteneciese al folklore nacional. Así como «Bolivia» y «cocaína» aparecen inseparables en la memoria de la opinión pública internacional, también «Bolivia» y «golpismo» suelen jugar el rol de sinónimos. En las enciclopedias y atlas mundiales, Bolivia figura batiendo todos los récords mundiales en frecuencia de golpes militares. En la ciencia política ya se ha acuñado el término de «bolivianización» de un proceso político.

Desde que las Fuerzas Armadas se apoderaron del Palacio de Gobierno el 4 de noviembre de 1964 (poniendo así fin a 12 años de gobiernos civiles populistas), o sea, desde hace 18 años, se han producido en Bolivia diecisiete cambios de gobierno, de los cuales nueve mediante golpes de Estados militares y cinco mediante «golpe dentro del golpe». En estos mismos 18 años, han pasado por el sillón presidencial nada menos que 16 generales, almirantes y coroneles, siendo el último de la lista (al cerrar esta edición) el General Guido Vildoso Calderón. Decididamente, las Fuerzas Armadas son un auténtico factor de inestabilidad política para Bolivia.

La conclusión anterior cobra aún más fuerza si se tiene en cuenta que, generalmente, el golpismo engendra el contragolpismo y que en el recuento anterior sólo figuran los golpes triunfantes. Un rápido vistazo a los últimos diez años pone en evidencia la gravedad del problema. En 1972, al año siguiente de haberse apoderado sangrientamente del gobierno, el General Bánzer tuvo que enfrentar la defección de su primer ministro del Interior, el Coronel Selich, el cual fue asesinado un año después tras dos intentos de desplazar a Bánzer. En 1974, éste logró resistir al levantamiento de los oficiales jóvenes, en junio, y a otro «putsch», en noviembre, después de lo cual consolidó su dictadura por el excepcional lapso de tres años.

En julio de 1978, una vez fracasado el proyecto banzerista de legitimar la dictadura mediante elecciones, el General Pereda arrebató el gobierno a Bánzer para intentar implantar un «banzerismo sin Bánzer» y es derrocado a su vez, en noviembre, por el General Padilla y los oficiales jóvenes, quienes convocan a nuevas elecciones generales. En octubre de 1979, sólo dos meses después de la instalación del primer gobierno civil democráticamente elegido tras 15 años de gobiernos militares, una asonada militar exige el retorno de los militares al Palacio de Gobierno. Al mes siguiente, las FF.AA. derrocan al presidente constitucional Walter Guevara Arze y apoyan el sangriento e infructuoso intento del Coronel Natusch de aplastar la democracia.

El 17 de julio de 1980, otro golpe sangriento pone fin definitivamente a la efímera «apertura democrática», destituye a la presidenta interina Lidia Gueiler Tejada y coloca en la Presidencia de la República al General García Meza. Un motín en el Colegio Militar, en marzo, dos intentonas del Coronel Lanza en Cochabamba, en mayo, y el levantamiento de los Generales Cayoja y Añez, en junio, preceden, a lo largo de un primer semestre de 1981 marcado por la desintegración de la unidad de las FF.AA., la sublevación de los Generales Natusch y Añez, en agosto, que finalmente desplaza a García Meza. El triunvirato que lo reemplaza sólo dura un mes: en septiembre, un «reajuste» interno se salda con la promoción del General Torrelío a la Presidencia. En julio de 1982, otra «operación» semejante sustituye a Torrelío con Vildoso... hasta el próximo golpe.

Periodistas apresados al tratar de entrevistar a Altmann

L.P.25.AP.- Un periodista y una fotógrafa del «New York Times» fueron apresados el día 24 de agosto de 1981 durante cuatro horas por agentes de Seguridad del Gobierno de Bolivia cuando intentaban entrevistar a Klaus Altmann, un ex oficial nazi de las SS, en Cochabamba.

El apresamiento tuvo lugar después que la señora Altmann (según oficiales del Servicio de Seguridad) los llamara por teléfono.

«Nosotros vimos al señor Altmann asomando a una ventana de su residencia», dijo la fotógrafa Marisabel Villasante de Schumacher, de Florida, y el periodista Peter McFarren, corresponsal de La Paz.

«Viajamos a Cochabamba con Edward Schumacher, director de la oficina del 'New York Times', en Buenos Aires. El volvió a La Paz ayer por la mañana, dejándonos instrucciones para entrevistar al señor Klaus Altmann-Barbi», explicaron a The Associated Press.

«Estuvimos esperando fuera de la casa unos 45 minutos, llamando a la puerta cada cierto tiempo, cuando fuimos detenidos. No se nos acusó de violar ninguna ley. Nuestros interrogadores dijeron solamente que habíamos sido 'imprudentes'. La policía local no intervino para nada», dijeron.

Según la señora de Schumacher y McFarren, fueron llevados a la Sección Segunda de la Séptima División de Ejército, en un vehículo del Servicio Especial de Seguridad (SES), escoltado por otro vehículo de la Policía Militar.

«Fuimos interrogados separadamente y amenazados físicamente. Se nos dijo incluso, que tendríamos que permanecer ahí por varios días. Pero en ningún momento sufrimos abusos físicos», añadieron.

Ambos fueron liberados cuatro horas después de su apresamiento.

Edward Schumacher presentó una denuncia ante la Cancillería boliviana y en la Secretaría de Información de la Presidencia, donde se le aseguró que el incidente sería investigado.

Klaus Altmann o Klaus Barbi es un ex oficial nazi de la SS de Hitler, buscado actualmente por los gobiernos de Francia y de Alemania Federal, acusado de numerosos crímenes de guerra, (Agencia AP. «Presencia», 26-VIII-81.)

La secta de Sun Myung Moon

El 4 de septiembre de 1981, el matutino «Los Tiempos», de Cochabamba, reveló que «la secta religioso-política del predicador Sun Myung Moon habría apoyado con la considerable suma de 5 millones de dólares el golpe de Estado del General García Meza». Más aún: días antes del golpe, el «visionario» Moon habría anunciado el inminente derrocamiento del gobierno constitucional de la presidenta Gueiler.

El segundo hombre en importancia dentro de la secta, el Coronel surcoreano Bo Hi Park, confirmó indirectamente lo anterior, pues fue el primer visitante extranjero que se apresuró en felicitar a García Meza tras el golpe. De regreso en los Estados Unidos, comentó: «Por fin el padre Moon va a tener un país y pondrá su trono en la ciudad más alta del mundo (...). Moon no quiere morir sin haber alcanzado la cumbre del poder en algún país y ha dado instrucciones a sus seguidores para que trabajen en ese sentido.»

¿Quién es Moon? La revista norteamericana «Psychology Today» caracteriza su ideología como «una mezcla de cristianismo pentecostal, misticismo asiático, anticomunismo y psicología pop». La secta ha encontrado abierta resistencia en muchas partes del mundo por utilizar técnicas para «controlar la mente». También es ostensible su afán por servirse de los medios de comunicación de masas.

La secta inició sus actividades en los Estados Unidos en 1973 bajo el nombre de «Asociación del Espíritu Santo para la Unificación de la Cristiandad Mundial», aunque se la conoce simplemente como «Iglesia de la Unificación». Lo que más llama su atención es su vertiginoso crecimiento económico. El seminario y la fastuosa mansión palaciega donde reside habitualmente Moon, en Tarry Town (Nueva York), están evaluados en 12 millones de dólares. También cuentan con grandes propiedades en la zona céntrica de Manhattan y en los Estados de Massachusetts y Alaska.

Publican dos diarios en los Estados Unidos, uno de ellos en castellano, el «Noticias del Mundo». En Uruguay iniciaron trámites para instalar un hotel de cinco estrellas, una estación de TV y dos radioemisoras. En Brasil también pretendían establecer una Universidad, pero fueron denunciados por someter a sus adeptos a entrenamiento militar en las cercanías de São Gabriel (Rio Grande do Sul).

He ahí otra de las fuentes de financiación del fascismo en Bolivia. ¿O será que la secta también se enriquece con el tráfico de drogas?

La Cocaína en Europa : El «Cocaine Express»

Las nuevas rutas del tráfico internacional de la cocaína tienen como principal escala de tránsito hacia Europa la capital española.

Según la información que actualmente maneja la Interpol, el 80% de la cocaína que llega desde Bolivia, Perú y Colombia, se distribuye a través del aeropuerto de Barajas, aduana que ofrece al traficante amplias posibilidades de introducir la droga, ya que no dispone del sistema de detección por radiografía. Debido a esto, el método más común para pasar la droga sin que sea descubierta es el propio cuerpo, introduciendo en el recto o en la vagina varios preservativos que van llenos de cocaína de alto grado de pureza.

El aeropuerto de Barajas tiene un promedio de unos 400 vuelos diarios, lo que supone un enorme trabajo de control. En el momento actual se está tramitando la adquisición del sistema de rayos X con el fin de detectar la droga introducida en el cuerpo.

Los organismos de Seguridad calculan que apenas cae en manos de la policía el 10% de la droga manejada por los narcotraficantes. La Customs and Excise Investigation Division, organismo internacional que controla toda la información sobre las aduanas europeas, calcula que por el aeropuerto de Barajas entran alrededor de 1.000 kilos de cocaína anualmente. La ruta clásica parte de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) o de Bogotá, para llegar hasta Barajas y desde ahí internarse en todo el mercado europeo. Entre los expertos, a esta ruta se la denomina «COCAINE-EXPRESS».

La Droga de la Moda y de la Muerte

Sólo en el año 1982 la cocaína causó, directa o indirectamente, la muerte de varios artistas famosos como los actores John Belushi y Patrick Dewaere y el cineasta Rainer Fassbinder.

De 1976 a estas fechas el número de muertos por abuso de la cocaína se ha cuadruplicado y se ha sextuplicado el número de internados por el uso indebido de esta droga. Según la revista «Fortune», entre los 500 productos más comercializados actualmente en el mundo la cocaína ocupa el 7.º lugar.

La cocaína, según los médicos especializados, crea una verdadera tempestad en el cerebro. Bajo su influencia el sistema nervioso se transforma en una especie de «central telefónica sobrecargada». El sistema nervioso no consigue controlar normalmente los impulsos e informaciones que le llegan y la persona queda sobreexcitada.

Después de tomar grandes dosis o de un consumo crónico, la cocaína puede acarrear problemas psicológicos o reacciones paranoicas. La euforia puede transformarse en profunda depresión.

Poco se sabe con respecto a las dosis. Ningún consumidor puede fijar su límite normal e ideal. Diez miligramos de cocaína (que es la dosis normal) pueden proporcionar todas las sensaciones deseadas, pero para los más sensibles, 30 miligramos pueden ser excesivos.

Los científicos han establecido que son mortales la dosis de 800 a 1.430 miligramos para el uso oral. En cuanto al uso por inyección puede llegar a ser fatal desde 100 miligramos hasta 2.500. En cuando al uso por inhalación nasal es mortal la dosis de 22 hasta 260 miligramos. («Der Spiegel», «Facetas», 15-VIII-82.)

Los Herbicidas de la Muerte

Paul Reutershan, ex sargento de la guerra del Vietnam, murió a la edad de 27 años de cáncer, meses después de haber vuelto desde el frente de batalla a los Estados Unidos. Antes de morir desató una polémica que creó en cierto momento un verdadero drama nacional al acusar públicamente de asesinato a la empresa multinacional DOW CHEMICAL y al gobierno de los Estados Unidos.

Argumento principal de la acusación: El cáncer que Paul padecía, así como el de muchos otros ex combatientes de la guerra del Vietnam habría sido provocado por la exposición prolongada de sus cuerpos a una sustancia química defoliante, fabricada por la Dow Chemical y que las tropas norteamericanas lanzaban sobre las selvas del Vietnam para arrasar con toda la vegetación. A este producto el Pentágono le asignó el nombre de código «AGENT ORANGE» («Agente Naranja»). Al morir Paul debía más de 40.000 dólares en cuentas a hospitales y médicos.

Entre 1962 y 1970 se destruyeron en Vietnam tres millones de hectáreas de selva. A este crimen ecológico se le denominó militarmente «OPERACION PLUTON». El «Agente Naranja», especie de hormonas sintéticas, destruyó totalmente millones de árboles y plantas, matando además toda la fauna de la región, con una rapidez impresionante. Pero la diseminación cancerígena no era menos nefasta para los agresores.

El «Agente Naranja» es una mezcla de dos sustancias químicas: el ácido triclorofinoxiacético con un subproducto llamado dioxina. La dioxina ha sido definida como «la más tóxica de todas las sustancias fabricadas por el hombre». (Doctor Barry Commoner.) La dioxina es un veneno tan poderoso que solamente 84 gramos colocados en el agua potable matarían instantáneamente a los 10 millones de habitantes de una gran ciudad. Es además un agente deformador un millón de veces más poderoso que la talidomida y un elemento cancerígeno potencial. Pero hasta que en 1970 las presiones de la opinión pública, estimulada por ecologistas y científicos, obligó al gobierno de los Estados Unidos a suspender la «Operación Plutón» ya habían sido desparramados sobre el Vietnam cerca de 70 kilos del «agente naranja».

En la Convención de Ginebra, donde se buscaba firmar un tratado para la erradicación de las armas biológicas, químicas y bacteriológicas, los Estados Unidos consiguieron que los «herbicidas» fueran catalogados como «defoliantes» y no como armamento químico.

En la desesperada y desigual lucha del pobre ex sargento Paul Reutershan con el gobierno de los Estados Unidos y contra la Dow Chemical fundó una organización denominada Agent Orange Victims International. Uno de los científicos que asesora a esta organización declara: «Es imposible afirmar con precisión la cantidad de dioxina que penetró en los tejidos del cuerpo de más de dos millones de soldados norteamericanos que pasaron por el Vietnam, pero la opinión nuestra es que esa cantidad fue lo bastante grande como para generar repercusiones devastadoras.»

Toda la ironía y el drama humano causado por esta especie de «bomba reloj» están contenidas en la frase que Paul Reutershan pronunció pocas horas antes de morir: «Yo ya morí en el Vietnam y ni siquiera lo sabía ... » («Penthouse International», V-1976. Martha Tarbell.)

La Política Ambigua de EE.UU .

El detonante para que en Estados Unidos se produjera una escalada incontrolable en el consumo de las drogas y, sobre todo, de la cocaína, fue la guerra del Vietnam.

La revista «Visión» nada sospechosa de antinorteamericanismo, afirma: «La contradictoria posición de los Estados Unidos. el mayor cliente mundial de las drogas, se expresa en que, por una parte, trata de frenar la producción y el tráfico, sobre todo en otros países, y, por otro, cierra los ojos y aun favorece a los productores y a los consumidores dentro de su propio país. Este hecho constituye el aliciente principal para el acelerado aumento del comercio ilícito.

Las propuestas para la legalización del uso de las drogas parece, finalmente, unta como mal menor o, cuando menos, de haber ganado la batalla y ya se apunta como mal menor o, cuando menos, de más bajo costo para la economía nacional. Todo hace suponer que en breve en los Estados Unidos el uso de las drogas será similar al uso del alcohol o del tabaco.

Hay otros estimulantes producidos legalmente en los Estados Unidos: el valium fue prescrito medicalmente; sólo en el año 1970, en 51 millones de recetas, habiéndose vendido en ese sólo año 32 millones de píldoras. En la actualidad esas

cantidades posiblemente se han duplicado. Alcanzan a millones y millones las ventas anuales de tranquilizantes, hipnóticos, antidepresivos y calmantes.

El alcoholismo le cuesta anualmente a Estados Unidos 45.000 millones de dólares, de los cuales 20.000 millones corresponden a pérdidas de producción, 16.000 millones a gastos de salud y servicios sociales y 5.500 millones a accidentes automovilísticos. Los automovilistas que conducen en estado de ebriedad dan muerte en atropellos a 30.000 personas anualmente y dejan malheridas a 120.000.

Tanto la heroína como la marihuana se pueden conseguir en cualquier barrio de las ciudades de los Estados Unidos. El único inconveniente para adquirir la cocaína es su alto precio, que llega a costar 2.200 dólares la onza.

En Estados Unidos se venden libremente manuales en los que se enseña al público consumidor dónde conseguir las drogas, cómo reconocerlas, cómo comprobar su calidad y cómo purificarlas. Con respecto a la cocaína el manual más conocido se titula «The Cocaine Hand Book».

Diez años de lucha en contra de las drogas han resultado un total fracaso debido, sobre todo, a que la política de Estados Unidos con respecto a los estupefacientes ha sido ambigua y, no pocas veces, contradictoria. («Res. Visión», 8-11-1982.)

Nota:

1. Dos «tambores» constituyen una «carga» (125 libras), que es la unidad de comercialización de la coca en Bolivia.